



PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DE CORDOBA



Por favor, solo imprima este documento si es absolutamente necesario.

Deán Funes 94 Tel: 0351-4203400

VERSIÓN TAQUÍGRAFICA

13º REUNIÓN

11º SESIÓN ORDINARIA

9 de abril de 2014

Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba.

ZEUS PLATAFORMA
LEGISLATIVA UNIFICADA

Poder Legislativo de la Provincia Córdoba.



–En la ciudad de Córdoba, a nueve días del mes de abril de 2014, siendo la hora 16 y 38:

-1-

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 47 señores legisladores, declaro abierta la 11ª sesión ordinaria del 136º período legislativo.

Invito la señora legisladora Verónica Gribaudo a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Gribaudo procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2-

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión taquigráfica de la sesión anterior.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-3-

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.

Tiene la palabra la señora legisladora Matar.

Sra. Matar.- Gracias, señor presidente.

Solicito que se incluya como coautor del proyecto 13765/L/14 al legislador Brouwer de Koning.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.

Sr. Brouwer de Koning.- Gracias, señor presidente.

Solicito que se incluya como coautora del proyecto 13760/L/14 a la legisladora Matar.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.

Tiene la palabra el señor legislador Echepare.

Sr. Echepare.- Gracias, señor presidente.

Solicito la inclusión de los legisladores Schiavoni y Vásquez como coautores del expediente 13715/L/14.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.

Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al proyecto 13717/L/14, por el que se reconoce la trayectoria y labor solidaria desempeñada por la "Asociación Clubes Argentinos de Servicio".

Quiero informarles que con motivo del tratamiento de este proyecto nos acompañan en el recinto el señor Hugo Palermo, presidente de la Asociación de Clubes Argentinos; la señora Ana María Sereno, el señor Oscar Novaira, el doctor Francisco Bessone, la señora Cristina Toriggia, el señor Carlos Costa, la señora María Teresa de Costa, la señora Nelly Sánchez, la señora Betty Paganini, el señor Daniel Villena, la señora Elvira Fumagali, el señor

Francisco Barrera; la señora Mariana Caserio, Vicepresidenta del ERSEP; y el señor concejal Adrián Lizarriturri, del bloque de Unión por Córdoba de Villa Carlos Paz.

Tiene la palabra la señora legisladora Alicia Narducci de Caserio.

Sra. Narducci.- Gracias, señor presidente.

Quisiera agradecer a la legisladora Laura Labat, coautora de este proyecto, y al legislador Marcos Sestopal, quienes por razones personales hoy no están presentes –la legisladora está en el Consejo de la Magistratura-, por permitirme representarlos en este día.

Por medio de esta Legislatura queremos brindar un gran reconocimiento a la trayectoria y a la meritoria labor solidaria que realizan a diario los miembros que integran la Asociación Clubes Argentinos de Servicio.

Esta asociación tiene como misión afianzar la soberanía argentina a través de la educación; por ello, promueve y desarrolla proyectos educativos, junto con acciones de apoyo social que sirven de base para mejorar la calidad de vida de los niños de las comunidades más alejadas.

Es una institución que reúne a los clubes argentinos de servicio, constituidos por personas de toda edad, que con autonomía y sin distinción de razas, credos o ideas políticas, trabajan en equipo aunando esfuerzos para construir juntos una Argentina mejor.

Distribuidos en las Provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y San Juan, realizan importantes actividades locales colaborando con autoridades municipales y provinciales, constituyendo verdaderos nexos de apoyo social y eslabones en la cadena comunitaria.

Nos sentimos orgullosos en esta ocasión muy particular, ya que miembros de esta Asociación están presentes en este recinto y, además, sentimos especial orgullo ya que ha sido elegido presidente, en este mes de abril, un ciudadano de nuestro Valle de Punilla, más precisamente, de Villa Carlos Paz. Me refiero al señor Hugo Palermo, quien junto a otros integrantes del Club Argentino de Servicio de Villa Carlos Paz han estado siempre presentes en las labores que la Asociación lleva a cabo a lo largo y ancho del país.

En igual sentido, dar a conocer que nuestra provincia de Córdoba cuenta con cuatro clubes adheridos, dos en esta ciudad de Córdoba, uno en Hernando y otro en la mencionada ciudad de Carlos Paz.

La Asociación de Clubes Argentinos de Servicio es la única ONG en la Argentina que se dedica a la construcción de escuelas de frontera. Por ello, el Programa Nacional de Construcción y Mantenimiento de Escuelas de Frontera es su gran obra: construir escuelas en las fronteras del país para que no quede un solo argentino sin asistir a clases, por más inhóspito que sea el lugar donde habita.

En las fronteras de nuestro país se afincan centenares de familias argentinas abocadas a las tareas propias de la zona, como el cultivo y recolección de tabaco, té y yerba mate.

Debido a que esos lugares se encuentran, generalmente, a decenas de kilómetros de los establecimientos educativos, los niños no pueden asistir a clases o deben recorrer esa distancia a pie o a caballo. Esta situación eleva el nivel de deserción escolar aumentando exponencialmente el analfabetismo. En algunos casos donde la frontera pisa límites muy cercanos con otros países, como sucede con Paraguay y Brasil, la intensa penetración cultural constituye otro factor que desdibuja los límites argentinos y, de esa manera, nuestra soberanía. En estos más de 30 años, los Clubes Argentinos de Servicio han inaugurado 15 escuelas en todo el territorio de nuestro país.

La primera escuela se construyó en 1986 en el paraje Presidente Illia, en la Provincia de Misiones. Esta colonia agrícola, ubicada a 32 kilómetros de la localidad de Dos de Mayo, ni siquiera figuraba en el mapa y contaba, en aquel momento, con 1.500 habitantes. Hoy esa comunidad triplicó sus habitantes y cuenta con una escuela secundaria, un jardín y un albergue estudiantil. En febrero de este año, se inauguró la Escuela de Frontera C.A.S. Nº 15, en el Paraje Picada Maderil – San Vicente, Provincia de Misiones, y siguen con muchas ansias de continuar con estas obras, que les abrieron las puertas del futuro a muchos argentinos.

Una vez construidas las escuelas, son donadas a las provincias o municipios donde fueron realizadas, comprometiéndose en ese acto a equiparlas con todo lo necesario para su funcionamiento y dotarlas del personal docente necesario, continuando con su asistencia y colaborando con las necesidades cotidianas de esos alumnos y docentes a través de un sistema de padrinazgo.

Este seguimiento fortalece la obra y genera un vínculo único que permite mejorar, día tras día, la situación social de esa comunidad, usualmente aislada y con recursos limitados. Anualmente, desde diferentes puntos del país, se reciben donaciones de vestimenta, calzados y útiles, como también material específico que solicitan los docentes.

Reforzando su misión educativa y con el fin de dar un impulso mayor a su misión, A.C.A.S. instauró “Becas de Estudio y Capacitación” para alumnos del nivel secundario, egresados de las escuelas de frontera C.A.S. Así, a través de la Asociación, se alienta y empuja a los jóvenes a seguir estudiando y creciendo para que, mejor preparados, cuenten con mayores posibilidades de insertarse en el campo laboral, convirtiéndose en un factor de cambio y progreso en sus propias comunidades.

Además de la creación de escuelas de frontera, han sido propulsores de distintas obras de servicio, tales como: inauguración y mantenimiento de guarderías infantiles, hogares de niños en tránsito y casas del niño, asistencia a comedores escolares, creación de bibliotecas municipales, mantenimiento de hogares de ancianos, donación de instrumentos ortopédicos y asistencia a discapacitados.

Debido a la importante función social que cumple la Asociación de Clubes Argentinos en todo el territorio de nuestro país, es que homenajeamos a todos sus integrantes por el esfuerzo y compromiso diario con el sector más necesitado de la sociedad.

Señor presidente: quiero cerrar este mensaje haciéndonos eco del decálogo de la Asociación y, en especial, al punto 2 del mismo que dice: “No esperes a que te pidan. Debes anticiparte a la necesidad del que pide”.



Gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración el proyecto 13717/L/14

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

Invito a la legisladora Narducci, a las autoridades de Cámara y a los presidentes de bloque, a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria.

—Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- A continuación le damos la palabra al señor Palermo.

Sr. Palermo.- Señor presidente, señores legisladores: en nombre de los Clubes Argentinos de Servicio quiero agradecerles esta distinción, este “mimo” que es para nosotros un empujoncito para que sigamos trabajando ya sea en nuestras localidades, apoyando a los colegios, jardines y hospitales, y también, como dijo la legisladora, en nuestras provincias llevándole un aula limpia a todos los niños que realmente lo necesitan.

Los invitamos a cada uno de ustedes a que cuando pasen por la provincias de Corrientes, Misiones, Formosa, Catamarca o San Juan, nos visiten y vean que en cada una de ellas tenemos una escuelita. Sería hermoso que las visiten porque, como decimos nosotros, siempre hay un antes y un después cuando uno visita una escuela y ve el cariño de esos chicos, su entusiasmo y sus cartitas, que realmente nos dan fuerzas para seguir trabajando y poder hacer cada vez más.

Muchísimas gracias a todos. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.

Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.

Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 113 del Orden del Día sea girado al archivo.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción efectuada por el legislador Busso, de enviar a archivo el proyecto correspondiente al punto 113 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.

Sr. Busso.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 26 a 29, 118 y 119 del Orden del Día, con preferencia para la 12ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador Busso, de vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 26 a 29, 118 y 119 del Orden del Día, con preferencia para la 12ª sesión ordinaria.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.



Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 12º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.

Sr. Busso.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 116 y 117 del Orden del Día, con preferencia para la 13º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador Busso, de vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 116 y 117 del Orden del Día, con preferencia para la 13º sesión ordinaria.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 13º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.

Sr. Busso.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 1 a 25, 30 a 112, 114, 115 y 122 a 139 del Orden del Día, con preferencia para la 14ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador Busso, de vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 1 a 25, 30 a 112, 114, 115 y 122 a 139 del Orden del Día, con preferencia para la 14ª sesión ordinaria.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 14ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Vamos a alterar el orden de los asuntos para dar tratamiento, en primer término, al proyecto de ley 13297/E/14, que cuenta con despacho de comisión desdoblado en tres leyes, la primera de las cuales ya fue aprobada por esta Legislatura, quedando las dos restantes para tratarlas en el día de la fecha.

Por Secretaría se dará lectura a la respectiva nota de moción de tratamiento sobre tablas.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 9 de abril de 2014.

Señora Presidenta de la

Legislatura de la Provincia de Córdoba

Cra. Alicia Mónica Pregno

S. / D.

De mi consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 13297/E/14, proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo, creando Fiscalías de Instrucción Móviles y Juzgados de Control de Lucha contra el Narcotráfico en las ciudades de Río Cuarto, Villa María y Cosquín; modificando la Ley 7826 –Ministerio Público Fiscal–; creando la Fuerza Policial Antinarcotráfico; y modificando las Leyes 9235 –Seguridad Pública– y 8123 –Código Procesal Penal.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Sergio Busso

Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Conforme a la resuelto en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, en primer término vamos a dar tratamiento a la primera propuesta de ley contenida en el despacho referida a la modificación de la Ley 7826, Ministerio Público Fiscal.

Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.

Sra. Trigo.- Señor presidente: tenemos en tratamiento el proyecto de ley 13297/E/14, presentado por el Poder Ejecutivo provincial durante el presente período legislativo, por el cual se propone crear Fiscalías de Instrucción móviles y Juzgados de Control en las ciudades de Río Cuarto, Villa María y Cosquín con competencia en la lucha contra el narcotráfico, introducir modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y crear la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

El citado proyecto fue desdoblado para su tratamiento y aprobación, separado en tres partes que se corresponden con los tres títulos que originariamente lo integraban. La primera parte, que se corresponde con el Título I del proyecto 13297/E/14, tuvo tratamiento en este recinto el 12 de marzo pasado dando origen a la Ley 10.191.

En el día de hoy estamos tratando los Títulos II y III del proyecto original, que fueran despachados por las Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Prevención de las Adicciones como dos leyes independientes. En mi caso voy a fundamentar las modificaciones a la Ley 7826, Orgánica del Ministerio Público.

Quiero referir brevemente que el Ministerio Público se encuentra previsto por nuestra Constitución provincial en los artículos 171 a 173; se ubica en la segunda parte de la Constitución referida a Autoridades de la Provincia en su Título I, Del Gobierno Provincial, Sección Tercera, Del Poder Judicial. La ubicación del Ministerio Público dentro del Poder Judicial estaba contemplada por la Ley 3364, Orgánica del Poder Judicial, pero la reforma constitucional del año 1987 introdujo un cambio importante al constitucionalizar el Ministerio Público reconociéndole una independencia funcional que hasta ese momento no tenía, tanto en relación a los órganos jurisdiccionales como a los Poderes políticos, tanto Ejecutivo como Legislativo, lo cual nos parece un avance importante para establecer perfectamente la división de Poderes.

Esta reforma también dio rango constitucional a la Policía Judicial ya que, entre las funciones del Ministerio Público, en el inciso 4) del artículo 172, incluye dirigir a la Policía Judicial. Estas pautas constitucionales posteriormente fueron reglamentadas a través de la Ley 7826 del año 1989, la cual nos proponemos modificar en el día de la fecha.

Se han introducido algunas modificaciones al texto original del proyecto, amén de la ya referida división para su aprobación como dos leyes separadas, tal como mencioné al comienzo. En este sentido, el despacho incorpora una estructura de la Policía provincial distinta a la propuesta originariamente.

Cabe destacar, señor presidente, esta modificación porque nos parecía muy oportuno a todos los señores legisladores tener prevista esta situación que había sido -si se quiere- pasada por alto en el proyecto original tal como vino del Poder Ejecutivo. El proyecto enviado creaba dos direcciones generales: la de Sumarios y Asuntos Judiciales y la de Policía Científica; en el despacho se incorpora una sola dirección general que coordina todo el trabajo de la Policía Judicial, la que cuenta en su estructura con cuatro direcciones: la Dirección de Sumarios y Asuntos Judiciales y la de Policía Científica -en el texto actualmente vigente de la Ley 7826 figuran como secretarías-, y las dos nuevas direcciones que replican dependencias ya existentes incorporadas a la Orgánica de la Policía Judicial por acordada del Tribunal Superior de Justicia.

En este sentido, en el año 2000, el Tribunal Superior dictó el Acuerdo reglamentario 530, Serie A, por medio del cual se creó la Secretaría de Instrucción Operativa, la cual se integra por el Centro de Investigación Criminal, más conocida por su sigla CIC, en el que se desempeñan detectives de la policía judicial, el Centro de Estudios Criminológicos, la Central del Registro de Información y la Oficina de Estadísticas y Enlace.

De esta manera, señor presidente, señores legisladores, creemos que se están jerarquizando estas dependencias al establecer, con rango de ley, la Dirección de Investigación Operativa y la Dirección de Análisis Criminal y Tecnología de la Información. Es importante destacar esta innovación porque propende a mejorar el servicio de Justicia dentro de lo que compete al Ministerio Público.

Como innovación, corresponde mencionar que el Director General de la Policía Judicial –a mi modo de ver es muy importante- será designado por los otros directores, así como los otros directores por el Fiscal General, pero permanece en su cargo mientras dure el mandato del Fiscal General y puede ser removido por éste en cualquier momento.

En cuanto a las nuevas direcciones incorporadas por la Ley Orgánica, la Dirección de Investigación Operativa coopera con la investigación criminal en los casos que le sean requeridos por los fiscales de Instrucción u otros magistrados o funcionarios competentes del Poder Judicial, y participa en las etapas del proceso que le sean requeridas a través del Director General de la Policía Judicial, conforme a la legislación vigente.

Por su parte, la Dirección de Análisis Criminal y Tecnología de la Información obtiene y analiza los datos fácticos suficientes para poder establecer comportamientos criminales, fijar un mapa del delito, diseñar políticas de persecución criminal, y todo otro dato que procure a la optimización de la investigación penal.

Quiero mencionar, señor presidente, que esta modificación es un aporte indispensable para el perfecto funcionamiento del Ministerio Público y el cumplimiento de los objetivos que debe tener porque mejora sus servicios. Tal es así que fue vertido por el doctor Alejandro Moyano -con la presencia del propio Fiscal General-, quien fue muy explícito al manifestar y recomendar esta clase de modificaciones.

Dejando el tema de la Policía Judicial, debemos destacar como novedad la creación de dos direcciones generales que se incorporan como auxiliares del Ministerio Público, en el artículo 39 de la Ley 7826. Por un lado, la Dirección General de Administración y Recursos Humanos, que ejerce la administración de los recursos materiales y humanos del Ministerio Público; el director debe reunir los requisitos establecidos por el artículo 10º de la Ley 9086, de Administración Financiera. Esta disposición se encuentra relacionada con la incorporación del inciso 22) al artículo 16 de la ley 7826.

En lo que hace a las funciones específicas del Fiscal General, cuando establece que ejercerá la superintendencia del Ministerio Público, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponde al Tribunal Superior de Justicia, sin duda, estas disposiciones apuntan a fortalecer y dinamizar la independencia orgánica del Ministerio Público, consagrada en el artículo 1º de la referida ley.

Por otro lado, se crea la Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional, que también está a cargo de un Director General y un Director. Este Director General, si me lo permite y vale la redundancia, al igual que el de Administración y el de Policía Judicial, permanece mientras dure el Fiscal General y puede ser removido en cualquier momento. Esta Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional tiene a su cargo las tareas de organización, coordinación, distribución y colaboración con las autoridades de otras

jurisdicciones -provincial, nacional, federal e internacional- que deban analizarse a través de la Policía Judicial. Todo pedido de actuación de la Policía Judicial se canalizará a través de esta Dirección General, con la consiguiente autorización del señor Fiscal General de la Provincia.

Esta disposición se relaciona también con el artículo 10 del despacho del presente proyecto, que será puesto en consideración de este Cuerpo, que es la creación de la Fuerza Policía Antinarcotráfico, cuando expresa que los miembros de esta Fuerza se encuentran obligados a prestar colaboraciones con las autoridades de otras jurisdicciones en el marco de la normativa vigente y los convenios que al respecto se suscriban. A tal efecto, no podrán acatar en forma directa órdenes emanadas de dichas autoridades, y esto me parece importante subrayarlo, sin el previo conocimiento e intervención de la Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional de la Fiscalía General. La falta de cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior será considerada una falta grave.

Señor presidente, ¿será posible pedir un poco de silencio?

Sr. Presidente (Gutiérrez).- A los legisladores y asesores, les pido que hagan silencio.

Continúe en el uso de la palabra, legisladora.

Sra. Trigo.- Muchas gracias, señor presidente.

En este punto, voy a citar textualmente el mensaje de elevación del proyecto de ley cuando refiere expresamente: “sabido es que funcionarios jurisdiccionales nacionales, federales y de otras provincias e, incluso, internacionales, conforme lo autoriza la Constitución Nacional y los tratados internacionales que ha celebrado la Nación con otros países u organizaciones internacionales, refieren la intervención y colaboración en las causas que se encuentran sometidas a su conocimiento al personal de la Policía Judicial o de la Policía Administrativa, y que a partir de la aprobación de la presente iniciativa de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, en la realización de actos de investigación de procedimiento de instrucción”, etcétera.

Cabe destacar que en este momento, en donde toda la ciudadanía está sensibilizada acerca del cumplimiento de las funciones y tareas de los diferentes órganos del Estado, llámese Justicia en cualquiera de sus niveles, nos parece muy importante esta clase de modificaciones porque, como dije anteriormente, hace a la eficacia, cumplimiento y persecución una vez que el delito ya fue cometido.

No obstante la obligación que tiene la Provincia de brindar cooperación en lo que se refiere a la lucha contra el delito y en las especificaciones que se plantean en el ámbito jurisdiccional, esta ayuda debe ser prestada a través de los canales institucionales que mencioné anteriormente en forma organizada y coordinada, respetando la autonomía provincial y la subordinación de los agentes encargados de realizar dichos actos de colaboración con las autoridades locales de las que dependen.

La Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional que depende, como mencionaba anteriormente, del Fiscal General en forma directa, viene a solucionar y ordenar la problemática que se viene presentando en este ámbito.

Por último, quiero mencionar las modificaciones e incorporaciones que se realizan en el artículo 16 de la mencionada Ley 7826, referido a las funciones del Fiscal General.

Por un lado, la sustitución del inciso 15, que ahora prevé directamente la designación de los miembros suplentes e interinos y demás integrantes del Ministerio Público cuya designación no fue acordada a otra autoridad, quiero recordar que el inciso actual reza: “proponer los miembros suplentes e interinos, los que serán designados por el Tribunal Superior de Justicia”.

También esta exposición viene a reforzar la independencia funcional del Ministerio Público; se incorporan, por un lado, las nuevas facultades que se relacionan con la Fuerza Policial Antinarco tráfico, y, por el otro, el ya mencionado inciso 22, referido al ejercicio de la Superintendencia del Ministerio Público.

Creo que he pasado revista por las principales novedades que trae el proyecto en relación al funcionamiento del Ministerio Público. Como decía al comienzo de mi alocución, señor presidente, en comisiones se planteó por los diferentes legisladores en forma diferenciada. Creemos que el Ministerio Público tuvo recepción constitucional en nuestra Provincia en 1987, es decir, siete años antes que tomara rango constitucional a través de la reforma de la Constitución nacional de 1994, que consagra al Ministerio Público de la Nación como un órgano extrapoder, en su artículo 120, abandonando la tradición nacional de que esta institución dependiera del Poder Ejecutivo y, con ello, quedara viciada de subjetividad, justamente lo que nosotros necesitamos que desaparezca de la percepción ciudadana: que nuestra justicia hoy no es independiente.

En nuestra Provincia prevaleció durante la Convención Constituyente la corriente de opinión que creía más conveniente mantenerlo dentro del Poder Judicial...

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Le voy a rogar a los señores legisladores que hagan silencio.

Adelante, señora legisladora.

Sra. Trigo.- Muchas gracias, señor presidente.

En el año 1989 se dictó la Ley 7826, Orgánica del Ministerio Público, que reglamentó la previsión constitucional y, pocos años después, en el año 1991, se sancionó la Ley 8123, estableciendo el nuevo Régimen Procesal Penal de la Provincia que otorga un rol protagónico a los fiscales de instrucción durante la investigación penal preparatoria.

Sin duda, señor presidente y señores legisladores, las circunstancias han cambiado mucho desde aquellos tiempos; la realidad del delito –y a esto todos lo sabemos- adquiere distintos ribetes todos los días y se transforma en un desafío permanente para todos los

órganos estatales encargados de la defensa del interés público y de los derechos de las personas, así como también la persecución del delito y de los delincuentes cuando fuera pertinente. Por lo tanto, necesitamos garantizar que todo el proceso de investigación a través de la fiscalía cuente con todas las herramientas tanto en recursos humanos como tecnológicos y presupuestarios para que estos fines puedan ser cumplimentados.

Estas modificaciones que se propician buscan aumentar la capacidad de respuesta del Ministerio Público bajo una dirección que haga operativos los principios de unidad orgánica y de subordinación jerárquica constitucional consagrada en los artículos 2º y 4º de la Ley 7826, respectivamente, aumentado la facultad del Fiscal General. Naturalmente, esto conlleva el aumento de su responsabilidad ya que adquiere un nuevo protagonismo en el manejo de recursos humanos y financieros, y que cuenta en su dependencia con funcionarios que acompañan su mandato, a los cuales puede remover cuando lo considere oportuno.

Ha pasado mucho tiempo desde la época en que se consideraba al Fiscal General como parte del Tribunal Superior de Justicia. Creemos, señor presidente, que se trata de un conjunto de disposiciones que importan un fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal y que buscan dar respuesta a una realidad delictiva que en la actualidad está en el centro de las preocupaciones de la ciudadanía, y que los esfuerzos de las distintas esferas del Gobierno, tienen que estar necesariamente orientados al cumplimiento de esos fines.

Sin más, agradeciéndole, señor presidente, la atención dispensada por usted y por todos los señores legisladores, adelanto el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba a la presente iniciativa y solicito a los restantes bloques que también la acompañen.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora María Fernanda Leiva.

Sra. Leiva.- Gracias, señor presidente.

En verdad, más que hablar de modificaciones en la Ley 7826 del Ministerio Público Fiscal, le daría el título de aprovechamiento del Gobierno de la Provincia de Córdoba de la modificación de la Ley del Ministerio Público Fiscal. Aprovechamiento que viene ya de la designación de algunos de los fiscales.

-Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Recuerdo que cuando la doctora Cáceres de Bolatti pasó a reemplazar momentáneamente –lo que hizo, en realidad, durante mucho tiempo- en su función al Fiscal

General, y después de reiterados reclamos de la oposición para que fuera designado el Fiscal General -pero no por un decreto del Ejecutivo provincial, sino dentro de los parámetros que la ley establece para la designación de un fiscal general que tiene a su cargo, nada más y nada menos, que la defensa del interés social, del respaldo y defensa de los derechos personales- y elegido conforme lo prevé la ley, recién ahí el Poder Ejecutivo provincial envió una terna.

¿Por qué digo “aprovechamiento”? Porque dentro de esa terna aprovechó para incorporar al doctor David. Entre el doctor Moyano y la doctora Hillmann dijeron: “ahora que la oposición está solicitando la designación del fiscal general, aprovechemos y metamos a David.” Y estaba escondido en la asesoría; pero la verdad es que lo tendrían que haber dejado escondido.

Recuerdo que lo miraba con asombro al legislador Cid porque tuvo que estudiar, preparar y pelarse las pestañas para defender lo indefendible y fundamentar la designación del doctor David. Muy estudioso el legislador, lo quiero recalcar. ¿Y por qué digo que lo miraba con asombro y perpleja, pensando ¡pobre legislador!? Porque la verdad que defender a un vago recalcitrante como el doctor David para desempeñar tan importante función en el Ministerio Público Fiscal, me generó bastante lástima porque el legislador tuvo que gastar varias horas de su tiempo en estudiar para defender lo indefendible.

Entonces, sumado a ese aprovechamiento en la designación de tan importante función -que tiene a su cargo, nada más y nada menos, que la defensa del interés social, de los derechos de las personas, de la acción pública fiscal-, metieron al doctor David.

Ahora, siguiendo en la misma línea de aprovechamiento, modifican el Ministerio Público Fiscal con la excusa -como lo expresó la legisladora que me precedió en el uso de la palabra- de “aumentar la capacidad de respuesta”. Pero, ¡no!, no están aumentando la capacidad de respuesta, lo que están aumentando son los cargos políticos jerárquicos en el Ministerio Público Fiscal. Las modificaciones que introducen son cambios de palabras, de comas, de verbos que no modifican en nada la función fundamental del Fiscal General.

Lo que antes hacía la Policía Judicial –y que lo viene haciendo hasta la fecha a través de la Secretaría de Sumarios y de la Policía Científica- lo han desdoblado en Direcciones, con palabras dignas a los oídos: Dirección de Sumarios, Dirección de Asuntos Judiciales, Dirección de Investigación Operativa, Dirección de Análisis Criminal. ¡Guau! Direcciones Generales y, por debajo de estas, otras direcciones y, por debajo, creaciones de áreas sometidas a reglamentación y que la va a realizar el Fiscal General. Por lo tanto, no sabemos qué cantidad de áreas van a crear. Cargos y más cargos y más cargos.

Entonces, con este verso de modificación de la Ley de Ministerio Público, con el verso de “dar respuestas a la inseguridad” blanquean cargos en los que ustedes van a participar en la designación, y pretenden que nosotros acompañemos esa modificación.

En el artículo 3º, los tres primeros incisos de la modificación hacen referencia a las funciones de Fiscal General con respecto a la Policía Antinarcostráfico. Crean la Policía Antinarcostráfico dependiente del Fiscal General, lo que le genera a éste un cambio en la función. De ahí para abajo, lo que no tiene que ver con Policía Antinarcostráfico ya estaba en la ley anterior. Artículo 3º del proyecto, funciones del Ministerio Público Fiscal: “dirigir la Policía

Judicial”, los incisos 22 y 23 no hacen más que repetir lo que ya estaba en la legislación anterior, artículo 21, inciso 21), y en la 7826, inciso 9): “dirigir la Policía Judicial”; y así siguen los otros: ejercer la Superintendencia; reemplazar al director que tiene la Policía Judicial.

Artículo 4º, qué bárbara esta modificación: Dirección General de la Policía Judicial, antes era Dirección, le agregaron “General”, con eso vamos a atacar la inseguridad de la Provincia.

¿Qué hacen después? generan dos direcciones más: la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Coordinación Interjurisdiccional. En el próximo artículo blanquean cuatro direcciones más, dependientes de otra Dirección General y, a continuación, explican las funciones del Director General a cargo de la Policía Judicial, que no hacen más que repetir cambiando las palabras, pero en definitiva dice lo mismo, las funciones que a la fecha desempeña con mucho esfuerzo y profesionalidad la Policía Judicial.

Dirección de Sumarios de Asuntos Judiciales, antes era una Secretaría, ahora generan una dirección dependiente de una Dirección General; Dirección de Policía Científica, que tiene a su cargo la cooperación técnica criminalista, y cuando habla de la Dirección de Investigación Operativa, dice: “coopera con la investigación criminal.” Es lo mismo, todos participan y coadyuvan a la investigación criminal en la investigación preparatoria que lleva a cabo el Fiscal: es lo mismo, pero se agrega en el artículo 69 como diciendo estamos innovando”. Dice que la Dirección de Policía Científica tiene a su cargo la cooperación técnica criminalística necesaria para el ejercicio de las funciones del Ministerio Público en cumplimiento del artículo 302; ¿qué dice el artículo 302?, habla de la finalidad que tiene el Fiscal, que en la investigación penal preparatoria es reunir las pruebas. Pero si eso es obvio, en la investigación penal se reúnen las pruebas y en la recolección de esas pruebas se somete en mutuo a la investigación y al análisis de la Policía Judicial; no hacen nada, no modifican nada.

En el artículo 70, cuando hablan de la investigación, expresamente establecen lo mismo que antes llamaban “gabinetes”. Los mismos gabinetes que actualmente tiene la Policía Judicial: Medicina y Química Legal, Reconstrucción Criminal y Física Mecánica. ¿Qué le sacan?, la explicación técnica legales a lo que se aboca cada una de estas áreas, que queda eliminada, esa es la modificación que hacen.

Por ejemplo, cuando hacen referencia a la integración de la Policía Científica, la Física Mecánica o a la Reconstrucción Criminal, en esta Reconstrucción Criminal la ley anterior explicaba a qué se refería: huellas, rastros; a eso lo sacan, pero el resto sigue igual.

Señor presidente: estas excusas y estos aprovechamientos que ustedes hacen de esa sensación social en materia de drogas, en materia de seguridad, designando amigos del poder en lugares estratégicos y haciendo creer que generan modificaciones que, en realidad, no las son, que tiene el único objetivo de crear cargos que, por un lado, los crean y, por el otro lado, les niegan a los empleados del Poder Judicial el reclamo justo del aumento de sus salarios.

Entiendo, es un acuerdo con el Poder Judicial; entonces dijeron: “mirá, te aprobamos la licencia de los magistrados con goce de haberes y me das unos carguitos más en la Policía Judicial; uno para ustedes, uno para nosotros”. Esas son las modificaciones que acuerdan ustedes y que van a introducir en el Ministerio Público Fiscal.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.

Sra. Frencia.- Señor presidente: realmente es preocupante la concentración del poder en manos del Fiscal General que desarrolla esta modificatoria de la ley.

No considero que sea una ley inocua, una maniobra política solamente –que sin duda lo es-, sino que se trata del esfuerzo del Gobierno provincial y del Poder Ejecutivo de tratar de cerrar una crisis política abierta con el estallido de la Narcopolicia. ¿Y cómo lo pretende hacer?, otorgándole superpoderes al Fiscal General, que no es ni más ni menos que un funcionario político colocado por el Poder Ejecutivo de turno.

Lo expliqué cuando se votaron los pliegos: los métodos de elección le brindan al Poder Ejecutivo la garantía de imponer sus fiscales. Pero con este proyecto va más a fondo, porque le da la potestad de manejar arbitrariamente y discrecionalmente las competencias territoriales y materiales, donde cada uno de los Fiscales Adjuntos opera, y sacárselas y ponérselas cuando quiera. Es decir que abrirá una especie de “delivery” de casos, donde puedo decir “este caso corresponde a tal Fiscalía, este caso corresponde a tal otra Fiscalía”. Peor, la discrecionalidad se aumenta porque ya no es solamente la recomendación del Fiscal General, la designación de los suplentes interinos y el resto de los miembros del Ministerio Público, sino que directamente los designará. De alguna forma, se está blanqueando una situación que de hecho era así, porque era “a propuesta de” y finalmente la propuesta terminaba siendo aprobada sin más objeciones por el ente competente.

Es decir que hay una avanzada en la concentración del poder sobre un problema muy delicado, porque por manos del Fiscal General y de las Fiscalías Adjuntas pasan casos muy graves. La proclamada independencia política de los poderes –que acá tanto se defiende y tanto se dice avanzar con esta legislación y demás-, está siendo brutalmente avasallada con esta modificatoria, no solamente por esto que digo sino porque tiene un objetivo político concreto que atiende a una coyuntura actual –mencionada al principio-, tratar de cerrar un cuestionamiento a una fuerza policial corrompida, a una justicia corrupta y a un poder político cuestionado socialmente por sus estrechas vinculaciones con las redes delictivas y, en particular, con el narcotráfico.

Se les está otorgando plenos poderes para actuar sobre el problema del narcotráfico a personajes realmente cuestionados. Rechacé los pliegos de estos fiscales no solamente por el método de elección –que expuse reiteradas veces- sino porque particularmente estos personajes están cuestionados fuertemente.

El fiscal Moyano -el Fiscal General que hoy va a tener los poderes discrecionales de manejar las fiscalías adjuntas y los casos que pasan por esa fiscalía como quiera- estuvo

fuertemente cuestionado por su rol como fiscal en el caso de Facundo Rivera Alegre, un caso ligado al narcotráfico, a la complicidad policial.

Pero peor aún, la fiscal Hillman está denunciada por el conjunto de los vecinos de Punilla de ser responsable de cajonear y de amparar casos de “suicidios en masa”, y lo digo entre comillas porque los suicidios de los chicos que se producen en Punilla son asesinatos impuestos por la Policía, como son los casos de Jorge Reyna, de Brian Palomeque, y esta fiscal está cuestionada por cajonear estos casos, por amparar a la Policía que ha “suicidado” a estos chicos. Todos casos ligados al narcotráfico porque estos pibes eran los que tenían que hacer de mano de obra barata de la Policía para vender la droga, y cuando se rehusaron, ahí están, ahorcados en una comisaría, en un barrio perdido en La Falda.

Y le damos poderes a ese tipo de fiscales para que intervengan en los casos del narcotráfico. ¡De ninguna manera!

Acá lo que se está haciendo es tejer un manto de impunidad sobre las redes del narcotráfico, sobre el crimen organizado, sobre las redes de trata de personas y sobre el lavado de dinero, que está íntimamente ligado al narcotráfico porque ¿a dónde va a parar toda la plata del narcotráfico?

Entonces, la concentración de poder en el Fiscal General -agente del Poder Ejecutivo- trata de salvar un régimen corrupto, descompuesto, de tapar los cabos sueltos que tienen por ahí y de, por supuesto, seguir descargando un régimen judicial sobre los sectores más desposeídos para terminar metiendo preso a cualquier pibe que vende droga producto de una descomposición social profunda.

Paso a señalar algo más que había olvidado. Hay cuestiones como que se agregan nuevas direcciones, nuevas facultades, nuevos funcionarios, y uno diría que es un avance porque es una profesionalización del rol del Ministerio Público, pero no se explica cómo va a llevar adelante esto.

La crisis presupuestaria que atraviesa la Policía Judicial, denunciada por los propios trabajadores de esa repartición, es vergonzosa. Tienen que recoger las muestras en bolsitas de supermercado. Entonces, ¿qué quieren hacer aprobando estas nuevas direcciones, nuevos funcionarios, nuevo personal jerárquico si después no ponen los recursos para que la Policía Judicial, encargada de llevar adelante las investigaciones necesarias sobre crímenes y delitos sumamente delicados para la población, cuente con los recursos materiales?

Realmente, creo que ni siquiera en los aspectos que dice avanzar, efectivamente avanza. Por el contrario, considero que es una maniobra de encubrimiento y por lo tanto vamos a rechazar de plano esta ampliación de facultades y de poderes al Fiscal General y, por supuesto, al Poder Ejecutivo porque con esto, una vez más, avanza en la subordinación de la Justicia a su arbitrio.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a adelantar el voto afirmativo a los proyectos en tratamiento y a los efectos de hacer saber que creo que, con todos los defectos que podamos encontrar en esto, peor de como estamos no vamos a estar. O sea, todo lo que se haga para tratar de salir de la situación en la que estamos es alentable, y creo que si hay un sistema de selección por concurso vamos a nutrir a esa escuela de formación, que va a ser la base de la Policía, y a lo mejor de nuestra juventud, si los concursos se hacen como corresponde.

Me consta que desde hace un tiempo en el Poder Judicial los concursos se hacen con toda corrección, lo que me hace pensar que la Policía Antinarcóticos se va a nutrir de lo mejor de nuestra gente que quiera ser parte de ella.

En lo relativo a la reforma del Ministerio Público, y en lo que respecta a la Policía Judicial en particular, lo apoyamos. A eso me voy a referir más extensamente cuando nos aboquemos a la ley que trataremos a continuación de ésta.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Rodrigo De Loredó.

Sr. De Loredó.- Señor presidente: es para adelantar el voto afirmativo del bloque de la Unión Cívica Radical.

No íbamos a hacer uso de la palabra en el tratamiento de este proyecto porque nos parece que sobran las palabras, como sobran –más aún en estos últimos tiempos- las reformas legislativas. Honestamente, interpretamos que las reformas al Ministerio Público no traen aparejados cambios estructurales que se puedan cotejar con consecuencias reales y prácticas, y que con la legislación vigente alcanzaba para cumplir los objetivos que se plantean en estas reformas.

Dicho esto, el bloque de la Unión Cívica Radical quiere dejar en claro este concepto: estas son las herramientas que sugieren ustedes y que necesitan para dar pasos firmes en una situación que nos ha depositado en uno de los peores momentos, como bien ilustrara el legislador preopinante. Ustedes consideran que son las herramientas idóneas y el bloque de la Unión Cívica Radical está dispuesto a acompañarlas, pero esperemos que más tarde no tengamos que verificar lo que sucede con montañas de reformas legislativas que se apilan y no traen aparejadas consecuencias prácticas y reales.

Nos piden esta herramienta, la acompañamos y la ponemos a su disposición.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Pretto.

Sr. Pretto.- Señor presidente: quiero adelantar el voto afirmativo del proyecto en tratamiento.

Como acaba de manifestar el legislador preopinante, las iniciativas sobran, los proyectos de modificaciones de leyes también, pero en este caso entendemos que, si bien no

es una gran modificación a la estructura del Ministerio Público, vale la pena conceder el beneficio de la duda de que puede contribuir a mejorar su funcionamiento.

Como ya lo he manifestado en otra oportunidad con proyectos relacionados a la cuestión de la seguridad, con relación al inciso 20 -que queda incorporado por el artículo 3º- que hace referencia a que el ministerio tiene a su cargo “la escuela de formación y capacitación de la fuerza policial antinarcótico”, considero que la formación en este tipo humano altamente especializado que necesita la Provincia es el nudo gordiano de la situación, por eso hago votos para que el Gobierno ponga allí el máximo empeño y destine los recursos suficientes y necesarios para que la formación sea la adecuada y, de esta manera, tengamos los mejores hombres puestos al servicio del mejor funcionamiento de esta Fuerza.

En cuanto a la Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional, todos esperamos que también funcione de modo que tengamos el mejor servicio con el que podamos contar en este sentido.

Por estas razones es que adelanto el voto positivo.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador De Lucca.

Sr. De Lucca.- Desde el bloque del Frente para La Victoria vamos a acompañar el proyecto de ley 13.297, pero antes queremos verter algunos conceptos.

La crisis policial que vivimos el año pasado, que tomó el nombre de “narcoescándalo” y debilitó fuertemente la confianza ciudadana en la fuerza, nos ha dejado una señal muy importante, una señal al pueblo de toda la Provincia de Córdoba, una señal a todos: “hacer algo, encarar el problema”.

La creación de la Fuerza Policial Antinarcótico parece ser una medida efectiva para el control del narcotráfico; por tal razón, vamos a acompañar el proyecto de ley. Pero creemos conveniente analizar dos artículos –simplemente analizarlos-: el 35, que dice: “Hasta tanto se complete el cuadro de agentes que integren la Fuerza Policial Antinarcotráfico, el Fiscal General podrá solicitar la comisión de personal que se desempeña actualmente en la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de la Provincia ...”

Sr. Presidente (González).- Perdón, señor legislador; sólo quiero recordarle que estamos tratando la modificación del Ministerio Público Fiscal; posteriormente vamos a tratar la creación de la Policía Judicial Antinarcotráfico.

Continúe en el uso de la palabra, señor legislador.

Sr. De Lucca.- Sí, ¿pero puedo seguir con el planteo?

Sr. Presidente (González).- Sí, por supuesto, legislador.

Sr. De Lucca.- Consideramos importante la creación de esta nueva fuerza y su alineación dentro del Poder Judicial; pero, para hablar de un cambio realmente efectivo, creemos que las personas que integren la nueva fuerza no deberían ser las mismas que estaban en la fuerza anterior. Si bien entendemos que es difícil de un día para otro integrar de recursos humanos la Fuerza Policial Antinarcostráfico, no apoyamos la idea de que sean los mismos agentes los que la integren, de modo que el cambio de instituciones que se pretende no devenga en los hechos estéril, siendo un cambio de maquillaje, de nombre y de Poder dependiente.

Respecto del artículo 36, que dispone: “El Fiscal General, una vez designadas las autoridades de la Fuerza Policial Antinarcostráfico y comisionado el personal en los términos del artículo anterior, determinará hasta cuándo la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de la Provincia de Córdoba continuará ejerciendo sus funciones”, consideramos que la norma establece una potestad abierta en manos del Fiscal General y, dada la relevancia del proyecto, nos hubiese gustado ver la posibilidad de establecer un plazo en el que el Fiscal General determine que la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico deje de ejercer sus funciones, otorgando un tiempo prudencial para que los miembros de la anterior fuerza dejen gradualmente de pertenecer a la nueva Policía Antinarcostráfico.

En lo que respecta al resto de este proyecto de ley 13297, lo acompañamos, a pesar de tener algunas dudas en los artículos que hemos mencionado.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.

Tiene la palabra el señor legislador Birri.

Sr. Birri.- Gracias, señor presidente.

La modificación de la Ley 7826, de Ministerio Público Fiscal, se encuentra dentro del paquete de iniciativas vinculadas a la decisión política del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba de involucrarse directamente, incluso otorgándose competencia en el marco de lo que fue la ley nacional denominada “de Desfederalización en la Investigación y Represión del Narcomenudeo”.

La reestructuración del Ministerio Público Fiscal, por lo tanto, está directamente vinculada a esa decisión de involucrar al Poder Judicial no solamente en la investigación y represión –diría- sino también en la elaboración de políticas públicas de lucha contra el narcotráfico.

Por los argumentos de los que daré cuenta en ocasión de tratarse la creación de la

Fuerza Antinarcotráfico, voy a votar afirmativamente este proyecto de ley.

Como expresaré luego, sigo teniendo una mirada crítica sobre la decisión del Gobierno provincial de otorgarse competencia en un aspecto de la lucha contra el narcotráfico. Sigo creyendo que lo mejor es una política de descentralización y no de fragmentación. No obstante, -y puesto en la balanza, como en oportunidad de la sanción de la Ley 10.067-, acompaño la decisión por ser un esfuerzo -el tiempo dirá sobre su eficacia o no- para involucrarse en este verdadero flagelo que azota, fundamentalmente, a nuestros niños y jóvenes en la República Argentina.

Por lo tanto, dejo consignado mi voto favorable en general con relación al proyecto en tratamiento, que tiene que ver con los artículos 1º, 2º y 3º; pero tengo otra mirada para el resto del articulado.

Hace poco tiempo, a fines del año pasado, en una reunión de trabajo un instituto muy prestigioso, al cual trato de aportar algunos elementos jurídicos de debate y análisis, como es el INECIP, resaltábamos la importancia de una reforma de la Dirección de Policía Judicial de Córdoba para no perder el rumbo en el sentido de lograr una investigación penal-judicial que sea, desde el primer momento, eficiente, eficaz, y acorde al sistema constitucional republicano, de separación de funciones y de derechos y garantías de los ciudadanos.

Analizando este proyecto de ley, excepción hecha de los tres primeros artículos que están específicamente vinculados al otorgamiento de funciones al Ministerio Público Fiscal en la lucha contra el narcotráfico, me parece que no encuentro razones ni argumentos que me permitan señalar que este proyecto de reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal logre los objetivos que acabo de enunciar.

Si a eso le sumamos algunas cuestiones particulares, como ser que se omite, por ejemplo, hablar de la actual Secretaría de Instrucción Operativa de la Dirección de Policía Judicial, que en su seno alberga al Centro de Investigaciones Criminales, en otras palabras, a los detectives de la Policía Judicial, nos hace pensar, razonablemente, o inferir de su lectura, que éstos desaparecerán o, al menos, perderán la necesaria jerarquización o impulso.

Por otro lado, creemos que se podría haber avanzado en la creación de una verdadera fuerza de investigación judicial dentro de la Policía Judicial, tan necesaria para continuar con lo que, en algunos ámbitos, se llama la despolicialización de la investigación prejudicial.

Por estos argumentos, quiero consignar mi voto positivo en general y negativo en particular a partir del artículo 4º.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.

Tiene la palabra el señor legislador Cid.

Sr. Cid.- Señor presidente, voy a puntualizar tres cosas. Pero antes quiero aclarar -porque me parece que formaba parte de otra discusión- lo que se dijo con mucha agresividad respecto de “narcotráfico”, “narcoescándalo”, “homicidio”, etcétera, no bien se hizo mención al tema, -creo que fue la legisladora de la Izquierda Unida, criticando el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.

Quiero decirle, señor presidente, que todos los casos que tuvieron ventilación pública donde hubo involucrados policías jerárquicos de la Provincia, el fuero que intervenía en esas causas era el fuero federal. No existe una sola causa, un solo faltante de droga, un solo procedimiento judicial denunciado o puesto en tela de juicio dentro de lo que es el Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico que hace poco creara la Legislatura provincial.

Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador Cid, la legisladora Frenia le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Cid.- Cómo no se la voy a dar.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Frenia.

Sra. Frenia.- Muchas gracias.

Primero, es para instruir al legislador Cid, soy la legisladora Cintia Frenia del bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores.

En segunda instancia, hice referencia a casos concretos que están en la Fiscalía de Cosquín, que están siendo investigados y llevados adelante por la Fiscal Hillman, hasta el momento, y que con estas nuevas reestructuraciones vamos a ver en manos de quien quedan. Son casos en la Justicia provincial que están cuestionados por el conjunto del pueblo y de los sectores populares del Valle de Punilla, que es vox populi su vinculación con el cajoneo y armado de causas; eso por un lado.

Por otro lado, considero que el legislador Cid tendría que prestar más atención a cuáles son sus compañeros de recinto.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Cid.

Sr. Cid.- Señor presidente, a través suyo le digo a la legisladora Frenia que, en primer término, como se han cambiado tantas veces de nombre, es difícil acordarse de cuál es el último; pero tiene razón, va a haber que estudiarlo.

En segundo lugar, le digo que hasta la creación del Fuero Móvil de Lucha Contra el Narcotráfico, no existía ningún Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico en la Fiscalía de Cosquín; se creó recientemente y todavía no ha sido ocupado. Seguramente, en los próximos días se ocupará esa Fiscalía que no ha sido ocupada. A esto lo digo porque me instruí.

En tercer lugar, si tiene tantos datos e información respecto de los funcionarios judiciales, nada obsta a dos cosas: ir y hacer la denuncia judicial, y colaborar como funcionaria pública que es –por su intermedio, señor presidente, se lo digo a la legisladora–; es decir, presentar la denuncia penal y, en su caso, pedir un jury de enjuiciamiento contra los magistrados que ella estime que corresponda.

En el segundo caso, también sería bueno que cuando la legisladora hable se instruya –no lo iba a decir, pero a la legisladora le presté atención–, porque hizo alusión a la concentración de atribuciones que le estamos otorgando al Ministerio Público Fiscal. En este sentido, quiero aclararle que el tema de fondo es darle autonomía al Ministerio Público Fiscal, es decir, desde el vamos, estamos tratando de darle mayores atribuciones de las que hasta el momento no disponía para que cuente con autonomía.

Pero, en lo que respecta a lo dicho por la legisladora, de que el Fiscal General va a delegar competencias como le parece, etcétera, lo que tengo para decir es que no leyó el viejo artículo 5º –porque ella se está refiriendo a ese artículo–, el que ya decía: “El Fiscal General delega la competencia material y territorial en que actuarán, de modo permanente, cada uno de los Fiscales Adjuntos,...”. Es decir, la atribución de delegaciones de facultades en el artículo que está haciendo mención ya existía en la potestad del Fiscal General respecto de los que forman parte de la Fiscalía General.

Vamos a analizar otro punto que se mencionó acá: porque creo que el objetivo es darle mayor autonomía a la Fiscalía General, al órgano que se encarga de la represión criminal –que es parte de un proceso–, y del cual se dijo que se crean más cargos. En este sentido, señor presidente, le voy a decir lo siguiente: ¿saben cuántas direcciones de más se crean respecto de las ya existentes? Una sola, porque existen las mismas que establecía la normativa anterior; hay dos más que no existen en la ley anterior y que fueron creadas por acordada –lo que se llama CIC– en el año 2000, y se crea sólo una dirección más.

Hicieron mención al artículo 70, en cuanto a cómo estaba y cómo está hoy, cuáles son las áreas. Tenían distintos nombres –antes se llamaban gabinetes– Medicina y Química Legal; vamos a ver cómo es el nuevo: Dirección –no es gabinete– de Medicina y Química Legal. El inciso 2) expresaba: “Reconstrucción Criminal”, y el nuevo inciso 2) dice lo mismo; el inciso 3) expresaba: “Física Mecánica”, y el nuevo inciso 3) dice lo mismo.

Es bueno aclarar que se trata de cargos que ya están siendo ocupados, y seguramente seguirán siendo ocupados por las mismas personas, aunque los cargos tengan distinto nombre. Es una lástima que quien lanzó esta piedra no esté hoy aquí presente para escuchar nuestra respuesta.

El artículo 52 –relativo al Director– expresaba en su inciso 1): “Sumarios y asuntos judiciales”; si leemos el nuevo inciso 1) del referido artículo, vemos que dice exactamente lo

mismo. Por su parte, el inciso 2) se refería a la Policía Científica, y el nuevo inciso 2) –¡oh, cuánta concordancia!– expresa lo mismo.

En la nueva ley se incorporan la Dirección de Investigación Operativa y la Dirección de Análisis Criminal y Tecnología de la Información, creadas por acordada del CIC, del año 2000. De tal manera, la única creación nueva es la Dirección de Coordinación Interjurisdiccional, lo que no es nada casual porque como la Policía de Lucha contra el Narcotráfico va a depender de la Fiscalía General de la Provincia y existen causas en esta materia en las que se debe trabajar de manera conjunta con la Policía y la Justicia Federal –porque hay algunas causas en las cuales se vincula el pequeño menudeo con grandes casos de narcotráfico–, es necesario que haya un órgano que coordine los órganos federales con los provinciales, judiciales y policiales, tarea que llevará adelante precisamente esta nueva Dirección.

En el marco de la Policía de Lucha contra el Narcotráfico y tomando en cuenta que la ley que tenemos nos otorga competencia en determinadas causas de lucha contra la droga, ¿cuál es el problema por este único cargo destinado a coordinar la jurisdicción federal con la provincial?, ¿no es acaso necesaria la creación de esta única Dirección nueva, ya que todas las demás existen desde antes?

— Dicho esto, señor presidente, solicito que pasemos a la votación del proyecto en tratamiento.

Nada más.

Sr. Presidente (González).– Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en general la primera propuesta de ley, contenida en el despacho referido a la modificación de la Ley 7826 –Ministerio Público Fiscal–, tal como fuera emitido por las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).– Aprobado.

— La votación en particular se realizará por número de artículo.

—Se vota y aprueban los artículos 1º a 17, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 18 de forma, queda aprobado el proyecto en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

A continuación vamos a dar tratamiento a la segunda propuesta de ley contenida en el despacho, referida a la creación de la Fuerza Policial Antinarcostráfico; modificación de las Leyes 9235 -de Seguridad Pública- y 8123 -Código Procesal Penal-.

Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.

Sra. Fernández.- Señor presidente: voy a fundamentar la parte del proyecto 13297/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo, por el que se crea la Fuerza Policial Antinarcostráfico. Dicho proyecto de ley fue tratado en forma conjunta por distintas comisiones de esta Legislatura y, por acuerdo de sus miembros, se tomó la decisión de dividirlo en tres partes, habiendo sido aprobada anteriormente por esta Legislatura la parte que estableció la creación de las Fiscalías de Instrucción Móviles y Juzgados de Control de Lucha contra el Narcotráfico en las sedes del interior provincial.

El tema que nos ocupa -como dije- es la creación de la Fuerza Policial Antinarcostráfico como cuerpo especializado y armado que integra el sistema provincial de seguridad pública. Debemos decir que no existe en el país una fuerza creada para combatir pura y exclusivamente este delito; tampoco hay un antecedente similar en toda Latinoamérica, al menos en el orden provincial o estadual.

Todos sabemos que el problema del narcotráfico es hoy uno de los que tiene mayor impacto en el mundo entero y que se cobra miles de vidas. Desde este Gobierno se continúa trabajando incansablemente para combatir este flagelo y así lo hemos demostrado con la política de lucha contra el narcotráfico iniciada, concretamente, con la sanción de la Ley 10067, por la que se creó el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico en la Primera Circunscripción con asiento en la ciudad de Córdoba y, asimismo, con la sanción, hace poco tiempo, de la Ley 10091 creando nuevas fiscalías móviles en el interior de la Provincia.

Hoy continuamos en ese camino de lucha contra ese flagelo creando esta Fuerza Policial Antinarcostráfico que estará bajo la órbita judicial y sujeta absolutamente a las instrucciones que el imparta el Ministerio Público. Con esto queremos destacar que esta característica -la sujeción al Poder Judicial de esta fuerza- garantizará que todo lo actuado por esta Fuerza en todos los procedimientos sea conforme a derecho.

Debemos destacar que el tratamiento del proyecto de ley en las comisiones fue sumamente importante, de envergadura, y tuvimos la oportunidad de escuchar la opinión del Fiscal General, quien elogió la iniciativa y aportó, en base a su experiencia y al rol que desempeña, modificaciones al proyecto original ya que la Fuerza Policial Antinarcostráfico dependerá de él en su funcionamiento.

Señor presidente, solicito silencio.



Sr. Presidente (González).- Por favor, ruego a los señores legisladores hacer silencio; está en uso de la palabra la legisladora Nadia Fernández.

Sra. Fernández.- Gracias, señor presidente.

Entrando en el análisis del articulado del proyecto en tratamiento, queremos decir que nos encontramos ante un cambio de paradigma trascendente, ya que ahora habrá una vinculación funcional de la Fuerza Policial Antinarcotráfico con el Fiscal General de la Provincia. Esto supone un nuevo modelo de naturaleza mixta, porque si bien el personal afectado va a responder a la Fiscalía General, también dependerá de la designación del Ejecutivo ya que se trata de un cuerpo armado.

Debe destacarse también que si bien la fuerza tiene a su cargo, en forma exclusiva, la realización de los actos de prevención, disuasión e investigación de los delitos previstos en el artículo 34 de la Ley Nacional 27.737, por ser esa la única materia donde la Provincia tiene competencia -luego de la adhesión de la Ley 10067-, igualmente se prevé que colabore con autoridades de otras jurisdicciones, en los términos de la ley nacional recientemente citada.

En el artículo 3º del despacho se enumeran las funciones de la nueva Fuerza Policial, donde se destaca la obligación de prestar colaboración con las autoridades judiciales y otras jurisdicciones, en materia de lucha contra el narcotráfico.

Seguidamente, se detalla la estructura de la Fuerza Policial, donde vemos que se afirma la vinculación funcional con el Fiscal General, ya que tendrá a cargo un jefe y un subjefe, y se establece que el Fiscal General participe en la designación y en la remoción de este jefe y subjefe proponiendo a las personas que ocuparán dichos cargos, los que luego serán designados por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Legislatura.

Igualmente, se destaca el principio de subordinación jerárquica, ya que el jefe y el subjefe permanecerán en el cargo mientras el Fiscal General que los propuso ejerza sus funciones.

Por su parte, y ratificando el grado de capacitación y excelencia que se pretende brindar a la nueva Policía, se dispone que sólo podrá ser designado jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico quien tenga formación universitaria en materia de seguridad y que acredite experiencia y trayectoria en la lucha contra el narcotráfico.

Es intención de este Gobierno poder contar con una fuerza altamente capacitada -esta es la aspiración-, integrada por los mejores hombres, por los mejores policías, con sólida formación académica, y, además, con sólida entereza ética y moral.

En cuanto a las funciones del Jefe de la Fuerza, se destaca la obligación de acatar todas las instrucciones y directivas del Fiscal General y demás funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial. Asimismo, su obligación de colaborar en la lucha contra el narcotráfico con autoridades de otras jurisdicciones, que se hará efectiva con el previo conocimiento e intervención de la Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional de la Fiscalía General,

al sólo efecto del adecuado control que debe ejercer el Ministerio Público sobre las actividades de los miembros de la Fuerza.

Por su parte, especial mención merece la modificación del artículo 9º del despacho, por el cual se le da a Legislatura la posibilidad de controlar y ser la encargada de determinar la estructura organizacional, funcional, escalafonaria de la Fuerza Policial Antinarcostráfico, la carrera profesional, el régimen disciplinario y demás derechos, obligaciones, inhabilidades e incompatibilidades de sus miembros, ya que todo ello será establecido por la ley a propuesta del Fiscal General y no por vía reglamentaria, como originariamente se consignó en el proyecto.

Esto habla a las claras de la voluntad política de este Cuerpo legislativo de escuchar los planteos, las contribuciones de muchos legisladores, inclusive de la oposición, y de recoger y plasmar en la norma estos valiosos aportes.

En cuanto al ingreso a la Fuerza Policial Antinarcostráfico, se dispone que el mismo se efectúe previo proceso de selección, luego de haber superado las etapas de formación y de capacitación que tendrá esta Fuerza especializada, que también se crea por el presente proyecto que tenemos en tratamiento. Es decir, la Provincia invertirá todo lo que sea necesario para que los integrantes de esta Fuerza estén altamente capacitados. De este modo, la Fuerza Policial Antinarcostráfico se integrará con el mejor material humano para cumplir acabadamente con dichos objetivos.

Debemos destacar que será el Fiscal General quien propondrá anualmente al Poder Ejecutivo la nómina de egresados –esto es muy importante- de la Escuela para su incorporación a la Fuerza.

Además, en lo que respecta especialmente a la escuela de formación y capacitación, el artículo 15 de este despacho contiene una modificación respecto a la letra original del proyecto, ya que para continuar con la participación de la Legislatura en el discernimiento y comprensión en todo lo referido a esta nueva Policía, se estableció que el Fiscal General, con la participación del jefe de la Fuerza Policial Antinarcostráfico, establecerán los planes de estudio, el régimen disciplinario y demás disposiciones necesarias para el funcionamiento de la escuela de formación y capacitación, con conocimiento de la Legislatura de Córdoba.

Por último, en el despacho en tratamiento encontramos las “Disposiciones Complementarias”, que vale mencionar. Se modifica el artículo 4º de la Ley 9235, incorporando como integrante del sistema provincial de seguridad a esta nueva Fuerza Policial Antinarcostráfico; se deroga el inciso f) del artículo 42 de la Ley 9235, Ley de Seguridad Pública de la Provincia. En consecuencia, desaparece la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de la Provincia. Se modifican también los artículos 3, 22 y 323 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia, al solo efecto de incorporar la figura de la Fuerza Policial Antinarcostráfico como auxiliar del Ministerio Público a través de la Policía Judicial; se deroga el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia, en virtud que el personal de la Policía de la Provincia -ahora Policía del Narcotráfico- ya tiene previsto su régimen disciplinario en el marco de la Ley 7826.

En otro orden, debemos decir que se establece que hasta tanto la Fuerza Policial Antinarcotráfico quede conformada, quede integrada, el Fiscal General podrá comisionar personal que se desempeñe en la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía u otros ámbitos de los Poderes Ejecutivo y Judicial, y así determinará hasta cuándo la nombrada Dirección continuará ejerciendo sus funciones.

Se prevé también la implementación en el ámbito de la Secretaría General de un programa gratuito y permanente de atención telefónica, de modalidad 0800, o lo que los avances tecnológicos permitan, para recabar denuncias y demás datos en materia de narcotráfico.

Por su parte, también para buscar garantizar el máximo control por parte de todos los Poderes del Estado en materia de narcotráfico y seguridad, se incorporaron al texto original del proyecto dos artículos: uno que dispone la creación en el ámbito de la Legislatura de la Comisión Legislativa para el Seguimiento y Control de Lucha contra el Narcotráfico en la Provincia de Córdoba, integrada por las autoridades de la Legislatura, los presidentes del bloque político de la mayoría y los presidentes de la primera y segunda minorías, así como un miembro por las restantes minorías, y los presidentes de las Comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Prevención de Adicciones.

Con motivo de la reunión que tuvimos con el Gobernador en la sala de audiencias del Panal, adonde asistieron los miembros titulares de la Comisiones de Adicciones, de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, recuerdo que uno de los escasos aportes sustanciosos que se hicieron respecto de este proyecto que informaba el Gobernador fue realizado por el presidente de la Unión Cívica Radical, el legislador Yuni.

Por otra parte, el otro artículo que se incorpora establece que un miembro de la Legislatura integrará las Juntas de Retiro y Promociones que componen el Sistema de Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba, en el marco de la Ley 9235.

En definitiva, siendo necesario replantear políticas en materia de seguridad, efectuar adecuaciones en materia policial para lograr una mayor eficacia en la lucha contra el narcotráfico, y considerando que la creación de esta nueva Fuerza Policial Antinarcotráfico reorganiza, de alguna manera, los métodos y funciones para el combate de este flagelo, el bloque de Unión por Córdoba solicita al Pleno la aprobación de este proyecto adelantando, por supuesto, nuestro voto positivo.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.

Sra. Leiva.- Señor presidente: en nombre del bloque al que pertenezco no vamos a acompañar este proyecto porque tratándose de un tema tan esencial y fundamental como es la lucha contra el flagelo de la droga, inserta actualmente en nuestra sociedad, creemos que hace falta

un ánimo, una intención sería por parte del Gobierno de la Provincia en la lucha contra este flagelo.

Ese ánimo y esa intención no existen; le hemos dado en varias oportunidades los elementos necesarios pero ya estamos cansados, señor presidente, de esta puesta en escena, y si el señor Gobernador la quiere utilizar para su campaña presidencial, es su problema personal, pero utilizar esta temática que afecta a nuestros niños para campaña presidencial dista mucho de nuestro posicionamiento.

¿Por qué hablo de falta de ánimo y de intención? Porque en este proyecto se somete la posibilidad de utilización de la Policía Antinarcotráfico por parte de la Justicia Federal a previo pedido de colaboración que se debe realizar ante la Comisión Interjurisdiccional; es decir, la Justicia Federal, que tiene como finalidad la persecución de los delitos relacionados con la temática de la droga en nuestra Provincia, tiene que morir ante un director administrativo al que debe pedirle la colaboración de la Policía Antinarcotráfico. Esto dista mucho de una intención de lucha contra la droga, es ponerle palos en la rueda a esta búsqueda, a esta lucha por parte de la Justicia Federal.

¿Cómo se les ocurre limitar el acceso inmediato y urgente de la Justicia Federal con la Policía? ¿Cómo creen que va a ser? Un juez o un fiscal federal le tienen que pedir colaboración a un director administrativo. Imaginen este diálogo: “Ey, escúcheme, estoy con urgencia en un hecho de tráfico de droga y necesito urgente a la policía”. “Espere, espere, que le voy a preguntar al Fiscal General”; “Eu, me están avisando de la Justicia Federal que necesitan a la Policía de la Provincia”. Y el Fiscal General dice: “Vamos a ver; bueno sí, se la vamos a dar”. Luego emite una resolución la Dirección y dice: “Sí, le vamos a prestar la colaboración”.

¿Y en todo este tiempo qué creen que va a pasar con el principio de inmediatez y urgencia que requiere para la investigación de estos delitos la Justicia Federal? ¿Qué se les ocurre que puede pasar en hechos que necesitan de inteligencia criminal muy precisa, muy aguda? Desaparece la prueba, desaparecen los responsables de los delitos.

¿Eso es lucha? No. Esto es un castigo a la Justicia Federal que les imputó por asociación ilícita a 8 policías y demás funcionarios integrantes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico.

El Gobernador lo dice bien claro a través de la fundamentación de este proyecto, que sabido es que los funcionarios jurisdiccionales, nacionales, federales e internacionales, a través de la Constitución y tratados internacionales, requieren de la colaboración del personal policial en la realización de investigaciones, de procedimientos e instrucciones.

Pero, ¿qué más dice en la fundamentación?: “No obstante la obligación que tiene la Provincia de brindar la cooperación que se le requiera... —escuchen esto- ...respetando la autonomía provincial...”. ¿Quién les dijo que no se respeta la autonomía provincial? ¿Dónde está la falta de respeto de la Justicia Federal investigando hechos con la Policía provincial?

La falta de respeto que quisieron señalar en la fundamentación es porque les imputaron al jefe, subjefe y demás funcionarios a cargo de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, a quienes el Gobernador defendía a capa y espada.

Pero no se quedaron con eso; expresaron en la fundamentación que no solamente deben respetar la autonomía provincial sino la subordinación de los agentes encargados de revisar los actos de colaboración -es decir, la Policía- con las autoridades locales de los que dependen. Y esa Policía va a depender del Fiscal General.

¿Cómo plasmaron esa obligatoriedad de respetar esa subordinación? Lo plasmaron en el artículo 10 cuando expresamente establece: "... no podrán acatar en forma directa órdenes -aunque antes las acataban- emanadas de dichas autoridades -se refiere a las autoridades de otra jurisdicción- sin el previo conocimiento e intervención de la Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional de la Fiscalía General." Pero van más allá y le dicen a la Policía: ¡Ojo! la falta de cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior será considerada una falta grave.

¿Esto es prestar colaboración? ¿Esto es lucha contra el narcotráfico? ¡No! Esto es decirle a la Justicia Federal: "Ustedes no se meten más con nosotros. Si quieren a la Policía de la Provincia van a tener que morir ni siquiera con el Fiscal General sino con el Director General, un administrativo, a pesar de que tiene nada más y nada menos que los acuerdos de diputados y senadores a nivel nacional; pero nosotros los estamos haciendo morir con un Director General." ¿Eso es luchar?

Hace 14 años que ustedes están en el poder y los adolescentes inician su consumo en las escuelas; los hospitales de urgencias de la Provincia reciben a diario chicos con problemas de drogadicción; en el barrio Marquez Anexo estamos cansados de informar la situación que padecen en materia de drogadicción.

Cuando el ex Ministro de Seguridad, Alejo Paredes, vino en oportunidad de sancionar la ley provincial en adhesión a la Ley Nacional de Estupefacientes, personalmente le pregunté: "Ministro, ¿cuando usted era Jefe de la Policía de la Provincia -año 2007- ya contaban con un mapa de los lugares donde se vende, se consume y se lleva droga a los niños de esta Provincia?". Me contestó muy rápido de lengua, ligerito: "Sí, claro, legisladora, la Policía lo tiene". Entonces, ¿qué esperan para actuar?, ¿qué esperaron para actuar? No hicieron absolutamente nada. Esta provincia, que era de tránsito, hoy es de consumo y existen "cocinas" de cocaína.

Encuestas en colegios provinciales muestran que de 1300 chicos de 6º grado, 11 años de edad, a uno de cada tres ya le habían ofrecido marihuana y uno de cada 10 ya había reconocido haberla probado. Se lo hicimos saber en aquella oportunidad; sin embargo, siguieron insistiendo con la cúpula de la Policía y con quienes estaban a cargo de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico.

Circunscribir este gravísimo problema institucional que tuvieron con esta crisis de los narcopolicías -con estos funcionarios y policías imputados por una asociación ilícita- esta apreciación, está totalmente equivocada, son ustedes los responsables por la falta de una política adecuada, son ustedes los que monopólicamente han tomado las decisiones en materia de seguridad.

Al problema con la Justicia Federal no lo planteo yo, lo señala la misma Justicia Federal, y así se lo hice saber al señor Gobernador con motivo de la presentación de este proyecto el

día que tuvimos la reunión en la Casa de Gobierno; le dije que la Justicia Federal se quejaba de esta situación y que desde setiembre pasado -fecha en la cual imputaron por asociación ilícita a estos funcionarios- no había ningún tipo de investigación en la Justicia Federal, que sólo se investiga la venta minorista de la droga, no hay investigación para los hechos complejos, que son los que les compete.

El Fiscal Senestrari decía “si antes estábamos en cero, ahora estamos en menos cero” y. además planteaba el temor fundado -mucho más de acuerdo al proyecto que ustedes hoy van a aprobar-de que deba investigar estos delitos tan complejos con la Policía Aeroportuaria o con Gendarmería y no con la Policía de la Provincia. ¿Por qué temor?, porque a la Gendarmería vienen policías de distintas provincias del país -Mendoza, San Luis-, no son los de la Provincia, que conocen el barrio, la localidad, los destinos.

Nos quieren hacer creer que con esta Policía que va a tener una formación en una escuela -que vaya a saber cuándo aparecen los primeros egresados- vamos a contar con los elementos suficientes para la lucha contra el narcotráfico.

No coincido y creo que no es cierto lo manifestado por el Fiscal General con motivo del tratamiento de este proyecto -que aparte vino con un proyecto que no era el que teníamos nosotros, porque lo cambiaron dos o tres veces; mientras él hablaba de un proyecto, nosotros teníamos otro en el escritorio- cuando manifestaba que en la Policía de la Provincia hay un grupo que quiere pasar “desesperadamente” a formar parte de la Policía Antinarcotráfico, ¡mentiras!, quiénes forman parte de la Dirección de Drogas no quieren saber nada con formar parte de esta Policía Antinarcotráfico. No sé cómo van a hacer para pasar casi doscientos efectivos a esta nueva Policía mientras salgan los egresados de la Escuela.

Señor presidente, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, hemos denunciado el terrible problema que existe en nuestra Provincia en materia de drogadicción, denunciarnos la connivencia de parte de la Policía con estos delitos relacionados con la droga, pero miran para otro lado, motivo por el cual no estamos dispuestos a acompañar este proyecto que lo único que busca y tiene en miras es la campaña presidencial del señor Gobernador.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Miranda.

Sra. Miranda.- Señor presidente: en verdad, resulta poco digno apostar al fracaso y más aún para quienes creemos firmemente en el rol del Estado.

Tampoco es grato anunciar o anticipar la decepción por este proyecto que ustedes aprobarán dentro de unos minutos, porque nosotros estamos convencidos de que la creación de una nueva fuerza policial no ayudará a construir mayor seguridad, no mejorará la defensa del interés público, y mucho menos asegurará los derechos de los cordobeses como se anuncia pomposamente en los fundamentos de este proyecto.

Señor presidente: está ampliamente demostrado que la creación de más y más estructuras policiales para combatir el narcomenudeo no garantiza terminar con este flagelo. Hace unos días en esta misma Casa, el cura colombiano Juan Carlos Velásquez afirmaba claramente que sólo la inclusión social permite comenzar a desandar el camino de la lucha contra el narcotráfico, lo escuchamos varios legisladores de todos los partidos en esta Cámara. Nosotros también estamos convencidos de que es así, que la educación es el camino para eso.

Solamente hace falta leer los diarios todos los días y caminar las calles para saber que la mayoría de los hechos de violencia, de robos y de asesinatos están vinculados a la droga y son protagonizados por jóvenes que, obviamente, ni estudian ni trabajan, los “NiNi”. Está de moda, señor presidente, hablar de los “NiNi”, pero sabe qué: son pocos los que se animan a enumerar los motivos por los cuales esos 900 mil chicos que ni estudian ni trabajan llegaron a esa condición.

Poco se dice de las políticas que dieron por resultado la enorme cantidad de pibes que hoy tienen como horizonte de vida salir a robar, juntarse en la esquina a consumir drogas y cuyo destino seguro es, más temprano que tarde, verse implicados en una situación de violencia y cárcel. Somos pocos quienes hablamos del Estado ausente, porque -seamos claros- la Policía, el brazo estatal de la Justicia, estuvo ausente la noche del 3 y 4 de diciembre último, eso no se discute. Sin embargo, para llegar a esa noche, que quedará en la memoria de todos los cordobeses, hizo falta que el Estado estuviera ausente por mucho tiempo, y fue esa ausencia una de las principales causas por la que se fue generando la descomposición social hasta llegar al estallido, que hoy el Gobierno provincial pretende maquillar con las leyes que estamos tratando. Pasó diciembre, pasaron las fiestas, pasó el verano, pero el entramado social sigue roto, la marginación de miles de jóvenes sigue intacta y la creación de una nueva fuerza de seguridad no es la solución para un Estado que adolece de un proyecto inclusivo desde la educación, la salud y el trabajo.

La Policía Antinarcotráfico tiene muy pocos proyectos para ofrecer; o quizás sí, capaz que tenga uno, señor presidente: el de llenar las cárceles con jóvenes sin porvenir, con jóvenes que no saben ni siquiera poner en palabras una ilusión de vida.

Señor presidente: con lo que estamos diciendo no eludimos ni minimizamos el rol de las fuerzas de seguridad, es más, desde el bloque del Frente Cívico se diseñó y se ofreció a la sociedad un proyecto para declarar la emergencia en seguridad, con la formulación de catorce puntos. Fue hace más de un año, fue mucho antes que estallara la crisis policial y el escándalo de los narcopolicías.

Pero quiero volver al cura colombiano, quien afirmó que en su país durante mucho tiempo creyeron que estaban en el paraíso, pero resultó ser que estaban en el peor de los infiernos. Permítame decir, entonces, que no hay ningún patrullero que nos lleve al paraíso, señor presidente; sólo con inclusión y educación seguramente comenzaremos a alejarnos de este infierno.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Yuni.

Sr. Yuni.- Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical ha reclamado insistentemente al Gobierno provincial un debate serio y amplio sobre el plan de seguridad ciudadana que Córdoba necesita para la prevención y el control del delito, en particular del delito organizado.

Desde hace tiempo, desde el radicalismo venimos exigiendo que esta Legislatura se aboque al debate sobre la inseguridad con anclaje en la realidad, y a la discusión y decisión de políticas de Estado y de planes y medidas que excedan a este Gobierno, a los fines de contribuir entre todos con medidas efectivas que reestablezcan las condiciones al abrigo de las cuales la inseguridad de los cordobeses desaparezca y renazca la confianza en las instituciones políticas y en los organismos de seguridad.

Desde la perspectiva de este reclamo, el proyecto en análisis resulta necesario, pero no suficiente. El proyecto es necesario, ciertamente, porque aborda un diseño institucional que pretende dar respuesta a este problema: el consumo de drogas ilícitas y la lucha contra las organizaciones delictivas que las elaboran y distribuyen.

Pero, el proyecto es insuficiente porque sólo proyecta soluciones parciales para este problema en particular y lo descontextualiza del marco general, en el que forzosamente debería y deberá discutirse, esto es, en el marco de la inseguridad y de las políticas públicas globales de prevención y de control del delito organizado.

Aun así, nuestro bloque entiende que la profunda crisis de confianza en nuestras instituciones de seguridad debe superarse mediante la adopción de decisiones políticas que intenten soluciones para el porvenir de los cordobeses.

En ese marco, la Unión Cívica Radical está dispuesta a colaborar, porque entiende que del éxito de las instituciones que diseñe este Gobierno dependerá en gran medida el futuro de la seguridad de los cordobeses, de sus vidas y de sus propiedades. Nuestro centenario partido está dispuesto a colaborar con esta decisión, tanto como está comprometido en controlar su implementación.

La promoción, comercialización y consumo de drogas atraviesan hoy a todos los estamentos sociales, no es patrimonio exclusivo de ninguno de ellos, y corroe la moralidad de todo el pueblo sin distinción de edades ni condiciones sociales.

Las respuestas a este flagelo sólo pueden provenir de la decisión conjunta de los dirigentes y partidos políticos que representan a la sociedad en su conjunto. En esto no pueden existir mezquindades ni egoísmos. Debemos pensar en el futuro de todos los cordobeses.

En todo caso, señor presidente, serán los cordobeses quienes habrán de condenar o premiar, según las responsabilidades que endilguen, a quienes se hayan equivocado, o no, hasta este momento.

Nuestro bloque acompañará este proyecto, en parte, como decía la miembro informante del oficialismo, porque se han aceptado algunas de nuestras propuestas vinculadas con el control parlamentario de la implementación de la nueva fuerza de seguridad, al que

entendemos necesario para el seguimiento de la lucha contra este flagelo. Pero principalmente, señor presidente, lo vamos a acompañar en la convicción de que es un paso necesario para superar la crisis de confianza que vivimos, y en el anhelo de que los nuevos mecanismos institucionales propuestos sirvan para solucionar sino todos al menos algunos de los problemas de inseguridad que derivan del narcotráfico.

Se han formulado las preguntas de si esto es positivo, si le vendrá bien a Córdoba y si contradice lo que están haciendo los jueces federales. En tal sentido, el Juez Federal Julio Ochoa –uno de los jueces que más procedimientos de decomiso de droga ha hecho en nuestra ciudad con fuerzas federales y provinciales, y ha sido uno de los que ha procesado al ex Presidente de la Nación por la causa de Río Tercero, es decir, es una persona que tiene la suficiente autoridad para hablar de algo que está bajo su responsabilidad- ha manifestado en la Ciudad de Río Cuarto, el 9 de febrero de 2014, o sea, hace 60 días, cuando los periodistas le preguntaban si es positivo que se cree una Policía Antinarcótico: “El proyecto es positivo. Creo que es un cambio de paradigma. Hay un modelo nuevo que es de naturaleza mixta”. A la pregunta de si ese cambio puede tornar más eficientes las investigaciones, respondió: “Espero que sí, pero, por otra parte, va a haber un control”. Luego, los periodistas lo indagaron acerca de si temía que el funcionamiento de la División Antidrogas se deteriore hasta tanto se vaya formando la nueva fuerza. El antecitado juez respondió: “nosotros le hemos planteado esa circunstancia al Gobernador, lo hizo un colega de Córdoba Capital que puntualizó esta situación, y hay un compromiso del Gobierno de llevar adelante procedimientos en forma permanente y conjunta con las fuerzas federales”.

Desde esta Legislatura le estamos dando instrumentos a este Gobierno para que corrija los errores de su política de seguridad, tal como decía el doctor De Loredó cuando se discutía el Ministerio Público, y los que estamos acá tenemos una responsabilidad: dejar de lado nuestras diferencias partidarias y fijar políticas de Estado. Si los que tienen la responsabilidad hoy, que son los jueces federales, ven como positivo que se avance hacia este nuevo esquema en la Provincia de Córdoba, no va a ser el radicalismo el que le ponga “palos” a esta nueva institución que se está creando.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.

Sr. Frencia.- Señor presidente: desde el bloque del Frente de Izquierda consideramos que estamos frente a un reciclaje de la vieja Brigada de Drogas Peligrosas, y esto lo reafirmó el Fiscal Moyano, ya que cuando se le preguntó acerca de cómo se iba a integrar esta nueva fuerza policial hasta que estén listas las nuevas camadas que salgan de la escuela, respondió: “Naturalmente, con los oficiales que integraban la Brigada de Drogas Peligrosas”. Es decir, no solamente estamos frente al reciclaje de una misma estructura policial, sino que se trata directamente de los mismos agentes que fueron cuestionados por sus vinculaciones con el narcotráfico. O sea, vamos a combatir al narcotráfico con la misma policía y con los mismos agentes.

Acá se me contestó que la Justicia está interviniendo. Al respecto, les quiero aclarar una cuestión: el escándalo del narcotráfico estalló a mediados del año pasado, en pocos meses se va a cumplir un año, y acá siguen sin resolverse dos suicidios. Una vez más –entre comillas- se quiere, por decreto,

cerrar un caso diciendo que efectivamente fue “suicidio”, cuando se han modificado las pericias, cuando se ha cuestionado que la escena del crimen ha sido intervenida por agentes policiales; entonces, ¿cómo podemos hablar de lucha contra el narcotráfico si ni siquiera se ha podido avanzar en el esclarecimiento de estos suicidios forzados que hicieron estallar el narcotráfico en nuestra Provincia?

Ahora dicen: “no, bueno, pero esta nueva fuerza policial va a estar bajo el control de la Justicia, otro Poder del Estado independiente del Ejecutivo, para despolicializar la lucha contra el narcotráfico”; yo diría que, en realidad, se está policializando la investigación judicial, en el caso del narcotráfico, y se le está brindando ...

Sr. Presidente (González).- Señora legisladora: el legislador Cid le solicita una interrupción, ¿se la concede? Es su amigo.

Sra. Frencia.- No, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Continúe en el uso de la palabra; se ve que ha dejado de ser su amigo.

Sra. Frencia.- Señor presidente: cuando termine, el legislador Cid tendrá la posibilidad de contestarme, no hay ningún problema.

Lo que quiero remarcar es que se trata del reciclaje de un aparato, colocándolo bajo la órbita de una Justicia que –como bien señalé reiteradas veces y acabo de hacerlo en el punto anterior- actúa como un amparo frente al funcionamiento de las redes.

Insistimos en cargar las tintas en la Policía como si fuese solamente un problema de corrupción. Ahora, el narcotráfico y el narcomenudeo en nuestra Provincia, la entrada y salida de estupefacientes del país, ¿podrían funcionar si no hay un amparo superior de la Justicia y de funcionarios públicos?, ¿tanta autoridad y autonomía tiene la fuerza de seguridad en nuestra Provincia y en el país como para actuar independientemente de los fiscales y jueces, y que pase por sus narices este tipo de crimen organizado de redes de trata, que entren y salgan chicas indocumentadas y menores de edad del país? ¡Pero la Justicia no tiene nada que ver! Suena muy raro.

La Justicia, a la cual se le va a dar una fuerza armada bajo su control, está fuertemente cuestionada, no solamente por los casos ocurridos en Córdoba -que mencioné anteriormente- sino por casos a nivel nacional como el de Marita Verón –caso escandaloso en el que han tenido que volver sobre sus pasos y condenarlos a todos- o el de Paulina Lebbos.

Entonces, la lucha contra el narcotráfico no se trata de armar un nuevo aparato policial bajo la órbita de la Justicia, del Ejecutivo o del Legislativo –el Poder que quieran-; se trata de avanzar en el desmantelamiento de un entramado cómplice que parte desde las fuerzas

policiales de seguridad y llega hasta funcionarios del Estado y de la Justicia -que cuando no es cómplice activa es cómplice pasiva, por cajonear los expedientes, por no avanzar en una investigación independiente.

No vamos a avanzar nunca en la lucha contra el narcotráfico si seguimos sancionando este tipo de leyes, que son un cambio de carátula, un cambio de rótulo para pasar de un aparato de seguridad a otro.

El único objetivo que tiene esta ley es tratar de zanjar una crisis abierta por la crisis de la narcopolicia que estalló el año pasado en nuestra Provincia, que ha cuestionado electoralmente al Gobierno de la Provincia y ha puesto en tela de juicio a toda la cúpula policial, e inclusive a algunos sectores de la Justicia.

Acá no hay un verdadero compromiso con el desmantelamiento de las redes de trata y de narcotráfico, no hay avances en la investigación sobre el lavado de dinero que proviene de esas redes; no hay absolutamente nada.

Probablemente me digan: “no, pero eso es competencia de la Justicia Federal”; bueno, esta nueva fuerza de seguridad no va a colaborar con la Justicia Federal porque queda, una vez más, al arbitrio del Fiscal General, quien tiene que autorizar o no la utilización de esta fuerza para avanzar en la investigación del narcotráfico en nuestra Provincia.

Rechazamos esta nueva fuerza de seguridad que busca, por otro lado, reconstruir una fuerza represiva, necesaria para el Estado, para aplicar una política de ajuste, y proponemos, una vez más, que el camino para desmantelar las redes de trata, las de narcotráfico, las del crimen organizado parta, en primera instancia, por desarmar el entramado de impunidad que pesa sobre ellos, es decir, desmantelar la fuerza de seguridad, que se abran los libros de la comisaría, que puedan y sean electos y revocables los comisarios.

Y me olvidaba de mencionar algo impresionante. La semana pasada votaron un control ciudadano sobre la policía que acá ya se está dando de baja, porque quien determina al jefe y subjefe de esta nueva fuerza de seguridad, sin ningún control ciudadano, va a ser el Fiscal General, que después lo tendremos que ratificar, o no, en la Legislatura dándole un estatus, casi, como de cualquier fiscal o funcionario. Un respaldo que le garantiza un accionar impune que ¡ni les cuento!

Sin dudas, ya fracasó este control ciudadano que se votó la semana pasada aquí, por lo cual, reitero, dicho control ciudadano parte de la apertura de los libros de la comisaría, la elección directa y la revocatoria de los funcionarios públicos de los altos mandos y también de quienes forman parte de las fuerzas de seguridad, y del control activo de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones sociales, de las asambleas ciudadanas que se organizan contra la inseguridad, y lo mismo vale contra el Poder Judicial. Hay que terminar con este Poder Judicial cómplice, dependiente del Ejecutivo. En este sentido, proponemos la elección directa y la revocatoria de los jueces y que rindan cuentas al pueblo, como debería ser.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente, voy a ser breve porque me parece que en el proyecto que trataremos después vamos a tener que hablar bastante.

El 12 de febrero de 2012 le dije al Gobernador de la Provincia: “Gobernador, intervenga la Policía de la Provincia y se va a ahorrar muchos dolores de cabeza”. Fui profeta. Generalmente, no le pego en nada pero ahí fui profeta. No me desmentirán los legisladores que estaban presentes, le dije: “intervenga la Policía de la Provincia”. Estaba sólo con el Ministro del Poder Ejecutivo y la Vicegobernadora y le digo “intervéngalo”; porque el problema no sólo lo tiene en drogas sino que lo tiene en otros lados también y esto viene de antigua data.

También coincido en que el problema de la droga tiene tres avenidas: la avenida de la represión, la de la prevención y la de la sanación. Me gustaría y deseo que pronto estemos trabajando en la avenida de la prevención porque creo que es el gran tema. Que nuestros chicos tengan un proyecto de vida y cuando lo tengan será todo mucho más fácil, señor presidente. Espero con ansias que llegue el día que trabajemos el tema de la prevención y, mientras tanto, estamos trabajando en la otra avenida, que es la de la represión, que implica la respuesta política que tiene que dar el Poder Ejecutivo al problema existente con la Dirección de Drogas Peligrosas salido a luz desde el año pasado. Hubiera preferido el saneamiento de la Policía de la Provincia, pero el Gobierno insiste en avanzar por otro camino.

Como he trabajado en puntualizar algunas cosas, nobleza obliga, el que trabaja en mejorar algún proyecto de ley debe acompañarlo.

A legisladores que me han preopinado, quiero decirles que en esto de la relación Justicia-Poder político-Policía en materia de narcotráfico nada es lo que se ve. Pongo un ejemplo: a mí también me suena en el oído, y no me suena bien esa Dirección que van a crear, pero la Nación hace lo mismo; o sea, “mal de muchos consuelo de tontos”, soy testigo de que la Nación hace lo mismo.

En una oportunidad que denuncié, ante la Justicia Federal, a algunas redes de comercialización locales de Córdoba bastante importantes, el Fiscal me preguntó quién quería que investigara esto, y yo le respondí: “mire, por ahora, no la Policía de la Provincia”; a lo que me refirió: “bueno, vamos a convocar a la Policía Aeronáutica”. Me dieron la posibilidad de elegir quién quería que investigara. Y a los 15 días, un joven, flaco –me acuerdo como si fuera hoy– Oficial de la Policía Aeronáutica, me dice: “doctor, nos vamos de la investigación”; “¿cómo que se van si recién van 15 días?” “Porque nuestro jefe, Marcelo Saín, quiere que el Fiscal le diga qué está investigando, y el Fiscal le ha dicho: ‘yo no le voy a decir lo que estoy investigando’. Entonces, mi jefe se ha enojado y me ha desafectado de la investigación”. A ver si nos entendemos: el Gobierno nacional no prestó colaboración, en su momento, porque quería tener un control operativo de qué estaba diciendo yo.

Además, la Justicia Federal, señores legisladores –no se confundan–, no es parte de la solución, es parte del problema porque ahí el poder político ha entrado con toda su fuerza. Ahí también tenemos problemas. Esto quiere decir que rara vez van a tomar decisiones contra los

intereses del Gobierno nacional, y si no, vean lo que pasó con el señor Viarnes, quien era un agente de Inteligencia Residual de los Servicios de Informaciones del Ejército Argentino, metido en la Policía de la Provincia de Córdoba para, luego, hacer una “flor” de operación política contra el Gobierno de la provincia de Córdoba.

Con esto quiero decir que no seamos ingenuos, nada es químicamente puro, acá hay juegos en todos los niveles. El error enorme fue haberlo dejado entrar a Viarnes —error o acierto porque a través de Viarnes, cuando le dieron la autorización de hablar nos enteramos de lo que estaban haciendo algunos elementos de la Policía de la Provincia de Córdoba. Quizás eso explique ese artículo que a mí no me gusta, de preguntar qué es lo que van a investigar, porque existen las operaciones. ¿Por qué Viarnes no está preso?, ¿por qué está presa la cúpula de la Policía de la Provincia de Córdoba y Viarnes no está preso? Se lo digo: Viarnes no está preso porque es agente residual de los Servicios de Inteligencia del Ejército Argentino, como tantos que tienen a lo largo de toda la cadena de la droga. Entonces, ¿a quién le creemos? Yo he chequeado que Viarnes es agente residual de los Servicios de Inteligencia del Ejército Argentino—, Milani. ¿O ustedes creen que los servicios del Ejército no sabían que Viarnes estaba operando en el meollo de la decisión en materia de narcotráfico en la Policía de la Provincia de Córdoba? ¿A quién le creemos? Porque visto así ese artículo impacta, pero visto desde la realidad, es que la Nación no quiere investigar con su fuerzas federales delitos de narcotráfico porque ni sabe de qué se tratan. Eso es lo que me pasó: me dejaron solo; si la Policía de la Provincia y la Policía Aeronáutica no quisieron investigar, ¿quién iba a hacerlo?, ¿la “Policía Galáctica”? Estas son cosas reales, que suceden todos los días.

Si bien no estoy de acuerdo con la Policía de la Provincia de Córdoba por las cosas que han pasado, soy el único que vengo pidiéndole intervención, pero no me llamo a engaño. El juego es mucho más complicado de lo que parece; para que tomen dimensión de esto, voy a aportarles otro dato más.

Días atrás, viajé al corazón del monte santiagueño, que es el epicentro de la droga, y recorrí las rutas centrales por donde pasa la droga por esa Provincia y por la nuestra; hablé con los aeropolicías y con quienes pilotean los aviones, y tuve la suerte inmensa —que nunca tuve en Córdoba— de que me pare la Gendarmería Nacional porque llevaba apagadas las luces del auto —era el de mi mujer y todavía no entendía bien cómo funcionaba el encendido de los faros—, lo cual, de paso, me salvó de la multa que me esperaba unos kilómetros más adelante.

Se acercó muy gentilmente un gendarme —eran alrededor de quince— con acento formoseño, que me dijo: “mire, señor, va a tener que encender las luces; pero bueno, no le vamos a poner ninguna multa”; y yo, ya que estaba ahí, le dije: “dígame, amigo, ¿están haciendo control de ruta?”. “Sí” —me respondió—. “¿Tienen perros?” —me habían dejado servida la pregunta. “Teníamos dos; a uno lo jubilamos y nos queda uno, pero no está aquí sino en el móvil 3, que está a 15 kilómetros” —me dijo. “¿Y por qué no lo tienen aquí?” —insistí. “Porque al perrero lo trasladaron a Buenos Aires” —respondió.

Estoy hablando de la Ruta nacional 2, que es uno de los ejes por donde pasan 70 mil kilos de cocaína. Tenemos que tomar conciencia de lo que hacemos y discernir lo que escuchamos, y cuando se habla de la Justicia Federal o de las fuerzas federales, no debemos llamarnos a engaño —tuvimos un problema muy grave en la Policía de la Provincia de Córdoba—



, el tema es mucho más complejo de lo que creemos y, realmente, no podemos estar peor en este tema.

Confío en que los hombres de la Justicia de Córdoba –a quienes vamos a trasladar la responsabilidad de ayudar en esto y seleccionaremos por medio un sistema de concursos– van a hacer bien su trabajo. Al Fuero Antinarcotráfico de Córdoba nos referiremos dentro de un rato.

El viernes pasado tuve que internar en un sanatorio psiquiátrico al hijo de un amigo; fui a buscarlo a una plaza de nuestra ciudad; el chico estaba lúcido, me contó todo e identificó muy claramente quiénes le proveían la droga. Y miren lo que son las casualidades: ahora mismo, mientras estoy hablando aquí, veo en Internet que a ese sinvergüenza que maneja la droga que consume toda la zona sur –barrios Kennedy, Rogelio Martínez y alrededores– lo han detenido esta tarde y han sido nuestros fiscales, el mismo que estaba envenenando al chico que me tocó internar anteayer.

Repito, señor presidente, este no es mi proyecto, yo hubiera hecho otra cosa; agradezco que me hayan dejado participar y por eso voy a acompañarlo, pero no todo lo que brilla es oro, hay cosas en todos los niveles que hay que mejorar.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (González).– Tiene la palabra el señor legislador Pretto.

Sr. Pretto.– Señor presidente: quiero anticipar mi voto afirmativo a la iniciativa en tratamiento, pero, en verdad, es lamentable escuchar el relato de los legisladores sobre la triste realidad que nos toca vivir. Sin embargo, como dijo el legislador preopinante, no hay que dejarse engañar ni tampoco desanimarse sino que hay que tratar de mejorar la estructura de la que dispone el Gobierno para avanzar en la lucha contra el narcotráfico.

Ahora, señor presidente, por más que creemos esta nueva Fuerza Policial Antinarcotráfico que depende del Fiscal General, es decir, de otro Poder del Estado; que se cree una escuela para formar a sus miembros; que se haga participar a la Legislatura, como bien queda claro al incorporarse dos iniciativas al final del proyecto: la Comisión de Seguimiento y la participación de un miembro de la Legislatura en las Juntas de Retiro y Promoción en la Fuerza, no alcanza.

Creo que esto no hace nada más ni nada menos que comprometernos un poco más a todas las fuerzas políticas, y en este caso los Poderes constituidos del Estado, en esta difícil tarea de la lucha contra el narcotráfico. Todos vamos a ser responsables, aunque el Gobierno en un mayor grado por tener la conducción de la Fuerza y la responsabilidad política primaria, pero, en verdad, el debate recién comienza, la sociedad lo ha instalado definitivamente y si no lo logramos con estas herramientas y con esta organización, que el Estado debe bregar por ir mejorándola, retocándola y haciéndola cada vez más efectiva, seguramente nos ganará la organización de los narcotraficantes que la tienen muy bien aceiteada, con grandes recursos y

que consiguen ser mucho más eficaces a la hora de continuar con su negocio que no hace nada más ni nada menos que envenenar a nuestros jóvenes.

Por eso, señor presidente, creo que en poco tiempo más la realidad nos va a devolver el resultado conseguido con esta herramienta y tendrá que ser haber conseguido mejores controles, más narcotraficantes detrás de las rejas y menos chicos con posibilidad de consumir. Sin embargo, coincido con lo que dijeron varios legisladores en cuanto a que el mayor esfuerzo habrá que ponerlo en la prevención y la mejor contribución para prevenir será tratar de mejorar el sistema educativo, inculcar más valores, darles más alternativas a nuestros jóvenes y más posibilidades de vida sana en lugar de estar creando distintas herramientas y fortaleciendo cada vez más estructuras para controlar algo que parece ser incontrolable, no sólo en nuestra Provincia sino en toda la Argentina y otros países; cada vez que se abre un portal se descubre un mega operativo, una banda desbaratada y siguen y siguen los operativos.

Por lo tanto creo, señor presidente, que esta herramienta va a ser eficaz y eficiente cuando la veamos funcionar en pocos días más y de eso seremos todos responsables, algunos con mayor responsabilidad otros con menos, pero deberemos seguir contribuyendo en esta comisión de seguimiento para ver cómo contribuimos, entre todos, para erradicar este flagelo y lograr que nuestros jóvenes vivan con más oportunidades sanas y alternativas distintas y no imbuidos en esta nube oscura que no hace más que matarlos y dejarles poca esperanza en el futuro.

Por eso, señor presidente, es que voto porque esta nueva herramienta sea bien usada, mejor dotada, mejor integrada, con los mejores funcionarios formados y para que entre todos podamos erradicar este tremendo flagelo.

Nada más.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador De Lucca.

Sr. De Lucca.- Señor presidente: quiero reiterar el voto positivo del bloque Frente para la Victoria, ya que recién me equivoqué, me adelanté en mi posición, así que por eso reitero el acompañamiento del bloque Frente para la Victoria y esperamos que esta ley no sea solo una puesta en escena.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fonseca.

Sr. Fonseca.- Señor presidente: por lo que se ha dicho aquí y, de acuerdo a los innumerables testimonios de los legisladores, estamos frente a una verdadera crisis y esa crisis nos ha

llevado a una cuestión terminal. Todos le tenemos temor a la droga y todos sabemos o creemos que la droga duerme debajo de la cama en nuestros hogares, y todos, señor presidente, tenemos temor de mirar para no despertarla.

Hay algunas conclusiones a las que uno puede arribar mirando detenidamente el panorama, cualquier gobernante que se precie de observador inteligente de la realidad planifica y, cuando logra a través de la planificación sustentar sus gobiernos con políticas de Estado, se convierte en estadista, pero no es el caso de lo que está ocurriendo en Córdoba.

Acá se habló mucho de inclusión, de prevención, de educación, de salud, de tratar de buscar sólidos elementos para desbaratar, de alguna manera, el flagelo de la droga y tratar de evitar que esto termine destruyendo a la juventud, particularmente a aquellos que tienen menos recursos. Si uno pasa y revisa la cuenta de inversión que acaban de enviar la semana pasada, nos damos cuenta que no se está hablando ni de prevención, ni de educación, ni de salud, menos aún de seguridad.

Esto era obvio, y lo peor de esa obviedad es que hay gobernantes que actúan con temor sobre las causas que originan el miedo. Esto comienza con el narcoescándalo, que si no fuera por un programa de televisión y un personaje, como el que acaba de mencionar el legislador García Elorrio, hoy estaríamos ante la ausencia total de lo que estamos discutiendo, no estaríamos enterados absolutamente de nada a pesar de las prevenciones que este bloque viene realizando desde el 2004 en adelante.

Vuelvo al 3 de diciembre: hubo una eclosión, porque allí el temor terminó anudado alrededor del cuello del Gobernador de la Provincia de Córdoba hasta asfixiarlo, y antes de la asfixia logró tomar alguna medida o salir al cruce de situaciones que realmente eran extremadamente peligrosas por el conflicto social que se estaba generando.

Creo que se está operando con un sentido de la oportunidad equivocado, ¿sabe por qué, señor presidente? Porque este Gobierno ha tenido todas las oportunidades que la oposición le pudo haber brindado para llevar adelante las políticas de Estado que singularmente hacen quienes planifican con anticipación para evitar que estos desbordes se los terminen llevando por delante.

Querían la Ley de Trata, la tuvieron; querían la Ley de Cascos, la tuvieron. Pero, señor presidente, ¿cuál es el grado de hipocresía o, diría, de impericia, de ineficacia, de olvido de este Gobierno ante los últimos hechos de brutalidad producidos por el delito, particularmente de aquellos llamados "motochorros"? Recién esta semana se reglamentó la Ley de Cascos. La pregunta es para qué la quieren.

Querían la Ley de Desarmaderos, la tuvieron; querían la de Narcomenudeo, también; la Ley de Convivencia y Antimotines, también. Pero previo a esto, en cada una de nuestras interpretaciones les dijimos que mientras no rompieran con la vinculación –algo a lo que se refirió la legisladora Frencia- entre el narcotráfico, la droga, la política y la Policía, estas leyes iban a ser absolutamente inoperantes.

Tomar esta decisión en este momento es simplemente un operativo lampedusiano, es decir, hacer algo para que nada cambie. Todo va a seguir exactamente en el mismo sistema. Y, ¿sabe por qué, señor presidente? Porque durante 14 años no se planificó jamás, porque

durante 14 años la droga fue subiendo poco a poco un escalón cada año hasta convertir a Córdoba de una simple provincia de tránsito en una de consumo, tráfico y comercialización a gran escala. Lo venimos denunciando desde el año 2004, y en el 2005 el Gobernador José Manuel De la Sota admitió que sabía dónde se vendía la droga. Entonces, esto que se está produciendo ahora, más que un manotazo para tratar de superar una contingencia, es tratar de encontrar una medida ante el temor y el miedo de que esto termine implosionando.

Porque, fíjese, señor presidente, aparece el nuevo Fiscal General de la Provincia de Córdoba en la Legislatura y ante las preguntas de los distintos legisladores da la impresión de que este señor no conoce nada, no sabe nada. En la entrevista, concretamente, no sabía la cantidad de hombres -hablaba de 200-, ni de dónde saldrían, probablemente de la actual planta de personal policial. De una planta que está sospechada de vinculación con el ámbito del tráfico de drogas en la Provincia de Córdoba que, reitero, no se descubrió por investigaciones por parte de la Fiscalía que tendría que haber actuado, se descubrió por un programa de televisión y un "buchón". Es una provincia en donde se lava dinero, como ya dije, se trata de una realidad de Córdoba.

Fíjese hasta qué detalle llega esto que tengo una anécdota, en el mismo tren de contarla, como ya lo hizo el legislador García Elorrio: los fiscales contra el narcomenudeo ya no actúan, y no porque no hayan quioscos sino porque directamente han capitulado. A tal punto lo han hecho que en la medida que se cierran, se abren cada vez más, y a esto se lo dice la propia policía, señor presidente, la misma policía que recorre las calles. Fui a ver a los fiscales del narcomenudeo, señor presidente, para decirles que en la calle Bolívar se vendía droga donde concurrían funcionarios, magistrados y abogados. A eso no lo desconocía porque fueron a la computadora y me contestaron que sí lo tenían, pero el quiosco en Bolívar todavía está, señor presidente. No sé si siguen yendo los mismos pero todavía está funcionando. Nada se hizo.

Estos 200 policías, estos hombres que el fiscal dice que van a integrar la Policía Antinarcótráfico, son parte de la misma Policía que el propio Gobernador se encargó de criticar; son esos mismos hombres los que van a integrar ese escuadrón. Mientras, el Gobernador ha dicho que esta Policía debe recomponer su relación con la sociedad. Esta es la pregunta que me hago, y le formulo a los legisladores y a la propia sociedad: ¿es esta la policía que va a integrar los escuadrones?

Los que van a provenir de la Escuela de Policía, que podrán demorar de seis meses a un año, van a tener una capacitación que tiene que ser mucho más profunda que la que tienen actualmente, mucho más intensiva -por lo que es obvio que no puede durar seis meses- por el conglomerado de cosas que incluye. Entonces, ¿por qué habría que confiar en esta Policía Antinarcótráfico si quienes la van formar están sospechados, o al menos la sociedad tiene la sospecha de que todavía mantiene vínculos con el narcotráfico?

Ese es el verdadero problema, señor presidente: el problema del crimen organizado, del delito organizado. Y a eso no lo va a resolver la Policía Antinarcótráfico porque es parte de un diseño criminal que se ha extendido en la mayoría de las áreas sociales, con predicamento en la clase social donde la pobreza hace estragos y donde la ausencia del Estado es total.

No me hablen después del Plan Primer Paso o del Confío en Vos, ya que finalizaron el año debiendo 23 millones de pesos al Plan Primer Paso, ni siquiera en eso están al día.

Pero, además, si se quiere hablar de cuestiones preventivas, aquí quiero hacer una digresión, señor presidente, ya que como periodista lo dije ante la propia cara del Gobernador, estando usted, presidente, a dos espacios de donde estaba sentado yo: desde que usted se fue del Ministerio de Seguridad —en ese momento Ministerio de Gobierno— nunca más hubo prevención del delito en la Provincia de Córdoba. Y no es un elogio para usted, ya que es una responsabilidad que tenía y que cumplió, pero los que vinieron después nunca más lo hicieron.

Cuando aquí se habla de inclusión, de educación o de prevención no hay que declamar, hay que hacer. Es una obligación, es una política de Estado.

Entonces, la frecuencia del delito —donde la droga hace estragos—, esa calamidad no se puede resolver si durante los últimos 14 años no se hizo absolutamente nada y fue aumentando progresiva y peligrosamente. Si así está instalada, creo que no se puede detener el crimen. Si así está instalada y creen que deteniendo motos está todo solucionado y que con esta nueva herramienta van a solucionar lo que no se hizo con una política de Estado, están equivocados.

Señor presidente: la droga destruye la memoria, por eso hay que instrumentar menos y actuar más. Si hubieran sido inteligentes y hubieran actuado hace 14 años, tal vez hoy no estaríamos hablando de este tema.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).— Tiene la palabra el legislador Birri.

Sr. Birri.— Señor presidente: estamos asistiendo a la prolongación de un debate que aborda la problemática de uno de los grandes flagelos que están asolando este solar común que tenemos los cordobeses.

Antes de entrar en el meollo que hace a mi posición político-legislativa sobre este tema, me parece que ayuda a un adecuado análisis un pequeño resumen del contexto histórico que inicialmente genera la adhesión de la Provincia de Córdoba a la denominada Ley de Desfederalización del Combate de las Drogas con la sanción de la Ley 10.067.

El antecedente inmediato es la Ley nacional 23.773, que se originó bajo un contexto muy particular que quizás poco y nada tiene que ver con el presente de la República Argentina. Estamos hablando de los últimos años de la gestión del doctor Carlos Menem y los primeros años del Gobierno de Néstor Kirchner; un momento en donde aún está latente en la memoria colectiva la muerte de dos militantes sociales como fueron Kosteki y Santillán.

Es en la crónica de aquel tiempo donde se sanciona una ley que, en principio, fue hecha a medida de la Provincia de Buenos Aires para que pudieran ser los gobiernos provinciales, a través de su sistema judicial, quienes tuvieran competencia en una materia que

hasta ese momento no le era propia, como la vinculada a la investigación y represión de los delitos menores vinculados al tráfico de estupefacientes.

Lo cierto es que así debe haber sido porque luego de transcurridos 8 ó 9 años de la sanción de esta ley, en 2005, nadie más, excepto la Provincia de Buenos Aires, había decidido utilizar el mecanismo de la adhesión para transferir su competencia, hasta que a mediados del 2013, en una recordada sesión, Córdoba dicta su ley de adhesión.

Hago esta introducción para que tengamos en claro cuál fue el contexto histórico en el cual se sanciona la Ley provincial 10.067 y con el cual se produce el tratamiento del actual proyecto de ley. Transcurrido casi un año mantenemos las mismas prevenciones que en aquella oportunidad, los mismos interrogantes en un tema que, siendo muy complejo, a mi juicio no han sido disipados en estos 10 meses de derrotero que ha tenido la mencionada ley. El principal interrogante que nos hacemos es, por supuesto, si con la adhesión a una ley nacional estamos dando respuesta al delito en concreto o al problema de la droga, ya que está claro –y a esta altura de los acontecimientos nadie lo pone en discusión- que existe una directa vinculación entre la metodología, el delito y la cuestión de la droga, porque con esta última el delito en nuestras sociedades -lamentable e indudablemente- se ha tornado mucho más violento y dramático.

Lo que hay que seguir discutiendo –y lo seguiremos intentando- tiene que ver con el diseño de políticas criminales, en lo que está envuelta la presente norma o proyecto.

Sigo pensando, como en aquella oportunidad, que quizás no hay que ir a la Constitución para sostener que el problema de la droga debiera ser de competencia federal. Se trata de un problema que en su complejidad arranca en la frontera, para eso tenemos los informes permanentes -que seguramente habrán sido motivo de consulta por parte del conjunto de los legisladores que, responsablemente, se involucran en el análisis y profundización de este tema- de Gendarmería Nacional, donde están las pistas clandestinas a partir de las cuales se introduce en todo el territorio nacional.

Por ello me parece que, como una cuestión jurídica, operativa y también de sentido común, la mejor respuesta al combate de la droga no debiera darse desde cada Provincia en forma individual; nos parece que la respuesta al tema del narcotráfico se debiera dar desde una estrategia nacional -lo vuelvo a decir-, no solamente por una cuestión práctica sino también operativa y jurídica.

En nuestro país y en buena parte de los países del mundo occidental –lo afirmo porque hemos estado viendo concienzudamente lo que dice el derecho comparado-, la respuesta tiende a una mayor concentración del control y hacia autoridades unificadas.

Leía, por caso, que Méjico, que es uno de los países que tiene diversificada en la distribución de los estados subnacionales, la competencia y la investigación de la persecución penal –me refiero a Méjico por el impacto que tiene la casi patología del narcotráfico en este país hermano- está intentando retornar de este esquema, de este diseño de competencia para concentrar los esfuerzos en una estrategia nacional.

Concretamente, creemos que la respuesta moderna se da hacia una mayor concentración del control y a sus autoridades unificadas porque está demostrado que el narcotráfico por definición es un delito móvil y con raíces múltiples.

Un informe -con el que también contamos- nos dice que no desaparecerá nunca en la medida que mueve 600 mil millones de dólares anuales. Hoy está absolutamente claro que es así, el tráfico de drogas, junto con el de personas y el de armas constituyen los tres delitos más deleznablemente rentables en estos tiempos de la globalización; por lo tanto, se trata de dar una respuesta eficaz a este problema.

El informe concluye diciendo que en general, en la tendencia internacional, encontramos que la misma autoridad en materia de aplicación de drogas debería tener la supervisión de los organismos de seguridad, para que tenga la posibilidad de controlar la lucha contra el narcotráfico en toda su dimensión y, además, las estrategias y trabajo de prevención a todo nivel; quizás, también encontramos como contradictorio que el último eslabón de la cadena sea el que consume, a quien nosotros consideramos además de víctima como a un afectado. Consideramos afectado a ese joven que está en el colegio o que se encuentra desocupado en alguna esquina de algún barrio y al que se le pone la droga al alcance de la mano por algunas pocas monedas.

Creemos que la mejor solución para un combate más eficaz no habría sido la de dividir la cadena sino mejorar los recursos para quienes hoy la están llevando adelante en el marco de su competencia, que es la Justicia Federal, otorgándole más recursos, más logística, más presupuesto y asumiendo claramente que debe haber una colaboración en los tres niveles, en los tres Poderes y en las tres dimensiones estatales.

El segundo interrogante que tenemos -haciendo un esfuerzo de brevedad- y que también queremos plantear, es un punto en el que seguramente tendremos una mirada distinta a la que ha expresado el señor miembro informante del oficialismo, y que tiene que ver con los antecedentes de la Provincia de Córdoba, del Estado provincial, en la lucha contra el narcotráfico en el marco de lo que es esta nueva competencia de la Policía provincial, en términos de colaboración con la Justicia Federal, que no ayudan a ser demasiado optimista con este tema.

Lo cierto, como acá bien se ha dicho, es que en casi catorce años esta Provincia -que era simplemente una provincia de tránsito- se ha convertido en un lugar de tránsito, de consumo, de comercialización de tráficos y de grandes cocinas. Se abre entonces un interrogante preocupante, porque nos parece que al menos ha existido un tránsito errático en algunas políticas que se implementaron. Tengo presente por caso, porque fue motivo de debate en el anterior período legislativo, cuando se crea prácticamente con “bombos y platillos” la Secretaría de Prevención de Lucha contra el Narcotráfico, recuerdo que se puso a cargo al doctor García Díaz, que luego de un gran entusiasmo inicial, a los pocos meses salió eyectado de ese cargo por falta de presupuesto y por carencia de respuestas por parte del Poder Ejecutivo provincial.

Hoy esa Secretaría -que ya no tiene siquiera el rango de secretaría- se ha transformado en una dependencia de inferior calidad, con tres o cuatro empleados, que no cumple absolutamente con ninguno de los objetivos o funciones para los cuales había sido creada.



Señor presidente: el problema de la droga es un síntoma de algo mucho más profundo, y su eventual superación requiere afrontar las dificultades y los retos estructurales que lo nutren y multiplican; de lo contrario, se terminará reforzando la idea de que se necesita un arsenal de medidas cada vez más punitivas para afrontar los dilemas que de ello derivan. La creación de una Fuerza Policial Antinarcoctráfico y su dependencia de la Fiscalía General, sacándola de la órbita de la jefatura, en principio me resulta una suerte de injerto de dudosa efectividad y de un poco disimulado marketing político que, la verdad, nunca falta en las iniciativas del Gobernador, doctor José Manuel De la Sota.

Profundizando el tema, y si la idea es como lo venimos reclamando: la decidida ingerencia del poder político en el diseño y la planificación de las políticas públicas de seguridad -hasta ahora virtualmente tercerizadas y delegadas en manos de la Policía de la Provincia de Córdoba-, lo más adecuado sería adoptar un criterio similar al que tiene la Provincia de Santa Fe con la creación de una Secretaria de Delitos Complejos que supervise el trabajo contra el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la trata de personas. En ese marco, lo óptimo sería conformar un dispositivo policial unificado y especializado en el control de la criminalidad organizada y que aborde no solo la investigación y represión del tráfico de drogas sino también el delito económico, que las más de las veces se encuentra directamente vinculado a aquel.

Por último, es de esperar que esta fuerza policial -a la que habrá que exigirle la transparencia que no tuvieron sus antecesores- no se dedique -como lo ha sido hasta ahora, a esta altura de los acontecimientos tristemente célebres, la División de Drogas Peligrosas- a perseguir al pibe que está fumando un porro, mientras las estructuras mafiosas vinculadas al narcotráfico -los cárteles- gozan de buena salud. Hasta ahora, la Policía de la Provincia de Córdoba ha sido mucho más preparada, mucho más capacitada para combatir el delito menor, para combatir al pibe que está en la esquina, para el que está fumando un porro, para detener al pibe que es víctima de una contravención por merodeo, que para combatir el delito complejo y el crimen organizado.

Señor presidente, a pesar de lo expuesto, y desde esta mirada crítica, voy a adherir a este proyecto porque, aun con estas deficiencias, en las iniciativas que permitan abrigar alguna luz de esperanza para los cordobeses que están tan preocupados o más que nosotros por este flagelo que afecta a la Provincia de Córdoba y que se lleva la vida de tantos jóvenes, no queremos ser nosotros los que pongamos un obstáculo a esta luz de esperanza y a este optimismo con que pueden llegar a ver los cordobeses lo que debiera ser el primer paso en un efectivo combate contra el narcotráfico, primero; y, segundo, porque reconocemos una legitimidad de origen que tiene que ver con la legitimidad que tiene Unión por Córdoba a través del voto popular.

Sin perjuicio de eso, señor presidente, pido se consigne mi voto negativo al artículo 20 del proyecto de ley, porque nos parece una absoluta contradicción conformar una fuerza nueva capacitada, al menos en la intención, sobre las bases de un nuevo paradigma de seguridad democrática incorporando a personal que ha revistado en una Dirección fuertemente cuestionada e involucrada en hechos de corrupción y vínculos con el narcotráfico, como fue la actual Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico.

Hechas estas apreciaciones y esta salvedad, recomiendo el voto positivo al proyecto de ley que está siendo motivo de tratamiento.

Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.

Queda consignado su voto negativo al artículo 20 y su voto positivo al resto del proyecto.

Tiene la palabra el legislador Sergio Busso.

Sr. Busso.- Señor presidente: antes de que el legislador Gutiérrez haga el cierre de este debate, no quería dejar pasar por alto un grueso error que al oído de todos nosotros nos resulta extraño porque, si bien no hace al tema en cuestión, el legislador Fonseca -que es un especialista en materia económica- nos viene ilustrando en el último tiempo a partir de haber recibido la Cuenta de Inversión de esta Cámara, y es puntualmente el tema de la deuda del Programa Primer Paso. Le digo al legislador Fonseca que ya el año pasado cometió el mismo error.

Obviamente, en el mes de diciembre se pasa a deuda técnicamente para poder pagar el mes de diciembre en enero, tal como fue pagado.

Imagínense que si no hubiéramos pagado esos 23 millones de pesos que involucran a 15.000 chicos a lo largo de toda la Provincia, habría algún conflicto al respecto ¿no?

Por eso digo que, como muestra basta un botón, el legislador Fonseca, una vez más, usa la mentira y la falsedad para tratar de hablar de cuestiones económicas.

Quería hacer esta aclaración que no quería dejar pasar por alto porque nos parecía una valoración totalmente falsa.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fonseca.

Sr. Fonseca.- Señor presidente: no se trata de una mentira ni de una falsedad. Los números están en la Cuenta de Inversión.

Si han pagado, no tenemos absolutamente ningún tipo de conocimiento al respecto y, por otro lado, si hubieran pagado, tendrían que haber abonado también el resto de la deuda que figura en esa Cuenta de Inversión, por lo cual, si de falsedades hablamos, podemos discutir bastante con el legislador Busso sobre el tema de la Cuenta de Inversión, tema que vamos a pedir que se discuta en la Legislatura, que hace años que no se hace y de facto se da por sancionada.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Carlos Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: en primer lugar, quiero informar al legislador Fonseca que, como siempre lo hemos hecho respecto de este tema, no solamente no vamos a eludir el debate sino que lo vamos a hacer en las próximas sesiones.

Como ha dicho el legislador Busso, estamos arribando al final de un debate del cual tengo la impresión que ha tenido momentos de altura, que inducen a pensar que se comprende la profundidad y la complejidad del tema, como muchos legisladores lo han expresado.

Se pueden criticar muchas cosas, y se ha hecho. Se puede decir “yo lo habría hecho de otra manera” o “yo lo haría de otra manera”, sin abandonar la idea rectora que indica que estamos precisamente frente a un fenómeno de tal complejidad que informa y determina diferentes situaciones de nuestra sociedad, comenzando por la inseguridad como tal, perforando transversalmente distintas situaciones que se viven en cada una de nuestras familias.

Hemos pasado por momentos que tienen su rasgo de comicidad, como, por ejemplo, la concurrencia de los perros que tenemos en esta Legislatura, que casi se transforman en el leitmotiv, sin negar que ésa, como tantas otras, sin ninguna duda es una herramienta necesaria que deben tener en su poder las Fuerzas de Seguridad para combatir el narcotráfico, pero también en orden a entender las dimensiones del fenómeno. En tal sentido, me imagino a los pilotos de las cientos y cientos de avionetas que discurren por el cielo de nuestra Patria – no solamente por Córdoba- riéndose de ver que dotamos de esa herramienta -los perros- y no tenemos una ley de derribo y una radarización consecuente con la misma.

En los últimos 15 años el fenómeno de la droga en Argentina ha pasado a tener características distintas -en términos estructurales- de tratamiento y mirada, que no la tenía antes de que Brasil, por ejemplo, aplicara la Ley de Derribo, militarizara las favelas y llevara adelante políticas que pueden o no ser criticadas, pero que constituyeron una decisión muy firme de la lucha contra el narcotráfico.

También hemos asistido a posiciones que, hurgando desde el detalle técnico jurídico de la ley y abundando en prejuicios -a los cuales estamos acostumbrados-, eluden con consignas o con acusaciones que terminan sin tener pruebas suficientes en la realidad, evaden y, en todo caso, son parte de un discurso que responde a la decisión política de poner palos en la rueda a cualquier iniciativa que nosotros tengamos para ir resolviendo cuestiones complejas -no lo negamos- y los errores que nuestro Gobierno puede haber cometido al respecto.

Este debate ha tenido un poco de todo y, en verdad, por respeto a los legisladores, no abundaría -porque quienes me antecedieron en el uso de la palabra lo han hecho, aunque sea en forma parcial- en informar debidamente la verdadera complejidad y profundidad que el fenómeno del narcotráfico tiene hoy en el mundo, en nuestro continente, en Argentina y, en particular, en nuestra Provincia.

Pero, señor presidente, lo que no se puede hacer con este debate es banalizarlo; y banalizarlo es, sin ninguna duda, pensar que es una “sensación” la de la inseguridad sobre la cual nuestro Gobernador se monta para establecer un escenario donde juzgar intereses políticos que, por legítimos y válidos que sean, están muy lejos de la realidad y complejidad del fenómeno que estamos analizando.

Sin ir más lejos, hoy nos informó un compañero de bancada, que por otras razones y en representación de esta Cámara estuvo en la vecina provincia de Santa Fe y circunstancialmente se cruzó con el Ministro de Seguridad de esa provincia, que éste le había manifestado –o se manifestó en la reunión en la que participó- que él y el Gobernador Bonfatti viven hoy en un hotel; no viven más en sus domicilios particulares, viven en un hotel. Creo que todos me van a eximir de explicar a qué se debe esa situación. Entonces, banalizar este debate, señor presidente, es algo que no se puede hacer.

También se ha dicho acá que no estaríamos discutiendo esto si algún Robin Hood de la prensa o alguna circunstancia determinada no hubiese disparado esta situación. Eso es de un reduccionismo y una simplificación casi infantil, señor presidente, más allá de las consecuencias que han generado esos hechos. ¿Sabe por qué? Porque hoy estamos discutiendo y concluyendo un debate que pone en manos del Poder Ejecutivo -y en este caso de la Justicia cordobesa- herramientas para mejorar y ser más eficiente y eficaz en la pelea contra el narcotráfico.

La verdadera causa por la que estamos discutiendo hoy no es aquella crisis que se ha mencionado aquí; la verdadera causa es que hubo un gobierno que tuvo la valentía y la decisión política de llevar adelante la pelea contra el narcomenudeo, y no porque nosotros seamos ingenuos y pensemos que ese eslabón, uno de los eslabones que forman la maldita cadena del narcotráfico en el mundo, en nuestro país y en Córdoba, nos va a convertir en los paladines, en quienes vamos a resolver todas las cuestiones.

Señor presidente: por los años '70 fue creada la DEA en los Estados Unidos, a la cual antecedieron no menos de cinco agencias que se superponían en el tratamiento del mismo tema. ¿Usted se imagina a la oposición cuestionando que esa nueva propuesta para esa agencia de lucha contra el narcotráfico, contra las drogas, era una estructura burocrática, que nada cambiaba lo anterior y que, en definitiva, se podría seguir como estaban? ¿Se imagina, señor presidente, que esa agencia, que hoy tiene un presupuesto de 2.500 millones de dólares y más de 11 mil agentes, de los cuales 5 mil son agentes especiales, podría ser tachada de estructura burocrática por un país, que es cierto que tiene doble moral, pero que no duda, como no hemos dudado nosotros -al nivel que nos corresponde- al tomar la decisión inquebrantable de pelear contra el narcotráfico? ¿Usted se imagina, señor presidente, apagando la luz, cerrando y entregando las llaves de la DEA, que en estos casi 40 años de actividad ha pasado por todas las idas y vueltas, éxitos y fracasos que demuestran, precisamente, que estamos frente a un fenómeno de una complejidad y dificultad para combatir verdaderamente enorme? Porque esta doble moral pasó por el famoso caso Camarena, en Méjico, pero también pasó por la doble moral de las organizaciones de izquierda que forman parte de las FARC en Colombia, que terminaron admitiendo y admiten en la actualidad que no solamente cobraban impuestos a los productores y comerciantes de drogas sino que también ellos incurrieron en esas actividades, entre otras, señor presidente.

¿Usted se imagina al país vecino de Brasil, con 7 mil kilómetros de litoral marítimo, con casi 7 –si la memoria no me falla- países limítrofes, 3 de los cuales son productores de droga, proveedor –me refiero a Brasil- de los solventes que permiten –en los países de origen- transformar y fabricar la droga?

Señor presidente, cuando el Presidente Lula llegó al gobierno de Brasil planteó que no bastaba solamente con la militarización de las favelas sino que había que tener una política de prevención y una política social, de la que tanto se habló aquí. En Río de Janeiro hay más de 620 favelas que albergan más de 1 millón 50 mil habitantes; de esas 620, 250 se consideran como recuperadas –entre comillas- por el PT brasileiro, por su trabajo político, social, de las redes de organizaciones sociales, etcétera. El resto todavía sigue en manos del narcotráfico, de los grupos paramilitares, etcétera.

¿Usted ha visto, señor presidente, que la oposición en Brasil diga que hay que cerrar las puertas, que hay que apagar la luz y devolver las llaves y no seguir peleando contra el narcotráfico? No, señor presidente, no funciona así.

Esta es una guerra y una pelea que vino para quedarse y que incluso antecedió, en términos de globalización, a la propia globalización económica.

Es un fenómeno de tal complejidad que admite muchas cosas, menos dos: la falta de decisión política para enfrentarlo y la ingenuidad para especular políticamente porque, en definitiva, es ingenuidad.

Por eso digo claramente, nosotros estamos hoy aquí discutiendo, cerrando este ciclo y dotando a la Justicia de estas herramientas porque estamos seguros que lo que otros tienen hoy como saldo de su experiencia puede tener avances y retrocesos, pero, sin ninguna duda, pregunte a quien le pregunte coincidirá en que no es dispersando el poder sino centralizándolo, precisamente, en un solo organismo, poniéndolo, como en el caso de la DEA o tantos otros casos de América Latina, bajo el Ministerio Público, es decir, bajo la órbita de la Justicia. Eso es lo que estamos haciendo, señor presidente.

Como nadie duda que hay que tener una fuerza policial especializada; nadie se deja vencer por la tentación de decir: “¿y en el medio qué vamos a hacer?”; y mientras montamos las escuelas de capacitación, mientras recurrimos a esas nuevas generaciones “¿tenemos que parar el mundo y no vamos a formar esa nueva fuerza policial?” Esas son las preguntas que se le hicieron al Fiscal Moyano, entre tantas otras. Sin embargo, con una claridad y sencillez de los que verdaderamente saben porque trabajan todos los días en esto, el Fiscal Moyano dijo: “no vamos a crear ninguna fuerza burocrática, tal como se plantea aquí, simplemente va a ser un problema de coordinación y de información”, refiriéndose a lo que aquí también se ha planteado de la supuesta interferencia con la Justicia Federal llevada a las investigaciones y a la colaboración de la Policía.

Estoy seguro que algunos legisladores hubiesen querido un Fiscal General más al estilo de un paradigma que, a lo mejor, es el que más agrada, con un discurso más de tipo político. Yo prefiero, señor presidente –por supuesto, como siempre, veremos en el andar como se desempeña este funcionario–, esta sencillez, este conocimiento y esta practicidad con la que

este funcionario informó no solamente ese día, sino que también lo hizo de la misma manera en muchas otras charlas que hemos tenido con él.

Esta es la realidad: una decisión política de nuestro Gobierno, del Gobernador De la Sota, de llevar adelante esta pelea; una corrección de las herramientas que, en principio, la realidad demostró que no son suficientes, y la presencia hoy de esta decisión en esta herramienta que estamos votando.

El legislador Yuni mencionaba recién declaraciones del Fiscal Federal de la Ciudad de Río Cuarto, Carlos Ochoa. Yo tengo aquí, en mi poder, el mismo reportaje al que él hacía referencia, sólo que él también, sin querer tal vez, olvidó otras cuestiones que el Fiscal Federal de Río Cuarto ha dicho respecto de otros aspectos de los que se le preguntaba sobre la lucha contra el narcotráfico. A lo que se le preguntaba –por un periodista– sobre los casos de grave corrupción, el Fiscal respondía: “Lo que uno trata es de atenuar o aminorar las posibilidades. La corrupción siempre va a estar presente, el problema está cuando no se tienen mecanismos de control y seguimiento que sean sumamente celosos en lo que hace a la actividad”. Y concluía: “este nuevo modelo, evidentemente, aminora los riesgos porque contiene controles y mecanismos para reducir la corrupción a su mínima expresión. Siempre hay que tener en cuenta que el narcotráfico tiene un componente económico que corrompe y destruye. Siempre he sido de la idea de que había llegado un momento en el que no podía quedar más en la órbita policial la investigación de los casos del narcotráfico y que debía crearse una fuerza especial”. Esto es, complementando lo que el legislador Yuni leía recién en su intervención, lo que decía el Fiscal Federal de Río Cuarto.

Nosotros, a su vez, vamos a decir –porque aquí se han hecho apreciaciones– que no vamos a ceder ni intercambiar supuestas operaciones, corrupciones o malas prácticas de algún funcionario en particular de la Justicia Federal. ¡Vaya! si nosotros pudiéramos tener presunciones como las que tanto usan en estos debates. No lo vamos a hacer, no vamos a ceder a esa tentación. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque para nosotros no todos los jueces federales son corruptos, no todos los funcionarios federales son corruptos; tampoco son corruptos todos los funcionarios de la Justicia provincial y mucho menos todos los policías que hoy, por cientos y cientos, saturan el territorio provincial, en un concepto elemental que es la ocupación del territorio frente a la inseguridad, en la cual el narcotráfico tiene, sin ninguna duda, una presencia importantísima. Tampoco todos ellos, que hoy son reclamados por la mayoría de la sociedad, son enteramente corruptos.

Por eso, señor presidente, quedamos con la necesidad de discutir verdaderamente sobre estos temas –como, reconozco, por momentos aquí se ha hecho–, con la altura que amerita su magnitud.

Hoy, después de que votemos este proyecto, nos iremos de este recinto –como producto concreto del aporte de esta Legislatura– con la creación de una Comisión de Seguimiento y Control –inédita en nuestro país, al igual, como bien se dijo aquí, que la Policía de Lucha contra el Narcotráfico–, que será de nuestra responsabilidad. Los legisladores que votarán negativamente este proyecto estarán votando, por consiguiente, en contra de la creación de una Comisión que ellos mismos van a conformar –los sé cumplidores de la ley, aunque poco coherentes– y donde tendrán, entre otras cosas, la posibilidad de controlar y discutir todos aquellos temas que consideren pertinentes.

Por las razones expuestas, señor presidente –en línea con lo expresado por el miembro informante de nuestro bloque–, adelanto el voto afirmativo al presente proyecto de ley y solicito que se pase a votación.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).– En consideración en general la segunda propuesta de ley contenida en el despacho referido a la creación de la Fuerza Policial Antinarco tráfico; modificación de las Leyes 9235 –de Seguridad Pública– y 8123 –Código Procesal Penal–, tal como fuera emitido por las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).– Aprobado.

La votación en particular se realizará por número de Título.

–Se vota y aprueba el Título I, artículos 1º a 15.

–Se vota y aprueba el Título II, artículos 16 a 26.

Sr. Presidente (González).– Siendo el artículo 27 de forma, queda aprobado el proyecto en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).– Conforme lo resuelto en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, corresponde dar tratamiento a los puntos 120 y 121 del Orden del Día,



proyectos de ley 13619 y 13620/L/14, que cuentan con despacho de comisión, al que damos ingreso.

Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.

Sr. Busso.- Señor presidente, señores legisladores: como todos saben, los proyectos que se encuentran en tratamiento tienen por objeto proponer una modificación al texto del actual artículo 281 del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, que regula el instituto de prisión preventiva en el proceso penal cordobés.

Conforme la interpretación textual de la letra del actual artículo 281 del referido Código –y su relación con el inciso 1) en él contenido–, siempre –y no en algunos casos– que existieren elementos de convicción suficientes para sospechar como probable la participación punible del imputado en el hecho investigado, se debe disponer –no es una opción, señor presidente– su prisión preventiva: primero, si se tratare de delitos de acción pública reprimidos con pena privativa de la libertad y no aparezca procedente, «prima facie», la condena de ejecución condicional.

Ello nos conduce a sostener que estaríamos ante una presunción «iuris et de iure» de peligro procesal, lo cual –como es por todos sabido– resulta contrario a lo normado tanto por la Constitución Nacional como Provincial y a los tratados internacionales incorporados en ellas y a su mismo nivel, dado que se estaría estableciendo una categoría de delitos inexcusables, siendo que de la normativa mencionada, al igual que del propio Código Procesal, surge que la privación cautelar de la libertad debe ser excepcional y debe disponerse cuando fuere absolutamente indispensable para evitar el riesgo del daño jurídico.

Para salvar dicho obstáculo, señor presidente, señores legisladores, la mayoría de las doctrinas han interpretado que la presunción de peligrosidad que resulta de esa norma debe admitir prueba en contrario. Así, tenemos el ejemplo de Cafferatta Nores y Frascaroli que han sostenido, en su momento, que “admitir la presunción ‘iuris et iure’ de la ley sobre que, dada cierta gravedad de la pena posible a imponer –por su escala o por su modo efectivo de cumplimiento–, el imputado siempre va a intentar eludir la acción de la Justicia, desde nuestro punto de vista –dicen los autores–, es incorrecta, pues no es verificable la realidad y, por lo tanto, inconstitucional, pues estará vulnerando las bases del sistema jurídico que hemos señalado con anterioridad –principio de inocencia, etcétera”.

Seguidamente, agregan que resulta más aceptable “que la ley pueda consagrar la presunción de que, frente a la posibilidad de la imposición futura de una pena de cierta gravedad, el imputado va a optar por la fuga; pero esto exige que siempre tal presunción admita la posibilidad de prueba en contrario, o sea, la prueba tendiente a demostrar que, a pesar de la gravedad de la imputación y de la amenaza de pena privativa de la libertad derivada en ella –por su escala o por su modo de efectivo cumplimiento–, no hay en el caso concreto el peligro de que se frustre la acción de la Justicia”.

En el mismo sentido se ha expedido el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en numerosos precedentes. Entre otros: Santucho, sentencia Nº 54 del 14 de junio de 2004; Montero, sentencia Nº 1 del 15 de febrero de 2005; González, sentencia Nº 24 del 30 de marzo



de 2005; Rodríguez, sentencia Nº 137 del 31 de octubre de 2006; Álvarez, sentencia Nº 140 del 28 de junio de 2007.

Los argumentos vertidos en dichos fallos importaron un avance respecto de la jurisprudencia de dicho Tribunal en esta materia, ya que en resoluciones anteriores, por ejemplo, en el caso Aguirre Domínguez, sentencia Nº 76 del año 1997, si bien admitían que la presunción de peligrosidad no era absoluta, subordinaban el cese de prisión al triple acuerdo exigido por el artículo 283, inciso 2) del Código Procesal; de lo que puede deducirse que el análisis relativo a la indispensabilidad de la prisión preventiva ocurriría necesariamente después de su dictado, y no podía tener lugar a los fines de determinar o no su procedencia.

No obstante, en esas mismas resoluciones el Tribunal Superior de Justicia de nuestra Provincia ha sostenido que ante la amenaza de imposición futura de una pena efectiva o de cierta gravedad, el legislador presume “iuris tantum” la peligrosidad procesal, es decir, que existe un riesgo para la actuación de la ley si el imputado permanece en libertad, pues su ausencia o fuga imposibilitará la realización del juicio, que no podrá formalizarse en su ausencia, y que dicha sospecha sólo podrá ser neutralizada si concurren circunstancias singulares que demuestren con suficiencia que tal resguardo resulta innecesario.

En resoluciones posteriores el máximo Tribunal de nuestra Provincia ha efectuado una extensa mención de múltiples supuestos que no constituyen esa condición de excepcionalidad, entre ellos, la sola circunstancia de que el imputado carezca de antecedentes y se domicilie o trabaje en un medio social; que tenga empleo estable en el establecimiento familiar o un fuerte arraigo en el seno de su comunidad; que el imputado haya comparecido espontáneamente y haya tenido una actitud colaboradora en el proceso; problemas de salud de los padres; carecer de medios económicos, etcétera.

Por el contrario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos “Loyo Fraire, Recurso de hecho, Causa 03/2013 de fecha 6 de marzo de 2014, al declarar procedente el recurso extraordinario planteado por la defensa de los imputados, se remitió al dictamen del Procurador Fiscal, doctor Eduardo Ezequiel Casal, en el que éste, a su vez, hizo referencia a un dictamen anterior, emitido en autos “Merlini Ariel Osvaldo” sobre estafa procesal, de fecha 12 de marzo de 2013. En dichos pronunciamientos el Procurador Fiscal de la Nación consideró arbitraria la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba dado que, al sostener que la gravedad de los delitos que se imputan justificaría, por sí misma, la prisión preventiva, no brindó una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia.

Para nombrar algunos casos: “Gangaram Panday versus Surinam”, del año 1994; “Palamara Iribarne versus Chile”, del año 2005; “Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez versus Ecuador”, del 21 de noviembre de 2007; y “Bayarri versus Argentina”, del 30 de octubre de 2008. Asimismo, el Procurador Fiscal de la Nación agregó que la decisión apelada tampoco se ajustó a la garantía en cuestión, desde que les restó relevancia a las circunstancias personales invocadas a favor de los imputados, aduciendo de manera dogmática que, al no exceder la regularidad de situaciones que se presentan en la generalidad de los procesos, carecían de relevancia para contrarrestar aquella presunción, estimando que así el Tribunal Superior de Justicia le atribuyó carácter irrevocable a aquella presunción legal, en tanto no analizó la

incidencia de esas circunstancias en relación con la situación particular de cada imputado, privándolos, de esta manera, de la posibilidad de exponer razones a favor de su libertad.

En función de los parámetros sentados por la Corte de Justicia de la Nación en los autos que hemos mencionado, que implicó una variación en la interpretación que, pacífica y reiteradamente, ha efectuado el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, con relación al artículo 281 del Código Procesal, se impone la necesidad de adecuar la normativa vigente, de modo tal que no sólo se asegure el cumplimiento, por parte de la Justicia local, de los parámetros sentados por el máximo Tribunal de la Nación, sino que, a su vez, se evite que la aplicación inmediata de los criterios vertidos por aquél, conduzca al dictado de resoluciones que exceden el sentido marcado por dicha instancia superior. Repito, lo que trata de buscarse es que la aplicación estricta del fallo de la Corte pueda avanzar fundamentalmente en el dictado de resoluciones que exceden el sentido marcado por dicha instancia superior.

Conforme al texto proyectado, a los fines de analizar la procedencia o no de la prisión preventiva -o su mantenimiento o el cese-, deberán tomarse en cuenta ambas circunstancias previstas por los anteriores incisos 1) y 2) del artículo 281, esto es, tanto la probable pena a imponer al imputado, a la que se le asignará mayor o menor peso, conforme al monto estimado de aquella, y/o al carácter efectivo del cumplimiento, cuanto los demás indicadores contenidos con carácter enunciativo, en la norma de mención.

Huelga aclarar que en cada caso concreto deberá efectuarse una evaluación conjunta de los presupuestos legales de procedencia de la medida asegurativa -artículo 281, anteriores incisos 1) y 2) del Código Procesal Penal-, que permitan sustentar la peligrosidad procesal y con ello la indispensabilidad

de la coerción que se va a ordenar -o se va a mantener- para evitar el riesgo de daño jurídico que se produciría cuando la libertad constituye un peligro para el interés social, que en el proceso penal se encuentra representado en su fines, esto es, la averiguación de la verdad y la actuación de la Ley Penal.

En apoyo de todo lo precedentemente expuesto, resulta conveniente citar a la Excelentísima Cámara de Acusación de Córdoba, que en su fallo Irusta, del 1º de julio de 2008, brindó claros conceptos, tanto respecto de la interpretación que debía efectuarse con relación al artículo 281, en el sentido de la reforma que aquí se propone, como también respecto de algunas pautas que deberán valorarse al momento de adoptar una decisión en la materia que nos ocupa, concretamente, en aquellos delitos cuya pena conminada en abstracto es muy elevada, permitiendo que tal indicio, atento su especial fuerza probatoria, pueda fundar prácticamente por sí solo una inferencia a favor de la existencia de peligro de fuga en tanto al menos algún otro indicio específico del caso concreto lo complementa, por débil que resulte tal indicio adicional si se lo considera aisladamente. Y concluye la Cámara de Acusación: “la existencia de indicios propios del último párrafo del 281 -o análogos a estos- que por sí solos aparecerían como demasiado débiles para fundamentar la existencia de peligro de fuga será, no obstante, suficiente para ello si se le suma como indicio también a valorar un monto de pena conminado en abstracto considerablemente grave”.

Los argumentos de la Cámara de Acusación son los siguientes: “Queda claro, entonces, que cuando afirmamos que el monto de la pena, la posibilidad de condena de ejecución condicional, etcétera, aludidos explícita o implícitamente en el inciso 1º del artículo 281 del Código Procesal Penal, son indicios y no presunciones, lo que pretendemos decir es que, según nuestro punto de vista, se trata de hechos seleccionados enunciativamente por el legislador -al igual que los enumerados en el último párrafo del artículo- para que sean empleados por los jueces y fiscales en orden a que, a partir de ellos y mediante una operación simple de lógica inductiva, se infiera la prueba de otros hechos como, especialmente, la existencia de un peligro concreto de fuga o el entorpecimiento en la averiguación de la verdad... Esta toma de posición conceptual no se diferencia, esencialmente, en sus resultados prácticos de aquella que sostiene que el artículo 281, inciso 1), del Código Procesal Penal contiene una presunción – legal- iuris tantum –así, por ejemplo, del Tribunal Superior de Justicia en la causa ‘González, Camel Celso’, del año 2005, entre otras.

Ello es así porque siempre en términos prácticos la apertura hacia la prueba en contrario que admite este tipo de presunción legal permite precisamente que, cuando un hecho distinto al previsto en la presunción como indiciario le quita a ésta validez, la inferencia probatoria se realice también a partir de ese otro hecho o conjunto de hechos indiciarios que serán, en definitiva, aquellos que dotarán a la inferencia en cuestión de apoyo lógico – inductivo- suficiente.

Ello es precisamente lo que sucede también cuando se evalúa la prueba por indicios. Por eso, no sorprende que quienes entienden al artículo 281, inciso 1) como una presunción iuris tantum, en los resultados arriben a conclusiones similares a aquellos que sostienen que en dicha norma se prevén simples indicios probatorios. De hecho, ambas posiciones sortean adecuadamente la aquí ya mencionada ‘objeción de lo no excarcelable’, pues sólo quienes entienden que dicha norma establece una presunción iure et de iure, generan automáticamente una –inconstitucional- categoría de delitos que, a priori, no admiten la libertad del imputado durante el proceso...”

De todos modos, señor presidente, la conjunción del inciso 1) del artículo 281

del Código Procesal Penal como una norma que prevé indicios y no presunciones -en el sentido explicado- ofrece, obviamente, considerables ventajas desde el punto de vista de la resolución de casos para aquellos que, como este Tribunal, entienden que el peligro procesal concreto es un hecho que debe probarse.

Pues, si de esto se trata, la tarea del juez -o del fiscal en su caso-, consistirá simplemente en valorar la prueba existente al respecto -esto es, todos los indicios disponibles incluidos en este caso- y el monto de la pena, conforme a la regla de la sana crítica racional y a otras reglas específicas sancionadas expresamente por el legislador o derivadas de garantías constitucionales.

La idea central de lo que se viene desarrollando hasta aquí puede resumirse de la siguiente manera: un único indicio puede ser, lógicamente, suficiente para dar apoyo a una hipótesis fáctica. Con otras palabras: el hecho indicado puede tenerse por probado a partir de un único hecho indiciario. Nada impide, sin embargo, que el legislador o los propios jueces

establezcan limitaciones a la utilización de la prueba por indicios, fundadas en razones de política procesal.

Ahora bien, a esta idea central, en la presente resolución se agrega la siguiente: es posible, también, que determinadas limitaciones al empleo de la prueba por indicios resulten no sólo de restricciones legales sino que se infieran de la vigencia de determinadas garantías constitucionales. Tales limitaciones, en consecuencia, son de recepción ineludible.

En lo que atañe a la aplicación de estos principios referidos a la prueba indiciaria en el ámbito específico de la prueba de la existencia de peligro de fuga o entorpecimiento en la averiguación de la verdad para justificar el encarcelamiento preventivo, cabe decir lo siguiente: en la medida en que la posibilidad de condena de ejecución condicional en función de la gravedad de la pena –Código Procesal Penal, artículo 281, inciso 1º- constituye un indicio más entre otros referidos a esta problemática, como el hecho que el imputado cuente o no con residencia fija, haya sido o no declarado en rebeldía, haya sido o no sometido a un proceso anterior, etcétera –Código Procesal Penal, artículo 281 último párrafo-, todos los datos fácticos y otros que eventualmente se puedan presentar en cada caso han de ser valorados conjuntamente, en tanto indicios que son, para inferir a partir de ellos la existencia o inexistencia de los peligros procesales señalados.

Ahora bien, dado que –como se dijo- no existe ningún impedimento de orden lógico para que de un único hecho indiciario pueda inferirse el hecho indicado, es en principio factible que la existencia o inexistencia de peligro de fuga o de entorpecimiento surja con fundamento suficiente a partir de un único indicio, en tanto él tenga tal fuerza probatoria u ofrezca un grado tan importante de apoyo inductivo que, en definitiva, debilite la plausibilidad de las demás hipótesis alternativas, a punto tal de tornarlas inverosímiles.

Así, por ejemplo, la sola circunstancia de que un imputado que ha sido encarcelado durante el proceso y luego liberado no haya intentado fugarse ni entorpecer la investigación durante ese tiempo en libertad, puede permitir inferir la inexistencia de peligro concreto de fuga o de entorpecimiento en la averiguación de la verdad para el caso que luego se analice la posibilidad de un nuevo encarcelamiento, y tal inferencia será concluyente y se logrará válidamente a partir de un único indicio: “la actitud del imputado mientras estuvo en libertad”. Frente a ese dato, los demás contraindicios resultan tan débiles que no logran conmover su apoyo inductivo; así lo resolvió de hecho el Tribunal en la causa “Bustamante, Joaquín N. y otros sobre Falsedad Ideológica, etcétera”, en el año 2007.

Asimismo, y siguiendo esta línea argumental, puede eventualmente ser válido sostener, por ejemplo, que cuando el monto de la pena conminada en abstracto es extremadamente bajo, es posible que ese solo indicio baste para poder inferir ausencia de peligro de fuga.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando como indicio se cuenta con un monto de pena conminado en abstracto extremadamente alto? La línea de razonamiento desarrollada hasta aquí permitiría afirmar que desde un punto de vista lógico nada impediría inferir peligro de fuga a partir de ese único dato. Pero es precisamente en este punto en el cual la lógica propia de la prueba de hipótesis fáctica ha de admitir limitaciones surgidas de garantías individuales de jerarquía constitucional. Como ya se ha dicho, el principio de inocencia consagrado

constitucionalmente impide toda interpretación y aplicación de la ley que en la práctica importe la consagración de una categoría de delitos como no excarcelables. Ello es lo que sucedería si se admitiera que por el solo monto de la sanción, aunque este sea muy elevado, no corresponda conceder la libertad durante el proceso penal.

De allí que no por razones lógicas sino por imperio de una comprensión adecuada del principio constitucional de inocencia, no resulta factible negar la libertad durante el proceso penal únicamente en función del elevado monto de la pena prevista en abstracto para el delito imputado.

Por eso es que este Tribunal ha sentado la tesis, que aquí mantiene, según la cual del solo monto de la pena podrá inferirse, a lo sumo, un peligro abstracto de fuga que, para concretarse, deberá necesariamente ser complementado con otros indicios concretos, como los enunciados en el último párrafo del artículo 281 del Código Procesal, en función de lo dispuesto en el inciso 2) de la misma norma.

Con relación a la inclusión del último párrafo del artículo 281, corresponde señalar que la solución legislativa a cambios jurisprudenciales con efecto beneficiante ya existe –mutatis mutandi- en el inciso 5) del artículo 489 del Código de Procedimientos, que fue agregado a ese mismo Código en 1991, precisamente para viabilizar la aplicación de aquellos.

De allí que sea conveniente contemplar legislativamente, como lo vamos a hacer en esta sesión, una situación similar como es la que trata este proyecto. En este sentido, debe tenerse en cuenta que a la fecha existen numerosos pronunciamientos de distintas instancias judiciales locales –Fiscalías de Instrucción, Juzgados de Control, Cámara de Acusación, Cámaras del Crimen y hasta el mismo Tribunal Superior de Justicia- relativos a la materia que nos ocupa, que contienen fundamentos de peligrosidad procesal basados en el argumento de la presunción de riesgo que estaría contemplada en el inciso 1) del artículo 281, conforme la ya mencionada doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y que, por tanto, carecen de un análisis relativo a las circunstancias concretas del caso en cuestión.

Si dichas resoluciones fuesen revocadas automáticamente por falta de fundamentación, se correría el riesgo de que numerosos procesos penales vieran frustrados sus fines, ya sea para la averiguación de la verdad, para la realización del juicio o para la imposición y posterior cumplimiento de las eventuales condenas que puedan atribuirse, afectándose de esta manera el propósito constitucional supremo que tenemos de afianzar la Justicia, como asimismo el derecho, también constitucional, a la tutela judicial efectiva de las respectivas víctimas.

Es por ello que, frente a esta nueva interpretación de la norma provincial, que resulta más beneficiosa para las personas sometidas a proceso penal, se encuentren o no privadas de su libertad, resulta necesario que el funcionario judicial que deba pronunciarse, tanto respecto de la imposición o no de la prisión preventiva, cuanto de su mantenimiento o cese de la misma, efectúe una estricta, completa y prudente valoración de los criterios personales de evaluación de peligrosidad procesal fijados por el máximo Tribunal, los que deberán ser complementados con la gravedad de la pena probable o impuesta, atendiendo especialmente las circunstancias particulares del caso y los derechos de las víctimas y órganos de pruebas, requiriendo u ordenando las medidas necesarias a estos fines y siempre bajo los parámetros

expuestos en párrafos anteriores con relación a la evaluación conjunta que debe efectuarse respecto de los anteriores incisos 1 y 2 del artículo 281.

En este sentido, y además de la indicación general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los tribunales locales se ha desarrollado una prolífica y detallada jurisprudencia al respecto, que será una guía de suma utilidad para orientar la averiguación que aquí se proyecta, la que se impone de modo previo a cualquier decisión al respecto, bajo la responsabilidad del Fiscal o Tribunal competente para adoptarla, y deberá realizarse de modo sumario y sin tardanza en atención a la materia de que se trata.

Al respecto, y teniendo en cuenta que resulta inviable establecer una casuística inmutable de las circunstancias a evaluar al momento de adoptar una resolución en la materia ya que deben analizarse circunstancias propias relativas a cada imputado, pueden mencionarse a modo de ejemplo los siguientes criterios personales de evaluación de peligrosidad procesal, algunos ya contemplados en el texto proyectado, ellos son: relativos a circunstancias concretas del proceso, por ejemplo, la instancia en que se encuentre la investigación, complejidad de la causa, coimputado prófugo o no individualizado, privación de la libertad por un lapso de tiempo similar al de la pena que se le podría imponer en caso de ser condenado, pronóstico de pena efectiva pero leve, etcétera.

En lo atinente al comportamiento del imputado durante el proceso: brindar datos falsos relativos a nombre, edad –manifestando que es menor-, domicilio, etcétera; capacidad demostrada para eludir los controles del Estado; no concurrir a los actos procesales a los que se lo haya convocado, por ejemplo, en el caso de las pericas, entorpeciendo la investigación; necesidad de dictar orden de captura por ausentarse del lugar de la residencia; eliminación de rastros de la escena del crimen por parte del imputado; alteración de rastro del crimen para que parezca cometido en otro lugar, por ejemplo, traslado del cuerpo de la víctima e instrumentos del delito; actos de intimidación o indebida influencia hacia los testigos, ya sea de forma explícita o a través de ocultas represalias, etcétera; si ha sido declarado en rebeldía o, por el contrario, sometimiento al proceso mientras permaneció en libertad, no haber realizado actos que pudieran afectar los fines del proceso, haberse presentado espontáneamente ante la instrucción, haber reconocido el hecho que se le atribuye, etcétera.

También con respecto a las condiciones personales del imputado: si tiene o no domicilio fijo, grupo familiar -que le podría brindar o no contención-, trabajo estable, arraigo o no en la Provincia de Córdoba, edad avanzada, ser extranjero sin regularizar su situación migratoria, ser adicto o no a las drogas -el voluntario sometimiento a la acción de la Justicia puede verse alterado por la acción de sustancias tóxicas-, padecimiento de alguna enfermedad terminal, elevado poder adquisitivo en conjunción con su elevada posición social, que podría contribuir a solventar y facilitar su fuga y a lograr una vida en clandestinidad o fuera del país o, por el contrario, bajo ingresos económicos que le dificultarían su vida en clandestinidad; demostrado contacto con falsificadores de documentos que podrían colaborar en la simulación, incluso, de su propia identidad, ser funcionario jerárquico en la Administración Pública -le resulta más factible ejercer su poder sobre los demás empleados dependientes para que declaren a favor suyo, que en este caso deja de ser una mera abstracción hipotética el temor que estos le tienen-; poseer preeminencia sobre la víctima o sus allegados –eventuales testigos-; antecedentes del imputado -si carece de ellos o, por el contrario, si posee condena

anterior o procesos pendientes-; situación familiar con menores de edad a cargo y que no pueden ser atendidos por otros familiares, etcétera.

Cabe agregar que las circunstancias señaladas precedentemente deberán ser valoradas aun frente a una condena ya impuesta, aunque no firme, dado que la privación de la libertad, luego de aquélla, continúa siendo a título cautelar y se rige, por tanto, en base al instituto de la prisión preventiva.

No escapa a este análisis el hecho de que de existir condena efectiva privativa de la libertad, los riesgos de fuga aumentan considerablemente, máxime si se tiene en cuenta que estadísticamente las instancias judiciales superiores revocan muy pocas condenas de este tipo, pese a lo cual esta circunstancia deberá ser analizada en conjunto con el resto de las condiciones reseñadas.

Finalmente, señor presidente, señores legisladores, quiero señalar que en el supuesto de corresponder la libertad, se deberá en todo caso requerir u ordenar la aplicación de las previsiones de los artículos 268 y 284 del Código de Procedimiento Penal.

Por otra parte, al proponerse como despacho de los proyectos en tratamiento una nueva redacción en tres párrafos del artículo 281, sin utilizar incisos, corresponde como técnica legislativa correcta que se adecuen algunos otros artículos del citado cuerpo legal, que hacían referencias expresas a los incisos -uno o ambos- del artículo 281.

En ese sentido, y por una cuestión de técnica legislativa, se propone modificar los artículos 269, 272, y 435 de la Ley 8123, Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Córdoba, quitando la mención de la palabra "inciso o incisos" y la cita de los números 1), 2), o ambos, preservándose el resto de la redacción como en la actual legislación vigente.

Antes de terminar este informe, no quería pasar por alto, porque es una valoración que esta Cámara necesariamente tiene que reconocer y tener conocimiento, el trabajo que se ha llevado a cabo en estos dos proyectos que han sido presentados, tanto por parte del bloque de Unión por Córdoba como por el bloque que conduce el legislador García Elorrio, que tuvieron la voluntad de trabajar con todos los legisladores a los fines de encontrar una redacción consensuada que permita que este proyecto pueda ser acompañado absolutamente por la mayoría de los bloques parlamentarios integrantes de este Cuerpo. Por eso, celebro desde el bloque de Unión por Córdoba esta actitud y esta voluntad para dar una respuesta política muy fuerte en un momento expectante en el que nuestra sociedad toda está esperando de nosotros, los legisladores -que humildemente y aunque sea un pequeño aporte seguramente ayudará sobre todo al Poder Judicial-, una herramienta que contemple que la aplicación del fallo de la Corte pueda llevarse a cabo en la medida que corresponda, evitando los excesos que darían lugar obviamente a muchos prejuicios y perjuicios respecto de las víctimas y los testigos.

Por los fundamentos expresados, y en la convicción de que la presente ley contribuirá a consolidar la vigencia de nuestro Estado de derecho y propenderá a mantener un justo y proporcional equilibrio en los derechos y garantías de raigambre constitucional, solicito a mis pares le presten la debida aprobación.

Muchas gracias.



Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.

Sra. Leiva.- Señor presidente: en representación del bloque al que pertenezco, vamos a acompañar el proyecto en tratamiento.

En el análisis de la resolución emitida por la Corte respecto a la prisión preventiva, es claro que en ningún momento estableció o dispuso a través de resolución que se abrieran las puertas de las cárceles y que todos quedaran en libertad. Eso ha quedado muy claro y así es interpretado en el Poder Judicial, una presunción que antes era una presunción “iure et de iure”, hoy pasó a ser una presunción “iuris tantum”.

Entonces, la Corte dice que es necesaria la valoración de otros elementos para el mantenimiento de la prisión preventiva. O sea, analizar cada caso en particular, analizar si la conducta del imputado, efectivamente, elude el accionar de la Justicia y la investigación procesal; hace hincapié en ese tema e, incluso, la Corte manifiesta otros posicionamientos útiles para el no otorgamiento de la libertad y no sólo por considerar la prisión preventiva como una cuestión excepcional. Y así dice que no debe valorarse la cuestión económica al momento del otorgamiento de la libertad, y que las cauciones para este otorgamiento de la libertad deben estar en relación con la cuestión económica del imputado.

Entonces, el Código Procesal Penal, conforme lo establecido en el artículo 281, mantenía elementos que la Justicia, fiscales y jueces de nuestra Provincia podían utilizar –a través de fallos jurisprudenciales- como elementos suficientes, indicios suficientes para mantener la pena privativa de la libertad.

Como por ahí algunos necesitan un empujoncito legal para hacer lo que les corresponde hacer, vamos a acompañar al proyecto, pero entiendo, personalmente, que estaban los elementos dados. No obstante ello, creo que esto clarifica y que le da un poco de seguridad a la sociedad ante el temor de que puedan salir todos en libertad. Lo cierto es que esto no ha pasado, que ante el pedido de muchos abogados litigantes del fuero penal de la eximición o el cese de prisión preventiva no han sido todos otorgados de manera genérica.

Incluso, el presidente de la Asociación de Magistrados ha dicho: “La Corte no dice que está mal la presunción, lo que dice es que “no alcanza”. Y la Corte dice “indague”, y también dice que hay que “analizar”; no dice que hay que liberar. Entonces, por ahí se magnificó la resolución de la Corte.

Pero, creo que la Justicia se tiene que poner las pilas. Le estamos dando los elementos necesarios para mostrar un accionar que la sociedad está exigiendo; incluso, creo que los funcionarios judiciales son también responsables de este análisis que hace la sociedad de la Justicia provincial, y voy a decir por qué.

Miren, hay un caso, como montones de casos: “Arévalo, Luis y otros. Solicito la prisión preventiva de los imputados”. ¿Qué hicieron? Obviamente, el imputado presentó la oposición ante el juez de control, el que ratificó la prisión preventiva, entonces, apelaron ante la Cámara

de Acusación. ¿Qué hizo la Cámara de Acusación?, ratificó la prisión preventiva. Volvió al Fiscal de Instrucción, el que confirmó la prisión preventiva y elevó la causa a juicio. Cuando elevan la causa a juicio se oponen ante el Juez de Control, el juez no le hace lugar, interponen el recurso de apelación, al que no le hacen lugar y, por lo tanto, está en condiciones de juzgarse a ese imputado. Pero he aquí que los imputados, que tenían sobre ellos una prisión preventiva, deben ser liberados, ¿pero saben por qué los tienen que liberar?, porque la Cámara que debía juzgarlos dejó transcurrir el plazo expresamente previsto por el artículo 1º del Código Procesal Penal, que dice que el proceso no puede durar más de dos años y, salvo otras circunstancias, este plazo podrá extenderse hasta un año más. Es decir que tardaron más de tres años en juzgar a ese imputado sobre el que pesaba una prisión preventiva, tuvieron que dejarlo libre.

Entonces, le solicito a la sociedad que reclame a la Justicia la efectiva aplicación de la ley que estamos tratando y que vamos a sancionar, porque solos no podemos. Si la Justicia mira para otro lado, si hace caso omiso a dispositivos legales que claramente le otorgan la facultad de aplicar penas privativas de la libertad, vamos a estar en lo mismo.

Pues bien, señor presidente, por lo expuesto vamos a acompañar el proyecto en tratamiento.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Yuni.

Sr. Yuni.- Señor presidente: queríamos dejar sentada la posición del bloque de la Unión Cívica Radical.

Los aquí presentes no desconocemos que en la República Argentina existen gritos que se elevan pidiendo mayor coerción, mayor uso de la fuerza pública y mayor firmeza de la Justicia y de las Fuerzas de Seguridad para encerrar a los delincuentes.

En principio, no nos pareció conveniente que esta Legislatura adoptara medidas apresuradas que se dirigieran a restringir los derechos constitucionales valiéndose exclusivamente del reclamo, porque aunque algunos resulten genuinos, serios y atendibles, otros, en cambio, son tan anónimos como inquietantes, y sólo pretenden más represión.

La respuesta legislativa a los estados de ánimo de un sector de la comunidad, o incluso de las propias víctimas de delito, debe ser prudente. En tiempo de conmoción social como el actual, ninguna decisión de este Cuerpo Legislativo debe ser mal entendida y utilizarse para alimentar los argumentos de aquellos que, para combatir la ola de delincuencia que azota al país, recurren a la violencia y al desprecio por la vida de los delincuentes.

Merced a sucesivas correcciones, basadas en el diálogo y la disposición de los bloques mayoritarios, se ha logrado la redacción de un texto que se limita y se ajusta a la verdadera naturaleza de la medida de coerción personal que estamos analizando, porque todos sabemos que el instituto de la prisión preventiva es, en nuestro sistema acusatorio, una medida de carácter excepcional dirigida solamente a resguardar la realización normal del proceso para

reconstruir sin interferencias los sucesos y aplicar el derecho sustantivo en la resolución del conflicto penal, y determinar si es factible la pretensión punitiva.

En este marco, señor presidente, adelantamos el voto favorable de nuestra bancada en la convicción que se ha logrado una redacción de consenso que limita la prisión preventiva únicamente a supuestos que indiquen riesgo para preservar la producción de la prueba o entrañen peligro cierto de fuga de los imputados.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Frenicia.

Sra. Frenicia.- Señor presidente: parece que la impostura y la perfidia del bloque oficialista al impulsar este proyecto es total.

Se argumenta defender los derechos de carácter garantista del Derecho, sin embargo, se avanza abiertamente en la presunción de inocencia que debe regir cualquier proceso judicial y, de antemano, condenamos al acusado hasta que se demuestre lo contrario.

Se han explicado largamente numerosos argumentos legales acerca de que, en realidad, no era inconstitucional, que se estaban defendiendo los derechos democráticos, los derechos adquiridos, etcétera, pero a la realidad me remito.

Quisiera saber si alguno de los legisladores presentes se ha preguntado cuántos presos hay hoy en el penal de Bouwer sin tener una sentencia firme en primera instancia, o sin haber comenzado el proceso judicial. ¿Cuántos? Cientos. Sin embargo, ¿cuántos de los grandes delincuentes que sí interfieren en la investigación a través de contactos, amedrentando a testigos, comprando y vendiendo declaraciones y demás, están libres? Todos.

Acá ha estallado el caso CBI, y permítame una reflexión: esto va a ser casi como el escándalo del narcotráfico provincial. ¿Cuántos presos hay por el caso CBI? Ninguno. El Padre Grassi libre, Petrone libre. Entonces, en definitiva, ¿a quién ataca esta reforma de la prisión preventiva para ajustar los criterios y no dejar libres a los delincuentes que azotan a la población? Ataca al último eslabón de la cadena, es decir, a los sectores vulnerables, que están empujados al delito producto de la descomposición social que éste y los gobiernos anteriores, a través de sus gestiones de ajuste, han generado. Es de una perfidia total.

Se habla de épocas de inseguridad creciente. ¿A qué se debe esa inseguridad creciente? Discúlpeme, señor presidente, pero ningún pibe nace "chorro", como dicen los slogans de muchas organizaciones de derechos humanos y organizaciones que luchan contra el Código de Faltas; esa inseguridad creciente se debe a las políticas de ajuste, de miseria y de falta de perspectiva hacia la juventud que impulsan éste y el resto de los gobiernos.

Se habla de la defensa del derecho colectivo a la libre circulación, pero ese derecho solamente vale para las víctimas, no para los pibes de los barrios que son perseguidos con el

Código de Faltas en la mano y detenidos arbitrariamente para llenar planillas y ser torturados en las comisarías; para ellos no vale el derecho a la libre circulación.

Se habla de la defensa de los derechos colectivos por sobre los derechos individuales. ¡Otra impostura! Resulta que los derechos colectivos valen solamente cuando se trata de reprimir a la juventud, a los sectores vulnerables, a los sectores desposeídos y demás, pero no valen cuando se trata de defender un derecho constitucional como el derecho a la huelga; ¡ah, no, ahí no valen los derechos colectivos! Eso es de una arbitrariedad terrible, porque no solamente no combate el problema de la inseguridad –que no es una sensación sino que hay una inseguridad creciente, como dicen los fundamentos- sino que lo agrava. Vamos a seguir poblando las cárceles con pibes pobres y con hombres y mujeres de sectores vulnerables, en un sistema penitenciario que es, realmente, un productor de criminales, porque no hay ningún tipo de reinserción laboral ni social impulsado por este Gobierno; lo que hay es una fuerte presión a quienes están procesados, a quienes están encarcelados, por parte de la Policía en particular y de los funcionarios de la Justicia en general, para que se conviertan en la mano ejecutora de las bandas del crimen organizado.

Esto no solamente viola derechos constitucionales sino que establece una especie de “linchamiento judicial” –podríamos decir ahora que está tan de moda esto de los linchamientos. ¿Por qué digo “linchamiento judicial”? Porque por las dudas lo metemos preso, después vemos si es culpable.

Quiero hacer un paréntesis y una aclaración sobre esto, porque no se ha dicho ni una palabra: condenamos incondicionalmente los linchamientos que se dan en Córdoba y en el país, son el principio de una variante fascizante frente a una creciente inseguridad producto de la política de Gobierno o del Estado. La potestad que se adjudican determinados grupos de hacer justicia por “manos propias” –entre comillas porque en estos actos no hay nada de justicia- y llegar hasta ocasionar la muerte de determinados delincuentes –en la mayoría de los casos se trata de hurto, de motochorros, es decir, delitos menores-, suponiendo que los hayan encontrado in fraganti, sin ningún tipo de proceso judicial condenatorio o probatorio en el medio, es fascizante

Acá se repite el mismo criterio; entonces, rechazamos de plano los linchamientos. Y digo de plano porque muchos funcionarios del Gobierno provincial y del nacional hablaron - inclusive, el Gobernador De la Sota salió a decir “los linchamientos están mal, pero la inseguridad..., dejen que la policía actúe”. ¡De ninguna manera! La Justicia y la Policía deben actuar en función de preservar esta situación de inseguridad, y la respuesta popular de los linchamientos es producto de esta composición. Decir “sí, pero” es un aval implícito a esta reacción popular. ¡No! Señor presidente: condenamos los linchamientos y hacemos un llamado a la sociedad para que vayamos por los verdaderos responsables de esta situación que están en las cúpulas policiales, están como funcionarios del Gobierno, están como empresarios que regentan las grandes redes de narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas, y que tienen como mano de obra barata al último eslabón, es decir, a aquel que linchan en la esquina.

Una última reflexión. No hay igualdad judicial posible sobre la base de una desigualdad real en la cual vivimos el conjunto de los trabajadores. Esta ley tiene un carácter profundo y apunta solamente a encarcelar al ladrón de gallinas, pero de ninguna manera a encarcelar a los

verdaderos delincuentes que, como tienen un abogado caro, como tienen los recursos para financiar, para coimear y para llevar a la larga los procesos judiciales, salen todos libres.

Para atacar la inseguridad empecemos por atacar la desigualdad real sobre la cual se monta este sistema judicial. Terminemos con los salarios de miseria, terminemos con las jubilaciones diferidas que acaban licuando los ingresos de los jubilados, terminemos con el trabajo en negro, terminemos con el trabajo precario, terminemos con los tercerizados, garanticemos un salario mínimo igual a la canasta familiar. Cuando logremos la igualdad material, la igualdad real, recién ahí podremos hablar de una igualdad judicial. Mientras tanto, la Justicia seguirá siendo para unos pocos, es decir, para los que tienen la plata para pagarse los abogados que les garanticen la excarcelación o que no vayan a prisión preventiva.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: “sobre que éramos pocos parió la abuela”. Digo que “parió la abuela” porque teníamos demasiados problemas en Córdoba, problemas locales, genuinos, autóctonos como para que la Corte Suprema resolviera lo que resolvió en el caso Loyos, y nos hizo trabajar en un tema que no pudimos eludir.

Comparto mucho de lo que se ha dicho aquí, de la política integral de cárceles. Comparto -y es mi pelea y mi razón en esta Cámara- obtener un sistema de prevención para tratar de salvar a miles de chicos de los mercaderes de la droga; yo veo eso también, por eso estoy peleando por políticas de Estado que se organicen con tiempo, etcétera.

Pero esto es un hecho “del príncipe” -como decimos los abogados-, una decisión de un Poder del Estado que vino y fulminó el Código de Procedimientos Penales de Córdoba, por lo menos el inciso 1) del artículo 281. En definitiva, vino a decir “con esto no alcanza” y era con lo que nosotros trabajábamos, con lo que trabajaban los jueces de Córdoba, y eso nos obliga a todos a ponernos a estudiar este tema, pero resulta que no estaba en la agenda de nadie.

Si usted me hubiera preguntado hace quince días si nos íbamos a pasar quince días estudiando el artículo 281 del Código Procesal Penal, a mí ni se me hubiera ocurrido porque, en definitiva, es algo que no decidimos nosotros. Y, por supuesto, tiene la característica de toda cosa que viene de urgencia, “de arriba”, que viene como viene, del apuro, que tiene la falta de sistema, es como un hueco que tenemos que tapar, un fallo de la Corte que nos obliga a tapar un hueco y lo tenemos que hacer; esa es nuestra responsabilidad, porque ahí afuera hay un sistema judicial que está esperando una respuesta de este Poder Legislativo.

El tema de las cárceles me interesa mucho más, desde la cuestión de la prevención, hacer que los chicos tengan un proyecto de vida, que terminar trabajando ahora en una norma para que alguno de esos jóvenes no salga. Pero uno no elige las circunstancias, a las circunstancias las eligen otros, y las eligen hasta algunos “lunáticos” como Zaffaroni, porque es un acto de “lunatismo” lo que está haciendo la Corte. ¿Qué quiero decir con esto? Para tener

el sistema procesal penal que propone Zaffaroni –que la verdad es bueno– necesitamos las condiciones de Suecia, pero mientras se acepte que no se tienen las condiciones de Suecia ese sistema no corre.

A mí me enseñaron de chico –y nunca lo aprendí– que todos los extremos son malos, y fíjense ahora, cuando Argentina está más “rota”, más destruida, cuando su tejido social está más “deshilachado”, aparece un exceso de garantismo, hermoso en Suecia. Ya quisiera vivir en Suecia, pero vivo en un país con más del 30 por ciento de su población con necesidades básicas insatisfechas, pasado por 70 mil kilogramos de cocaína al año, con muchísimos problemas y debo adaptarme a las circunstancias reales que tengo.

Señor presidente, hay todo un desarrollo progresivo del Derecho Internacional tendiente a fortalecer el principio de inocencia –existe un desarrollo del artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y del 7.3 de la Convención Americana–, pero también hay un movimiento, tan respetuoso como el anterior y con muchos años de trabajo, para el fortalecimiento de los derechos de las víctimas en los procesos judiciales; y es legítimo que así sea. Ahora bien, creo que si nuestros Tribunales trabajaran más rápido menos problemas tendríamos hoy.

Entonces, se nos juntan dos problemas: por un lado, un desarrollo progresivo del principio de inocencia y, por otro lado, un desarrollo progresivo y muy fuerte de la situación espiritual de las víctimas de los procesos, que no es el problema de la peligrosidad procesal, es el daño a las víctimas. El daño a las víctimas es algo que esta Provincia ya lo insinuó, hay una ley, hay una oficina que trabaja –no sé con cuál presupuesto– para ayudar a las víctimas de los delitos, pero también hay todo un desarrollo internacional destinado a fortalecer el principio de inocencia; por lo tanto, se produce una colisión de dos derechos humanos fundamentales: el derecho a no ser condenado anticipadamente y el derecho de la víctima a no ser revictimizada por caminar las mismas calles con la persona que la violó, la agredió, que le vende la droga a sus hijos.

Las víctimas también forman parte del problema del Derecho Penal. Por ejemplo, hoy nuestro sistema procesal penal permite la presencia de los querellantes, pero no permite que las víctimas tomen decisiones y sean oídas en los procesos de libertad.

Falta mucho por andar; por eso, me parece que esta oportunidad –esto ha sido compartido– es muy buena para que llamemos la atención sobre la situación de las personas que son víctimas de delitos, lo cual no se reduce estrictamente a la peligrosidad procesal porque la presunción de inocencia es derecho humano básico, como lo es también –tal como ha sido definido– el derecho de toda víctima de delito a no ser revictimizada.

A propósito de este debate, aprovecho para decir que a la cárcel de Bouwer siempre me gusta mirarla desde afuera porque no me agrada y cada vez que entro salgo realmente muy apenado por lo que veo, a pesar del esfuerzo de mucha gente que está haciendo las cosas con cariño. Como sucede en todos los órdenes de la vida, son más las cosas que no me gustan que las que sí.

Aquí hay una colisión de derechos: por un lado, el propio de los derechos humanos –de orden internacional– exalta el derecho de toda persona a no ser condenada anticipadamente;

por otro, el derecho de todo ser humano a no ser revictimizado a raíz de un proceso judicial. ¿Cómo se resuelve esto? Les adelanto que la solución de esa colisión se resolverá por otro principio fundamental de los derechos humanos: “el de mayor protección de las víctimas”.

En materia de prisión preventiva, para preservar el principio de inocencia los instrumentos y tribunales internacionales sugieren racionalidad y no arbitrariedad; esta es la fórmula mágica. Pero este no es un principio ni un derecho absoluto, pues el único derecho absoluto es la vida de un inocente; todos los demás derechos que tenemos son relativos porque entran en hipótesis de conflicto. Incluso, hay países que tienen pena de muerte y, por lo tanto, no hay derecho absoluto a la vida; además, uno puede matar en defensa propia, lo que demuestra que no existe el derecho absoluto a la vida, salvo cuando se trata de una persona inocente.

Entonces, me parece muy bueno que hayamos incorporado dentro del artículo 281 –tal como ha quedado redactado– una apreciación, no respecto del riesgo sino del dolor de las víctimas, que pasa a configurar un nuevo elemento a tener en cuenta por parte de los jueces.

Para que vean con qué velocidad avanza el tema del derecho de las víctimas de delitos, me tomé el trabajo de leer algunos documentos internacionales: “Principios fundamentales de justicia para las víctimas de los delitos”, Naciones Unidas, 1985; “Manual de buenas prácticas de justicia”, Naciones Unidas, 1996; “100 reglas de Brasilia” –surgida de la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana– y la resolución de la Comunidad Europea, del año 2012, sobre esta materia.

Estudiando todo este material, encontré la figura de “victimización secundaria”. En tal sentido, expresa la Organización de Naciones Unidas: “No ocurre la victimización secundaria como un resultado directo de la acción delictiva, sino a través de la respuesta de las instituciones y los individuos hacia la víctima”. O sea, cuando el sistema procesal –a través de las instituciones y los individuos– da respuestas inadecuadas hacia la víctima, estamos ante un proceso de victimización secundaria. Más sutilmente, expresa luego: “El proceso completo de la investigación penal y el juicio pueden causar una victimización secundaria”. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez que está investigando a una persona por un delito grave tiene el deber no sólo de cuidar su proceso sino –y esto es lo nuevo– de cuidar a la víctima para que no caiga en un proceso de victimización secundaria a través de decisiones como puede ser la eventual liberación del imputado. Dice: “La victimización secundaria puede ocurrir a través de un desbalance de los derechos de la víctima y de los derechos de los imputados o de los autores del delito”.

Segundo, “la intervención en crisis de toda persona que ha sido víctima de un delito. Se debe ayudar a la víctima a organizar sus pensamientos para reasegurarle que cualquier cosa que sienta es adecuada y que todas y cada una de sus reacciones son naturales”. Se debe asegurar a la víctima que el incidente fue condenado por la sociedad y que la persona victimizada es aún un miembro valioso de esa sociedad. Esto lo dice Naciones Unidas; con toda claridad les dice lo que impone como manual de buenas prácticas a los operadores del derecho: “oigan, tengan cuidado de victimizar o de revictimizar a la víctima”. Entonces, no tiene sentido llevar al extremo el argumento de la inviolabilidad absoluta de la presunción de inocencia a costa de un proceso que sigue dañando a la misma persona que no eligió ser dañada.

Luego viene algo que les va a interesar porque está escrito para los legisladores de todo el mundo. ¿Qué nos piden a nosotros? Dice: “Acciones a desarrollar: mitigar la victimización primaria. Se evitará el incremento del daño como consecuencia del contacto con el sistema judicial”. O sea, los jueces tienen el deber de que el contacto con el sistema judicial no aumente el proceso de victimización. “Se deberá garantizar durante todo el proceso penal la protección de la integridad físico-psicológica, sobre todo a favor de aquellos que corren riesgo de intimidación, represalias o de victimización reiterada”.

Son cosas muy concretas. Lo que tenemos del otro lado del delito, señor presidente, no son juegos de alquimia sociológica, son tan humanos como la persona que agrede y algo hay que hacer por ellos también; eso es racionalidad y no arbitrariedad. Habrá casos y casos, no todos engendran una victimización o revictimización, les estamos dando a los jueces elementos para que usen esto nuevo, que se saquen la anteojera del “daño a su proceso” y que miren el daño de la otra persona que integra el proceso como víctima.

“Se prestará especial interés a la atención de la víctima en los momentos en que sea puesta en libertad la persona infractora”. Fíjese, señor presidente, lo que dice, el momento en que hay que poner en libertad a una persona infractora que ha causado un daño a alguien no es un momento al azar que sucede en el marco de la decisión monárquica de un juez, sino que tiene que tener en cuenta –y le mandan que así lo haga- la situación de la víctima, su espíritu, su aspecto, su sentimiento.

Después dice algo interesante, porque el juez no puede presumir el daño de la víctima, lo obligan a que haga un trabajo interdisciplinario sobre lo que está pasando con esa persona. Esto está en el artículo 41 de la directiva europea, señor presidente: “Se deben adoptar medidas necesarias para proteger los bienes jurídicos de las víctimas y de los testigos. Se atenderá con especial atención en los casos que la víctima esté sometida a un peligro de victimización reiterada o repetida, especialmente en los casos de la delincuencia organizada, menores víctimas de abuso sexual o malos tratos, mujeres víctimas de violencia dentro de la familia o la pareja.

Esto también es derecho humano, esto también es orden para la República Argentina, esto también es costumbre internacional, esto también es derecho progresivo del derecho internacional de los derechos humanos, esto existe. Y ya que nos tenemos que meter en estos temas, me parece muy feliz que se haya puesto una mínima expresión al temor de las víctimas, no al riesgo presumido de la víctima sino al temor real, reverencial, de una mujer que ha sido violada desde los 5 hasta los 15 años por su padrastro, frente a un montón de casos que ya vamos a ir analizando, que son de una gravedad inconmensurable.

Víctima no es sólo el que recibe, el destinatario final de la agresión, víctimas también son los familiares de aquellos a los que les venden droga. Toda esa gente requiere alguna explicación.

¿Qué hacemos ahora? Tenemos dos derechos humanos fundamentales, el derecho de la persona a garantizarle el principio de inocencia, siempre y cuando no se fugue, esté quieto, no hable por teléfono a nadie, y, por otro lado, el dolor de la víctima. Esto ya está resuelto en el derecho internacional, yo no le voy a dar la solución, señor presidente, la solución ya está: donde hay dos derechos humanos en juego, hay que estar a la primacía de la norma más

favorable a la protección de la persona humana. Esto ya está, esto lo aplica la Corte Interamericana de derechos humanos y se llama “Primacía de la Norma más Favorable a la Protección de la Persona Humana”, eso quiere decir que en materia de derechos humanos, la norma que se aplica no es la que está más alta, a veces no es la del tratado, porque el tratado es piso, no es techo, se aplica la norma que más protege. Eso quiere decir.

El artículo 281 de la Constitución de Córdoba ha tenido una referencia especial a la situación de las víctimas, esa norma de derechos humanos adquiere mayor nivel: “primacía de la norma más favorable a la protección de la persona humana”.

Fíjese usted cómo se expresa y se lo digo en dos tratados: la Convención de los Derechos del Niño –acá hay muchos legisladores que les interesa la situación de los niños-, que dice que las disposiciones de la Convención en nada afectará las disposiciones más conducentes a la realización de los derechos del niño y que pueden estar recogidas en el derecho de un Estado parte; yo puedo tener en mi legislación interna de una humilde provincia argentina, legislación de derechos humanos que desplaza la Convención, porque la misma me dice: “si usted tiene algo mejor, úselo”. Eso es lo que se llama el “principio de primacía de la norma más favorable”.

Mire dónde está ese principio, está en el artículo 52 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; en el 23 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres; en el 41 de la Convención de los Derechos del Niño; en el 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos; en el 60 de la Convención Europea de Derechos Humanos; en el 32 de la Carta Social Europea; en el 17 de la Convención Europea para la Prevención de la Tortura y el Tratamiento y Castigo Inhumano y Degradante; y en el 4 del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos. Señor presidente, está en otros lados, esto es ley internacional.

Es decir, hemos introducido estos principios humildemente en la redacción; apresurada si se quiere, producto de las circunstancias políticas, por lo cual tiene razón Savigny, el maestro de la escuela histórica del Derecho, cuando dijo: “el Derecho nace y progresa con el pueblo”, es decir, cuando el pueblo tiene problemas hay que salir de alguna forma a resolverlos.

Señor presidente, no le tengamos miedo a lo que hemos hecho, ¿sabe por qué? Porque la ley internacional que manda todos estos tratados dice: ante la duda razonable, proteja a las presuntas víctimas. Esto está ahí.

Un breve comentario voy a hacer en referencia a otra casuística sobre el tema del narcotráfico. Aprobamos la Ley 10.067, que autoriza a los jueces provinciales –que es lo único que podemos hacer- a perseguir la última cadena de comercialización. Integra la última cadena de comercialización no sólo el señor del quiosco; la integra el distribuidor, el tipo que tiene un regimiento esclavo de gente humilde. O sea, arriba de los quioscos, que hay de dos tipos, está la mano de obra esclava y el empresario del quiosco, arriba de eso hay un proveedor de droga muy fuerte. Este proveedor de droga tiene una actividad profundamente inescindible del quiosco, porque sin él, el quiosco no vende y, generalmente, venden en consignación para el quiosco. Hemos llegado a contar 52 quioscos de un mismo dueño.

Hemos tenido hoy la valentía de indicarle a los jueces y fiscales de esta Provincia qué es lo que podemos hacer, que miren el eslabón de la cadena final, que no es sólo el quiosco, es el que está también un poquito atrás y que, por favor, los guarden en su casa -si los tienen que guardar en prisión domiciliaria- en donde los tengan que guardar, porque esa gente está destruyendo a miles y miles de chicos nuestros.

Les voy a decir una cosa: olvídense del Derecho Penal liberal. El Derecho Penal liberal se fundamenta absolutamente el “principio de inocencia al extremo” -que respeto y bien quiero que me lo cuiden para cuando me llegue el momento de necesitarlo-.

Hoy, frente al crimen organizado, ya no se aplica el Derecho Penal liberal sino el Derecho Penal del enemigo. El quiosquero no es mi enemigo ni el chico que usa el delivery. El enemigo de la sociedad es el señor que abastece todo este mecanismo, esto también está en nuestra ley.

Me despido diciendo que si a la Corte Suprema de Justicia de la Nación le llegase algún día nuestro artículo 281 -escuchen bien- y la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijera que nuestro artículo 281 es inconstitucional, por lo menos en el tema de la revictimización de las víctimas, les recuerdo que dictó un fallo, el 13 de marzo del año 2012, en el que dijo -con mis palabras-: Basta de ponerle trabas al derecho al aborto de una mujer en el caso en que haya sido violada. Que todas las provincias se pongan a hacer protocolos para que este derecho se ponga en marcha. No hace falta que hagan la denuncia; ¿pero cómo?, si fue violada al menos hay que hacer la denuncia para ir sobre el violador y que no pueda seguir violándola. No hace falta la denuncia, basta la declaración jurada de la mujer que diga que la violaron. Ante esto Zaffaroni dijo que sabía que van a fabricar abortos, pero que prefería que se fabricaran abortos a que se revictimice a una mujer, ante el riesgo que una mujer violada tenga que contar ante la policía que la violaron. O sea, esta Corte, que le enseña a Córdoba humanidad y buenos modales, ha antepuesto ante el mero riesgo de victimización de una mujer, la muerte de un chico. ¿Se entiende? Y nosotros lo único que estamos poniendo en entredicho no es la muerte, señor presidente, es que con racionalidad y en protección de las víctimas se deje a esa persona apartada de las mismas calles para evitar el proceso de revictimización.

Felicito a todos los bloques por haber llegado a un acuerdo; había cosas que no se entendían, espero que ahora sí. Y créanme que en lo que hace al derecho de toda persona a no ser revictimizada, hoy hemos hecho un avance en Córdoba, porque lo tendrán que leer.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador De Lucca.

Sr. De Lucca.- Señor presidente, simplemente, quiero dejar asentado nuestro voto negativo a este proyecto de ley.

Por secretaría vamos a acompañar un escrito fundamentando nuestro voto en disidencia.

Gracias.

Sr. Presidente (González).- Se incorporan a la versión taquigráfica los fundamentos solicitados por el legislador De Lucca.

-FUNDAMENTOS-

INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR DE LUCCA

Fundamento voto negativo ley modificatoria sobre prisión preventiva.

De los fundamentos expuestos en el proyecto que modifica el artículo 281 sobre prisión preventiva del Código Procesal Penal de Córdoba, pareciera ser que busca enfrentar dos derechos e intentar primar uno de ellos, esto es el derecho de mantener la libertad durante el proceso, en virtud del principio de inocencia, y el derecho que tienen quienes son víctimas de un hecho típico, antijurídico y culpable con un victimario identificado.

La realidad es que al explicar ese primer motivo, confunde dos planos diferentes en el proceso penal, y que se dan en tiempos diferentes. En el medio de todo, se encuentran las disposiciones de nuestra ley suprema que deben ser respetadas. En pocas palabras, no existe victimario concreto, sin condena que lo declare tal.

Se puede ser generoso, y pensar que las intenciones de este proyecto tiene en miras proteger sólo a las víctimas de un hecho delictivo durante el proceso. Pero no podemos ser cómplices de tremenda demagogia punitiva, ya que es verdad sabida que de antaño el sistema punitivo ha confiscado a la víctima, la ha eliminado del escenario del proceso penal. Este proyecto no hace más que confirmar que el poder político en nuestra Provincia ha pasado a ser poder punitivo. De los fundamentos no se vislumbra las palabras de las víctimas, ni datos estadísticos, ni conceptos de estudios sobre victimología. La realidad es que hoy, las víctimas en los procesos son sólo testigos, con grandes cargas y obligaciones que cumplir, sin ningún protagonismo. Esta realidad no es casual, sino que precisamente marca el surgimiento del Derecho Penal y la monopolización del Estado de la reacción y persecución de los delitos¹.

El día que verdaderamente se tenga en cuenta a las víctimas, restituyéndoles derechos, ese día, pasaremos a tener otro modelo de solución de conflictos², y el poder dejará

¹ La Victimología. Sergio J. CuarezmaTeram, pag 298.

² Que puedan involucrar soluciones alternativas, restitutivas, por ejemplo.

de ser poder punitivo, porque perderá su carácter estructural, que es la confiscación de la víctima.³

A partir de este análisis, solo se puede pensar que este proyecto presentado, con escuetos fundamentos, solo fueron pensados al calor de la criminología mediática, creando la realidad de un mundo de personas decentes frente a una masa de criminales identificada a través de estereotipos, estas ideas aplicadas a las políticas de seguridad nos lleva a pensar que en la cárcel están detenidos “los malos” de la sociedad, por lo cual vivimos en la fantasía de que si hay más detenidos estamos en una sociedad más segura, gran falacia comprobable desde la creación de las cárceles y de la realidad actual de las mismas, como se advierte en el Informe Provincial 2013 “Mirar tras los muros: situación sobre los DDHH de Personas Privadas de su Libertad” el cual dice que del porcentaje de presos preventivos, un número considerable de ellos serán absueltos o sobreseídos, lo que nos lleva a afirmar que nuestras cárceles cuentan con presos para nada, constituyéndose la prisión preventiva en una pena adelantada perdiendo su naturaleza cautelar.

En este marco de ideas nos atrevemos a afirmar que la peligrosidad procesal de la prisión preventiva muta en la práctica en una peligrosidad mediática y política, debido a que los jueces y fiscales utilizan aquella medida cautelar para protegerse de la presión social fomentada por los medios de comunicación, la presión de los políticos y sus propias cúpulas, configurando así la llamada peligrosidad judicial, que será el grado de peligro que una liberación, absolución o excarcelación puede depararle al juez.

En este orden, es que la temática de la prisión preventiva no debe ser analizada de forma aislada sin datos del funcionamiento penal, del sistema carcelario, de la forma de actuar que tiene nuestra justicia, de los efectos del encierro en los imputados y en el personal penitenciario (prisionización y carcelización), de los actuales conflictos sociales, de las voces de los protagonistas, en definitiva, no puede ser analizada sin seriedad y compromiso por una sociedad verdaderamente justa, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos de todos y todas. Por ello repetimos, el debate sobre la reforma de la prisión preventiva debe ser tomado con absoluta seriedad y compromiso, y para llegar mínimamente a ese objetivo, el debate debe estar cargado de pluralidad de voces que representen a los sectores que el tema involucra (organizaciones sociales, ex presos, universidades, colegios profesionales, entre otros) y no ser una ley express.

Si existe compromiso en la lucha contra la delincuencia y en aportar a una sociedad más justa, se debe tener en claro que el no reconocimiento de las garantías procesales como el principio de inocencia, implican mayores errores de carácter judicial, mayor arbitrariedad, mas ámbitos de tortura, mayor corrupción y la destrucción de las instituciones, generando la peor de las inseguridades que podemos sufrir, la de encontrarnos frente a un estado cordobés convertido en delincuente.

La Legislatura debe saber comprender y no ser víctima ni cómplice de las legislaciones de emergencia, que surgen como consecuencia de la alarma social, sin debates serios, con falta de fundamentos concretos que reflejen las situaciones que buscan tratarse.

³ En Torno a la Cuestión Penal. Zaffaroni, Eugenio Raul. 2005. Pag 11-12.

La sociedad entera debe saber ver y advertir que la legislación penal no es un talismán con poderes mágicos, ni mucho menos un instrumento con el cual procurarse popularidad política y electoral.

Como ciudadanos debemos exigir y velar porque los poderes del Estado lleven adelante sus funciones respetando a la legalidad de las mismas y, por sobre todas las cosas, respetando la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos que son ley suprema.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.

Sr. Birri.- Gracias, presidente: me quedo más tranquilo con lo expresado por el miembro de esta Legislatura que me antecedió en el uso de la palabra –así como la legisladora Frenicia-, para no correr el riesgo de ser el único en no ser felicitado por el legislador García Elorrio.

En rigor de verdad, creo que la exposición del legislador al que he hecho referencia, más allá de las diferencias o discrepancias que pueda tener con su argumentación, ha calificado indudablemente esta discusión legislativa. Es verdad, creo que se produce en un momento temporalmente inoportuno, al punto tal que viéndoles los rostros a ustedes, y por expreso pedido de la legisladora Montero, voy a abreviar drásticamente una exposición que tenía previsto realizar de una manera extensa, con doctrinas y jurisprudencias nacionales e internacionales que justificaban mi argumentación.

Solamente quiero decir que se trata de un tema de singular importancia; quizás no lo adviertan tanto, o sí, porque de modo alguno quiero menospreciar la capacidad de reflexión de aquellos legisladores que no están formados en Derecho, pero seguramente que para aquellos que sí lo estamos se trata de una discusión de suma importancia legislativa, procesal y social.

El tratamiento de este proyecto abre, nada más y nada menos, que una discusión que presenta la frontera, por ejemplo, entre la cárcel y la libertad para ciudadanos que si bien pueden estar sometidos a proceso penal aún no están condenados y donde, por lo tanto, tiene vigencia en su máxima expresión el principio de inocencia.

En verdad, por desinteligencias de las que me hago cargo, tal vez en una inadecuada observación del Orden del Día, tenía el convencimiento de que este debate se iba a dar la semana próxima, por lo que no pude aportar lo que hubiera querido en el debate en comisión. Independientemente de eso, creo que estamos perdiendo una extraordinaria oportunidad para discutir con rigor científico, con análisis técnicos, con la profundidad que el caso merece, una reforma integral del trascendental instituto del sistema procesal de la Provincia de Córdoba que es el de la prisión preventiva.

A mi juicio, y por el modus operandi –que más de una vez he reprochado- en el que suele caer el bloque oficialista de Unión por Córdoba, muchas veces gobernando y legislando más con las encuestas en las manos que con un criterio de rigor técnico, o más mirando la

coyuntura que la profundidad del tema, tengo la sensación que, más por una reacción casi espasmódica que por un adecuado tratamiento de este tema, estamos dejando pasar una excelente oportunidad para discutir no sólo una reforma profunda del instituto de la prisión preventiva, sino también una reforma del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba.

Brevemente diré que han transcurrido más de 20 ó 25 años desde el inicio de los procesos de reforma de los Códigos Procesales Penales de la República Argentina, desde una mirada no solamente jurídica sino también desde el rol que tiene el Poder Judicial, pero donde particularmente la prisión preventiva –donde hubo ríos de tinta, pero casi siempre desde un marco teórico- no ha tenido una adecuación o una actualización en el marco procesal jurídico de las distintas legislaciones del Derecho Comparado argentino, como creo que el tema lo merece.

No voy a hacer una contextualización de este instituto -ya lo ha hecho el miembro informante de Unión por Córdoba-, solamente voy a referir que, por ser una herramienta de extrema violencia y de grave afectación a los derechos, la prisión preventiva es objeto permanente de cuestionamientos de legitimidad desde un paradigma de respeto estricto a los derechos fundamentales. Al punto tal que en la práctica, en la jerga jurídica o tribunalicia, muchas veces se identifica a aquellos que son sometidos a encierros en virtud de una resolución de prisión preventiva como “los que están presos por las dudas”.

Sobre la situación en Córdoba, hay un informe que me merece confianza en el que se realizó centenares de entrevistas a detenidos, de los cuales el 68,58 por ciento estaba en calidad de procesado, mientras que el restante 31 por ciento estaba condenado, y de éstos últimos sólo el 18 por ciento estuvo en libertad hasta el momento de la condena.

Este informe también dice que el 60 por ciento dijo haber sido visitado en la unidad por su defensor, el 68 por ciento manifestó no haber estado presente en la audiencia en la cual se decidió la privación de su libertad, mientras que el otro 68 por ciento también dijo que no se leyó la resolución; el 77 por ciento de los entrevistados aseguró que no se les explicaron los motivos de la resolución por el cual se los privaba de la libertad, el 82 por ciento aseguró no haber sido escuchado por el juez, y el 66 por ciento afirmó no haber tenido posibilidad de buscar información para evitar la prisión preventiva; por su parte, el 40 por ciento dijo no haber podido apelar la resolución, y el 45 por ciento dijo no haber tenido tampoco la posibilidad de solicitar la excarcelación proponiendo alguna medida alternativa.

En un trabajo publicado en un medio gráfico de la ciudad de Córdoba se ha dicho que los informes de distintos organismos internacionales refieren que en Argentina, y en América Latina en general, padecemos –y viene a cuenta de los datos que acabo de dar- de una creciente desconfianza en el sistema, en la politización de los tribunales, en un funcionamiento parcial, en la inhabilidad para resolver casos, en problemas de acceso a la justicia y de impunidad, entre otros.

No tengo dudas que revertir este estado de cosas, en donde se pone severamente en tela de juicio el funcionamiento tanto de las fuerzas de seguridad como de la Justicia va a ser de muy difícil resolución sin encabezar un debate a fondo, donde podamos pensar y planificar estratégicamente cómo mejorar la capacidad de dar respuestas por parte del sistema de

justicia y como hacer más eficiente la tarea de prevención e investigación de los delitos, entre otros temas.

Si me van siguiendo son todas razones y valoraciones que están muy lejos de ser logradas con el criterio con el cual se ha analizado y se va a votar un proyecto de ley de la trascendencia que tiene la modificación del instituto de la prisión preventiva.

Fíjense que el último informe publicado por el PNUD sobre seguridad ciudadana y justicia nos indica, en las cifras a las que recién hacía referencia, que en nuestro país el 59 por ciento de los detenidos se encuentra sin proceso y sin condena, mientras países como Brasil y Chile presentan mejores indicadores, estos porcentuales son un halo, hablan de una absoluta distorsión del sistema procesal penal en la República Argentina y en la Provincia de Córdoba.

En general, la conclusión es que existe en nuestra región un uso generalizado y desmedido de la prisión preventiva, con graves consecuencias sociales, que son complejas y difíciles de superar, por caso la estigmatización, la pérdida de empleos, crisis familiares, entre otros, que lejos están, por supuesto, de ayudar a mejorar la situación social y a bajar la criminalidad.

Se ha creado e incorporado en el proyecto de ley en tratamiento un supuesto -que lo incorporó el legislador García Elorrio- que, a mi juicio, resulta absolutamente incompatible con el Estado de Derecho actual y el principio de inocencia, generando una suerte de principio de culpabilidad encubierto, cuya médula reposa en el ánimo de la víctima y de los testigos, al que -adelanto opinión- el Estado tiene la absoluta responsabilidad de proteger y arbitrar las medidas que sean necesarias para evitar su revictimización.

Fíjense ustedes que con esta redacción ya no importa si el sujeto que está investigado -no condenado- por la comisión de un delito, trabaja, si se educa, si tiene familia constituida, ya no importa si cumple a rajatabla con los reglamentos carcelarios y si se esmera por mejorar como ser humano; ya no importa ello como atenuante, en función de esta redacción, sino que todo depende del ánimo de la víctima o de los testigos. Y fíjense qué forma tan perversa de legalizar la venganza con este artículo o con esta redacción en los momentos que vive la sociedad, y estoy absolutamente convencido de que más allá de determinados humores coyunturales necesita otras señales del poder político. ¿Qué víctima -me pregunto- de un hecho delictivo -y me incluyo también por haberlo sufrido- no siente temor por el hecho cometido, así sea menor; la víctima de un robo de una bicicleta, la víctima de un robo con un arma que después se demuestra que es de juguete.

No sé si ustedes han advertido la enorme ventana que se abre para convertir prácticamente a la prisión preventiva en un principio general y al mantenimiento de la libertad, que no es ni debiera serlo, en una excepción. Diría que es casi peor que la aplicación de la teoría Lombrosiana, en donde por lo menos se necesitaba determinados rasgos físicos del imputado o del supuesto delincuente para determinar su responsabilidad.

La verdad es que esta Legislatura está haciendo un enorme esfuerzo para remover un obstáculo que tiene que ver con valoraciones que no sean objetivas, que no respeten el principio de legalidad, que no respeten el principio de proporcionalidad para removerlos; vamos por caso al Código de Faltas, donde no solamente distintos legisladores -entre los que

me incluyo- sino el propio Gobernador de la Provincia de Córdoba ha venido con una propuesta de modificar la figura del merodeo por su altísimo nivel de subjetivismo, por violentar el principio de legalidad, por, en definitiva, terminar aprehendiendo a un sujeto en función “del ojo de buen cubero” de un policía. Sin embargo, difícilmente con esta redacción vayamos a dar un paso adelante en los términos que parecían que...

Sr. Presidente (González).- Señor legislador Birri: el legislador García Elorrio le solicita una interrupción.

Sr. Birri.- En realidad, estoy concluyendo.

Fíjense qué delitos van a quedar a salvo de esta enorme ventana que se abre con esta redacción: “todos aquellos hechos que no infunden miedo”. En todo caso, son los menos, pero fíjense, son los delitos económicos, los de guante blanco, que son aquellos que no generan miedo sino que generan bronca.

Creo que Petrone, que CBI no van a estar alcanzados por esta redacción; pero sí van a estar alcanzados aquellos imputados de hechos graves, como puede ser un hecho contra la vida, pero también van a estarlo todos aquellos marginados de la sociedad, todos aquellos que cometen hechos de desapoderamiento o que están imputados por la comisión de hechos de estas características, como son los imputados por hechos de escaso monto.

Fíjense que la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, en un fallo que me parece que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ha dicho que esta forma de hacer política criminal claramente redundante en avasallamientos concretos de derechos fundamentales. Aunque discutidos, estos criterios de prevención del delito sólo pueden tener el principio de legitimación a la hora de aplicar la pena, ya que están íntimamente relacionados con los fines que ésta pueda tener. Si se los utiliza para pronunciarse sobre la procedencia de la prisión preventiva, se está confesando explícitamente que la medida cautelar constituye un adelanto de la pena y se aplica para que se verifiquen sus fines. Esto no puede ser posible dentro del esquema que existe en la República Argentina, que entiende que la prisión preventiva debe funcionar únicamente en la última instancia de garantizar los fines del proceso, la averiguación de la verdad y la aplicación de la ley material.

Ustedes saben que por aplicación del principio de la proporcionalidad, el encarcelamiento en Córdoba –según todos los códigos del sistema procesal de la República Argentina- no se aplica a los delitos cuya condena pueda ser de ejecución condicional, excepto a partir de la publicación de este proyecto si se convierte en ley, excepto si la víctima o el testigo sienten miedo.

Señor presidente: con absoluto convencimiento creo que esto en nuestro sistema no se puede sostener. No me pongo a discutir ni siquiera las buenas intenciones de quienes hayan propuesto dar una señal clara a la sociedad de que el delito no quede impune, de evitar de todas las formas posibles –dentro del marco de la ley- la revictimización.

Pero creo que por más ponderables que sean estos esfuerzos y esta voluntad, no se puede hacer a cualquier costa. Creo que esta figura, que está librada a la discrecionalidad, por más respetable que sea en su dolor la víctima o el testigo, tiene serios riesgos de ser declarada inconstitucional cuando se vaya a plantear el tema concreto, y si pretendemos legislar y dar respuesta a la sociedad sobre cómo combatir el delito, sus causas y sus consecuencias, no lo podemos hacer sobre la vulneración de principios y conceptos de raigambre constitucional, como la libertad, aun en este momento.

No voy a votar favorablemente este proyecto, pero sí me comprometo, señor presidente -porque sería una oportunidad absolutamente perdida el que este debate concluya aquí- a trabajar -como lo vengo haciendo- sobre una reforma integral del Instituto de la Prisión Preventiva, sobre una reforma del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba en donde podamos trabajar sobre la base amplia de lo que son las medidas cautelares, donde podamos incorporar mecanismos y herramientas de medidas sustitutivas y alternativas, en donde tomemos -en esto le doy la "derecha" al Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba- como base de trabajo la experiencia piloto de San Francisco, en donde podamos avanzar en la experiencia de oralizar el procedimiento, y en donde lo hagamos más eficaz y productivo. A esto sí me comprometo, señor presidente, pero no a votar este proyecto.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: le solicité una interrupción al doctor Birri por si no habían quedado en claro dos cosas. Primero, este no es un elemento dirimente autónomo, el de las víctimas integra todo un conjunto de lo que el miembro informante ha planteado en lo que hace a la cuestión de los indicios; y, en segundo lugar, las normativa internacional no imagina esto como un arbitrio caprichoso del juez; exige un estudio técnico multidisciplinario, como lo expliqué. Para que esto sea realmente operativo, un equipo técnico multidisciplinario tendrá que ver la situación de la víctima y la del victimario, ubicarse en la situación concreta y sobre eso expedirse.

Sr. Presidente (González).- Voy a poner en consideración en general los proyectos compatibilizados 13619 y 13620, tal como fueran despachados por las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de artículo.

-Se vota y aprueban los artículos 1º al 4º, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el proyecto en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados Fuera de Término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Proyectos de declaración 13748 al 13754, 13756 al 13758, 13760, 13761, 13763 y 13765 al 13767/L/14.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos: 13447, 13710, 13715, 13716, 13723, 13727, 13729, 13730, 13733, 13739, 13740, 13741, 13744, 13745, 13748, 13749, 13750, 13751, 13752, 13753, 13754, 13756, 13657, 13758, 13760, 13761, 13763, 13765, 13766 y 13767/L/14, sometiéndolos a votación, conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.

En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.

Se deja constancia del voto negativo de la legisladora Frenicia para el proyecto 13716.

No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Gribaudo a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.

– Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.

– Es la hora 22 y 15.

Dra. Silvana Sabatini

Directora del Cuerpo de Taquígrafos